



[Cambio Civilizatorio y Buen Vivir](#)

[Economía Crítica](#)

[Alternativas](#)

[Resistencias](#)

[Diversidades](#)

[Feminismo](#)

[Nosotras](#)

[Portada del sitio](#) > [Resistencias](#)

20-07-2012

Revista digital

Junto a Paraguay ¡América Latina Resiste!

[fedaeeps](#)

Desde hace un mes, la resistencia paraguaya y latinoamericana, al igual que múltiples gobiernos, organismos regionales, entidades internacionales, actores políticos, y muchos otros/as, no cesan de denunciar con firmeza el golpe de Estado que depuso al Presidente Constitucional Fernando Lugo, para imponer el gobierno de facto de Federico Franco.

Varios análisis y posicionamientos han identificado, además, en este hecho, el reciclamiento regional de tentaciones autoritarias derechistas que, coincidentes con las pretensiones de control de los Estados Unidos, buscan nuevas apariencias para imponerse y frenar los procesos y propuestas de cambio que predominan en Latinoamérica.

Por eso mismo, la puesta en escena del “golpe parlamentario” paraguayo no puede legitimarse. Es eso que mueve tanto al pueblo en resistencia, como a los organismos regionales, tales como la UNASUR, el MERCOSUR y la ALBA, que no sólo han condenado esa ruptura con la democracia, sino que sancionaron el hecho de distintos modos, con el convencimiento unánime de que “dictaduras nunca más”.

Y, como Paraguay es Latinoamérica y Latinoamérica es Paraguay, presentamos a continuación algunos de los numerosos aportes para el análisis y la acción, compartidos desde distintas autorías en este mes.

Contenido:

- ▶ 1. Análisis del golpe en Paraguay
- ▶ 2. Transnacionales y el golpe en Paraguay
- ▶ 3. Comunicación y resistencia
- ▶ 4. El golpe en Paraguay en el contexto regional
- ▶ 5. Pronunciamientos y documentos sobre el golpe en Paraguay

Artículos y documentos de Fernando Lugo, Frei Betto, Joao Pedro Stedile, Immanuel Wallerstein, Ricardo Canese, Marco Consolo, Carlos Cáceres, Jorge Zárate, Juan Díaz Bordenave, Luis Ortiz Sandoval, Daniel Cassol, César Romero, Ariel Zak, Aristides Ortiz, Sergio Ferrari, Paí Oliva, Luis Lezcano Claude, Silvio Núñez, Jorge Gonzalez, Gustavo Torres Grossling, Augusto dos Santos, Washington Uranga, Rubén Ayala, Gonzalo Fernández, Mark Weisbrot, Claudia Korol, Raúl Zibechi, Eric Toussaint, Abel Irala, Ernesto Espeche, Natalia Brite, Frida Modak, Marco A. Gandásegui, Isaac Bigio, Alejandro Torres Rivera, India Juliana, Alai, E'a, Alba-TV, América XXI, FSA, CLOC-Vía Campesina, MMM, CONAMURI, UNASUR, ALBA-TCP.

Compilación de artículos: FEDAEPS

Diseño de portada: Verónica León Burch

Edición electrónica: www.fedaeeps.org

Quito, 20 de julio de 2012

La responsabilidad de lo expresado en cada artículo es exclusiva de sus autores. El contenido de esta publicación puede reproducirse citando la fuente.



Más allá del cuerpo: el feminismo como proyecto emancipador

Fedaeps - Fundación de Estudios, Acción y Participación Social

Av. 12 de Octubre N18-24, oficina 203, Quito, Ecuador • (593 2) 255 9999 • info@fedaeps.org

Mensaje del Presidente Lugo

Paraguay: ¡No a la violencia del régimen ilegítimo y golpista!

El juicio político del 21 y 22 de junio se originó en un hecho de violencia en Curuguaty que dejó 17 muertos y que fue parte de una conspiración para desestabilizar al Poder Ejecutivo.

Propusimos desde la Presidencia la constitución de una comisión especial de investigación seria de lo ocurrido con acompañamiento de organismos internacionales. Sin embargo, la primera medida del régimen encabezado por Federico Franco fue suspender esa iniciativa, la que despierta la sospecha de toda la nación de que no les interesa aclarar aquellos hechos luctuosos.

El actual es un régimen originado en la violencia y frente a ello hemos realizado desde un comienzo un llamado al pueblo a mantener la calma, evitar las provocaciones y la violencia. Eso de nuestra parte, pero hemos encontrado violencia y persecución de parte de ellos.

Ni al Presidente Fernando Lugo ni al senador Filizzola, hace más de quince días, la Mesa del Senado ha entregado hasta el presente el registro grabado de las sesiones y la sentencia con las razones de la destitución del presidente constitucional, pese a que se han hecho varios pedidos.

Los senadores Carlos Filizzola y Sixto Pereira están siendo amenazados por senadores golpistas con la suspensión por haberse opuesto al juicio político.

En el SENAVE (órgano de control de las semillas) el nuevo presidente, un vendedor de agrotóxicos, militante del PLRA, ha echado a más de cien funcionarios con la acusación de “luguista”.

En Itaipu Binacional, el sindicato controlado por Honor Colorado, STEIBI, en alianza con el actual director general paraguayo, dirigente del PLRA, anuncia el despido de 300 funcionarios con la acusación de ser “zurdos”.

El nuevo régimen trató de asaltar la TV Pública, lo que generó una heroica defensa de sus funcionarios. Pero ya se iniciaron también las amenazas para dejar de resistir e iniciaron despidos masivos.

En varios ministerios más recibimos denuncias en igual sentido.

Los despidos por motivos ideológicos creíamos eran prácticas del pasado estronista. Vuelven ahora de manos de la cúpula del PLRA.

El nuevo régimen presentó con clara intención intimidatoria un video de muchos años atrás donde aparecen líderes políticos, como el actual senador Sixto Pereira y el gobernador de San Pedro Jose Pakova Ledesma.

Desde varios espacios, los golpistas anuncian acciones contra el Presidente Lugo.

Es decir, no solamente se han violado principios fundamentales del derecho para poder implementar un juicio político amañado, sino que ahora continúan las ilegalidades con persecuciones y atentados a la gente que resiste pacíficamente y se busca amedrentar a aquellos dirigentes políticos que no han claudicado en la defensa de la democracia paraguaya.

Son estos algunos de los hechos que convocan a la opinión pública internacional y nacional, a todos los y las demócratas de la región y del país, a las instituciones internacionales y regionales a no ceder en la denuncia para impedir que el atropello contra la Democracia y la Constitución paraguaya resulte impune.

Muchas gracias.

Fernando Lugo

Paraguay, democracia falsificada

Por Frei Betto

¿Usted compraría güisqui o un bolso Louis Vuitton contrabandeados del Paraguay? Seguro que desconfiaría de su calidad. Pues eso vale también para la “nueva democracia” impuesta por el golpe que derribó al presidente Fernando Lugo.

El país fue gobernado durante 61 años por el Partido Colorado, al que pertenecía el general Stroessner, y al que está afiliado también el actual presidente golpista, Federico Franco. Después de 35 años bajo la dictadura de Stroessner el pueblo paraguayo eligió a Lugo presidente en abril del 2008. Estaba yo en Asunción y lo acompañé a votar. Había esperanza de que el país, rescatado para la democracia, habría de reducir la desigualdad social.

El nuevo gobierno se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas de campaña, como la reforma agraria, y distanciarse de los movimientos sociales. El 20 % de los propietarios rurales del país son dueños del 80 % de las tierras. Hay que incluir en la cuota a los “brasiguayos”, terratenientes que expulsaron a pequeños agricultores de sus tierras para expandir allí sus latifundios.

Falló después al aprobar la ley antiterrorista y la militarización del norte del país, desarticulando los liderazgos de campesinos y criminalizando a los movimientos sociales. Tampoco supo depurar el aparato policial, herencia maldita de Stroessner.

En juicio sumario, el 22 de junio el Congreso destituyó a Lugo, sin permitirle un amplio derecho de defensa. Es el llamado “golpe constitucional”, adoptado por los EE.UU. en Honduras, y ahora en el Paraguay. A la Casa Blanca le preocupa el progresivo número de países latinoamericanos gobernados por líderes identificados con los anhelos populares e incómodos para los intereses de la oligarquía.

Al contrario de Zelaya en Honduras, Lugo ni siquiera pensó, al ser apartado, en convocar a los movimientos sociales para presentar resistencia, aunque contase con la solidaridad unánime de los gobiernos de la UNASUL.

Es el segundo sacerdote católico elegido presidente de un país en el continente americano. El primero fue Jean-Bertrand Aristide, que gobernó Haití en 1991, de 1994 a 1996, y del 2000 al 2004. Ambos decepcionaron a sus bases de apoyo. No supieron llevar a la práctica el discurso de la “opción por los pobres”. Dubitativos delante de las élites, a las que hicieron importantes concesiones, no confiaron en las organizaciones populares.

Los obispos paraguayos apoyaron la destitución de Lugo. Y el Vaticano los respaldó. Lo cual no sorprende a quien conoce la historia de la Iglesia Católica del Paraguay y su complicidad con la dictadura de Stroessner, cuando los campesinos eran masacrados y los opositores políticos torturados, exiliados y asesinados.

La lógica institucional de la Iglesia Católica juzga como positivo a un gobierno que la favorezca, y no que favorezca al pueblo. Exactamente lo contrario de lo que enseña el Evangelio, para el cual el derecho de los pobres es el criterio prioritario al evaluar cualquier ejercicio de poder.

La caída de Zelaya y de Lugo demuestra que la política intervencionista de los EE.UU. continúa. Ahora con una nueva modalidad: valiéndose de artimañas legales para promover juicios sumarios. Aunque la última tentativa de golpe, en el 2002, al presidente Chaves, de Venezuela, no dio resultado. Al contrario, toda la América Latina reaccionó en defensa de la legalidad y la democracia.

De todo esto les queda una importante lección a los gobiernos progresistas de Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y a los vacilantes como El Salvador y Perú. Elección no es revolución. Cambian los dirigentes pero no la naturaleza del poder ni el carácter del Estado. Ni suprime la lucha de clases. Por tanto hay que asegurar la gobernabilidad en el torbellino de esa paradoja. ¿Cómo hacerlo?

Hay dos caminos: a través de alianzas y concesiones a las fuerzas oligárquicas o mediante la movilización de los

movimientos sociales y la implantación de políticas que se traduzcan en cambios estructurales.

La primera opción es más seductora para el elegido, aunque más fácil de quedar vulnerable a la “mosca azul” y acabar cooptado por las mismas fuerzas políticas y económicas anteriormente identificadas como enemigas. La segunda vía es más estrecha y ardua, pero presenta la ventaja de democratizar el poder y convertir a los movimientos sociales en sujetos políticos.

La primavera democrática en que vive América Latina puede transformarse dentro de poco en un largo invierno, en caso de que los gobiernos progresistas y sus instituciones como UNASUR, MERCOSUL y ALBA no se convenzan de que fuera del pueblo movilizado y organizado no hay salvación. (Traducción de J.L.Burguet)

Las mentiras paraguayas de las elites de Brasil

[Joao Pedro Stedile](#)

Apenas había terminado el golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo y flamantes voceros de la burguesía brasileña en el coro salieron a defender el golpe de Estado.

Sus argumentos eran los mismos de la corrupta oligarquía del Paraguay, repetido también en forma articulada con otros derechistas de todo el continente. El juicio político, aunque tan rápido, había estado bien. No importa si los motivos alegados eran verdaderos o justos.



Fueron repetidos argumentos paranoicos de la guerra fría: “El Paraguay se salvó de la guerra civil” o “Paraguay se salvó del terrorismo de los sin tierra.” Si la sociedad paraguaya estuviese dividida y armada, ciertamente los defensores del Presidente Lugo no aceptarían pacíficamente el golpe de Estado.

Curuguay, que costó la vida a siete oficiales y 11 sin tierra, asesinados, no fue un conflicto de tierras tradicional. Sin que ninguno de los dos bandos estuviese dispuesto, hubo una masacre indiscriminada, claramente diseñado para crear una conmoción nacional. Hay indicios de que se trató de una emboscada de la derecha paraguaya para culpar al gobierno.

El conflicto fue el principal argumento utilizado para deponer al presidente. Si este criterio se utiliza en todos los países de América Latina, Fernando Henrique Cardoso será depuesto por la masacre de Carajás. O el gobernador de Sao Paulo, Alckmin, por el desalojo de Pinheirinho.

Paraguay es el país de mayor concentración de la tierra en el mundo. De sus 40 millones de hectáreas, 31,086,893 de hectáreas son de propiedad privada. Los otros 9 millones siguen siendo tierras públicas en la región del Chaco de baja fertilidad y la incidencia del agua. Sólo el 2% de los propietarios son dueños del 85% de todo el país. Entre los grandes terratenientes o propietarios de la tierra en el Paraguay, los hacendados extranjeros poseen 7,889,128 hectáreas, el 25% de las haciendas. No hay paralelismo en el mundo: un país que ha “renunciado” pacíficamente a los extranjeros el 25% de su territorio cultivable!. De esa área total en manos de extranjeros, 4.8 millones de hectáreas en pertenecen a brasileños.

En la base de estructura minifundiaria hay 350,000 familias, pequeños campesinos y terratenientes medianos. Alrededor de cien mil familias sin tierra. El gobierno reconoce que desde la dictadura de Stroessner (1954-1989) fueron entregados a los agricultores locales y extranjeros en torno a 10 millones de hectáreas de tierras públicas de manera ilegal y corrupta. Es en estas tierras que los movimientos campesinos en Paraguay reclaman una revisión.

Según el censo de Paraguay, en 2002 había 120,000 brasileños en el país sin la ciudadanía. De éstos, 2,000 propietarios controlan áreas superiores a un mil hectáreas y están dedicadas a la producción de soja y algodón para las empresas transnacionales como Monsanto, Syngenta, Dupont, Cargill, Bunge ... Todavía hay un sector importante de los propietarios medianos y un gran número de brasileños sin tierra viven allí como trabajadores. Estos son los brasileños pobres que la prensa y la sociología rural han denominado “brasiguayos”.

El conflicto principal de la sociedad paraguaya y de los campesinos paraguayos es para recuperar los 4,8 millones de hectáreas usurpadas por los agricultores brasileños. De ahí la solidaridad de clase de los ruralistas brasileños que se manifestaron inmediatamente contra el gobierno de Lugo y a favor de sus colegas usurpadores

Franco, el nuevo Stroessner

Por Ricardo Canese

Alfredo Stroessner fue recibido el 4 de mayo de 1954 –y hasta algunos meses después– con júbilo por personas con trayectoria democrática de toda una vida. El mismísimo Augusto Roa Bastos, nuestro principal escritor nacional y bárbaramente perseguido por la dictadura stronista, le dedicó un poema que aplaudía al nuevo gobierno –dictadura– en sus inicios. Indudablemente, Roa Bastos se equivocó, si bien su apoyo a la incipiente dictadura fue una carga moral que le pesó de por vida y era algo de lo que no quería hablar, por la profunda pena que le causaba. Otros que fungen hoy de demócratas, apoyaron públicamente al dictador Alfredo Stroessner por años e incluso décadas y, cuando la misma ya era evidente que se acababa, se volvieron furibundos “demócratas”.

La actual mayoría parlamentaria, producto de las “listas sábana”, perpetró el viernes un auténtico golpe de Estado parlamentario. La época de los cuartelazos ya pasó de moda definitivamente. Hay países con democracia consolidada donde nunca se producirá un golpe de Estado, incluso en la mayoría de los países de nuestra anteriormente inestable Latinoamérica.

Pero, en el Paraguay, como constatamos lamentablemente, pueden darse golpes muy similares al que hizo Hitler en la cultura Alemania hace unos 80 años, quien también concretó un golpe parlamentario. En contra del gobierno de Fernando Lugo no se presentó prueba alguna como lo confiesan impudicamente los diputados que presentaron y aprobaron un remedo de acusación en el plazo de tan solo dos horas. El Senado dio menos de 1 (un) día a nada menos que al Presidente de la República para ejercer su derecho a la defensa, cuando que en juicios sumarios abreviados, como el de faltas de tránsito, todo ciudadano tiene 5 (cinco) días para presentar su defensa. También al expresidente Cubas le otorgaron 5 (cinco) días para defenderse en su momento.

Es probable que los insignes parlamentarios, aprendices de dictadores, consideren que una falta de tránsito merece más garantías constitucionales que quien ha ejercido la Presidencia de la República durante 4 años con alta aceptación popular. Se violaron todas las normas al debido proceso y a la legítima defensa, porque los golpistas sabían que su única oportunidad de llegar al poder era hacer el juicio político meteóricamente, aun a costa de violar la Constitución. De otra forma, la reacción democrática de nuestro pueblo y del mundo no lo habría permitido.

Stroessner calificaba a su régimen como una “democracia sin comunismo”. De lo primero no tenía nada y de lo segundo –la eliminación del comunismo– no era sino una excusa para eliminar, incluso físicamente, a todo demócrata y no solo a los valientes miembros del Partido Comunista, quienes fueron los que con más convicción y empeño se opusieron a la dictadura stronista. El entonces Partido Liberal tuvo los traidores a la democracia que, desde un inicio, se prestaron al juego del dictador. Los liberales más dignos –como Domingo Laíno– lucharon desde un inicio con todos los medios a su alcance contra la dictadura, lo que costó centenares de vidas, torturas, prisión y exilio no solo a miembros de este libertario partido tradicional del Paraguay, sino a militantes de todos los demás partidos políticos y de organizaciones sociales del país, como las Ligas Agrarias.

Hoy, el dictador Federico Franco –y la gavilla que lo propició desde la cúpula de su partido– traiciona los principios libertarios de su partido y lo mancha para siempre con la dictadura, un oprobio que causó profunda huella en el Partido Colorado. A horas de perpetrarse el golpe, ya existían amenazas de muerte a personas íntegras que se oponen a la dictadura. No sabemos hasta cuándo tendremos seguridad para nuestras familias y nosotros mismos. Aun así, como lo hicimos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, reiteramos nuestro llamado a manifestarnos pacíficamente en toda la República para exigir que el único Presidente constitucional de la República del Paraguay, Fernando Lugo, asuma nuevamente sus funciones y que se restituya el estado de derecho en el Paraguay, quebrado lamentablemente por el dictador Franco y su pandilla.

Los nuevos golpes del siglo XXI

[Marco Consolo](#)

Artículo original en [ALAI](#)

Bajo el silencio ensordecedor de los grandes medios de comunicación internacionales, la ofensiva estadounidense en contra de los gobiernos progresistas de América Latina, ha cobrado otra víctima. El pasado 22 de junio, Fernando Lugo, Presidente de Paraguay desde el año 2008 y ex obispo católico, ha sido destituido con una velocidad supersónica en un “juicio político” realizado por el Parlamento, que le ha concedido menos de 24 horas para preparar su defensa y dos horas para hacer la presentación de la misma frente a las Cámaras. Un golpe parlamentario, un parla-golpe institucional muy parecido al de Honduras del año 2009.

El vice-presidente Federico Franco, una real “serpiente en el seno del gobierno”, ha sido nombrado enseguida como “nuevo Presidente” por las fuerzas de la oposición. La destitución de Lugo estaba planeada desde hace tiempo, según informaciones enviadas por la embajada estadounidense en el 2009 y publicadas por wikileaks [1]. Después de 22 tentativas, la oposición esperó el momento justo sólo para concretar el golpe. El pretexto utilizado fue la oscura matanza ocurrida en los días previos en Curuguaty, durante una ocupación de tierras, donde murieron 11 campesinos y 6 miembros de la policía (además hubo 80 heridos y 54 personas con acusaciones graves). La matanza, según muchas denuncias, habría sido ni más ni menos que una trampa organizada ad hoc, para proveer de argumento político a la magistratura y al parlamento, instituciones que están entre las más corruptas del País. Si el acto de acusación del Parlamento [2] no fuera realmente trágico parecería una broma de mal gusto, una perla hecha de afirmaciones sin pruebas y fotocopias de artículos de diarios.

Después de innumerables tentativas, el exitoso parla-golpe dispara al corazón del difícil proceso de transformación del País iniciado con la victoria electoral de Lugo en abril del 2008. Una victoria que había puesto fin a 60 años de un poder absoluto del reaccionario Partido Colorado y a los 35 años de Alfredo Stroessner [3], capo de una de las más sanguinarias dictaduras militares latinoamericanas, la que dió refugio entre otros al nazi Joseph Mengele y al dictador nicaragüense Alfredo Somoza. Una trampa muy bien hecha contra la transición democrática, el protagonismo y la movilización popular, causas que asustaron al bipartidismo tradicional de los partidos Colorado y Liberal. Pero posible también gracias a la ingenuidad política de Lugo, el “obispo de los pobres” sin ninguna experiencia de gobierno.

Los protagonistas visibles de este parla-golpe, son las mismas fuerzas cavernícolas de la oligarquía criolla que no se han dado nunca por vencidas y que han tratado de parar de todos los modos posibles, las transformaciones sociales y el protagonismo popular en Paraguay, además siempre obstaculizando la integración latinoamericana. Hoy, de manera grotesca, aquel mismo Parlamento en manos de los partidos tradicionales, en gran parte expresión de los latifundistas y la oligarquía más retrógrada, se yergue en defensa de la democracia, mientras en realidad trata de defender sus privilegios, en alianza con el poder judicial y los grandes medios de comunicación como el periódico ABC Color, real artillería del golpe.

Tras los bastidores, además de Washington, están las multinacionales de la alimentación y la química (Monsanto “inprimis”) y del aluminio (Rio Tinto Alcán). La primera está empeñada en extender “el imperio de la soja” cuyas fronteras se pierden entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para los campesinos defender o recobrar la tierra es literalmente una cuestión de vida o muerte, y numerosos son los conflictos con las bandas paramilitares de los así llamados “brasiguayos” (empresarios brasileños de la soja que se han apoderado de millares de hectáreas), los mejores aliados de la Monsanto y su verdadero brazo armado. La misma Monsanto tiene intereses concretos en el golpe, puesto que en los meses pasados el SENAVE, (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) no quiso dar luz verde a las nuevas semillas transgénicas, como pedían Monsanto y los latifundistas.

Por su parte el gigante canadiense del aluminio, Rio Tinto Alcán, hace muchos años que trata de instalar en el País el modelo extractivista expoliador, que desde hace tantos años está dañando el continente.

Luz y sombras de la gestión de Lugo

Demos un paso atrás.

Con un parlamento en que la base de apoyo real del Presidente fue menos que el 5% y con un poder judicial entre los más corrompidos y desprestigiados en América latina, desde el 2008 el gobierno de Lugo ha tratado de afrontar los problemas históricos del País, tales como la pobreza endémica y la corrupción dominante. Se dieron algunos pasos adelante, partiendo por la educación, el acceso a la vivienda, la creación de un sistema sanitario público y gratuito, con la realización de más de 500 “unidades de salud familiar” que han permitido la cobertura sanitaria de casi 1.5 millones de personas, verdaderos fantasmas, siempre “olvidados” en las estadísticas. Quién escribe retiene en sus ojos el orgullo de una médica paraguaya que reivindicaba la ley que permitió por primera vez a los pobres el acceso a un derecho que históricamente les había sido negado.

El gobierno tuvo como prioridad las políticas sociales, sobre todo contra la pobreza y la reducción de la desigualdad, en particular hacia las poblaciones originarias, mal llamadas “indígenas”. El programa de lucha contra la pobreza “Tekoporá” que reunió fondos para el apoyo a comunidades selectas, pasó de las 14.000 familias beneficiadas en el 2008, a 112.000 en junio del 2010, con un crecimiento del 800% [4].

El otro tema decisivo ha sido la renegociación con Brasil y Argentina de la cuenta energética de las dos grandes centrales hidroeléctricas (Itaipù y Yacireità), que ha permitido aumentar significativamente los ingresos estatales e iniciar aquella “soberanía energética” que apuntaba a la integración con el resto del continente.

También se dieron pasos adelante en el terreno decisivo de la información, con la creación de la “TV Pública Paraguay” que nunca había existido en la historia del País. La TV fue inaugurada el 14 de mayo del 2011, realizando su primera transmisión oficial el 29 de octubre del 2011 con la puesta al aire de la Cumbre Iberoamericana celebrada en el capital de Asunción. Y la misma Radio Nacional, que fue el instrumento de propaganda gubernamental del Partido Colorado y del dictador Stroessner, empezaba a transformarse en la Radio Pública de todos los paraguayos.

Pero sin duda el punto crucial ha sido y es la cuestión agraria. A pesar de las tentativas de diversificar la economía históricamente basada en la explotación de recursos primarios y en la agro-exportación, la tierra es la llave de desarrollo, como lo ha sido por siglos. También aquí la acumulación capitalista ha sido hecha con la violencia armada y el abuso. Según denuncia de la Comisión Verdad y Justicia, hay casi 8 millones de hectáreas (19% del País) de tierras estatales “malhabidas”, es decir robadas y asignadas de manera fraudulenta y clientelista durante la dictadura de Stroessner (y hasta el 2003) a militares, políticos amigos, ex-presidentes, latifundistas, etc. Tierras que el gobierno de Lugo estaba tratando de recobrar.

Además entre el 2006 y el 2010, con la expansión de la soja, muchos grupos agro-industriales brasileños, franceses, alemanes, portugueses, españoles y japoneses han comprado cerca de 1,8 millones de hectáreas, y casi 9-10 millones en los últimos 20 años. Y a pesar de las declaraciones, desde el 2008 poco se ha avanzado sobre el terreno decisivo de la reforma agraria, reclamada a grandes voces por los “sin tierra” y por los pequeños campesinos, contra la brutal concentración del latifundio. En efecto al día de hoy, el 2% de la población controla el 80% de las tierras fértiles mientras los pequeños propietarios, cerca del 40% de la población, sólo el 5%. El 30% de la población rural está sin tierra [5].

Entre las sombras de la gestión de Lugo hay que señalar la aprobación de la Ley Antiterrorista auspiciada por los Estados Unidos en todo el mundo después del 11 de Septiembre y utilizada para criminalizar los movimientos sociales, especialmente el movimiento campesino. En los últimos años ha crecido la presencia militar colombiana para el entrenamiento de las FF.AA. paraguayas en la lucha “antinarcóticos y anti-terrorista.” En el 2010 Lugo ha autorizado la así llamada “Iniciativa Zona Norte” que es más bien la instalación de tropas y civiles estadounidenses al Norte de la Región Oriental, en la frontera con Brasil, en teoría por actividad a favor de las comunidades campesinas de la zona. Sin embargo ya desde mayo del 2005, antes de la victoria de Lugo, el mismo Parlamento había autorizado la entrada de tropas estadounidenses con inmunidad, permiso de tránsito y permanencia prorrogable automáticamente.

El Paraguay renunció así a su propia jurisdicción, para que las tropas con armamento, material y medicinas pudieran actuar en todo el País, sin necesidad de nuevas autorizaciones. En aquella ocasión entró un primer contingente de 400 soldados de Washington, un duro golpe contra el Mercosur.

Hay otra noticia que pasó casi inadvertida: en las horas del golpe una misión de generales estadounidenses viajó a Asunción para reunirse con parlamentarios (ligados a la pasada dictadura) de la Comisión de Defensa del Parlamento [6] para discutir la posibilidad de instalar nuevas bases de EE.UU. en Paraguay. Hoy en día, a solo 11 minutos de vuelo de Bolivia, está la

base aérea llamada "Mariscal Estigarribia", con una pista de aterrizaje de más de 3 kilómetros de largo, en un País prácticamente sin aviación. La pista, "made in USA" y modernizada en los últimos años, es diseñada para recibir millares de soldados y aviones de grandes dimensiones con material y armamento. Como la pista de la base de Palmerola en Honduras.

En el 2009 Lugo se opuso a la posibilidad de fuertes maniobras militares del Comando Sur en Paraguay, pero en realidad las tropas de las "estrellas y barras" no se han ido nunca del territorio. Cuando el dictador Stroessner fue depuesto por "sus amigos" con un golpe en febrero de 1989, quedaron en el poder los militares que habían sido protagonistas directos de la larga dictadura. Gracias a acuerdos firmados entonces, el País perdió el derecho de poder investigar los delitos cometidos por tropas extranjeras y denunciar a Washington en la Corte Penal Internacional, violando así su misma legislación.

La situación que vive el Paraguay se entrelaza con la remilitarización estadounidense en todo el continente. Junto a la reedición de la IV flota (parada desde el final de la segunda guerra mundial) que navega delante de Venezuela y Brasil, a la sólida presencia en Colombia, a las decenas de viejas y nuevas bases militares o de inteligencia esparcidas en América latina, la infraestructura estadounidense se fortalece en un País de importancia geo-estratégica limítrofe con Bolivia, Brasil, Argentina. Una presencia militar que hipoteca el control del acuífero Guaraní, una de las reservas de agua potable mayores del mundo, en la "Triple Frontera", entre Paraguay, Argentina y Brasil.

Como dice un chiste en boga en el continente, en las "Américas" el único país que no ha tenido un golpe es Estados Unidos, porque allí no hay ninguna embajada norte-americana. Sólo en la última década hemos visto en el 2002 la tentativa fallida de derrocar por la fuerza al Presidente Chávez y a la Revolución Bolivariana en Venezuela; en el 2009 el exitoso golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras; en el 2010 la tentativa de golpe contra el Presidente Correa y la "revolución ciudadana" en Ecuador; en Bolivia después de la fracasada secesión de la "media luna", en los últimos meses los intentos de desestabilización contra el Presidente Evo Morales. Son todas señales de la estrategia imperial contra los procesos de cambio político y social en América latina.

El Vaticano del lado de los golpistas

A favor del nuevo gobierno golpista, junto a Canadá, España, Taiwán y Alemania, se ha alineado enseguida el Vaticano, con el Nuncio Apostólico que ha aconsejado a Lugo de hacerse a un lado y aceptar la farsa grotesca del "juicio político". Idéntico guión del intento de golpe del 2002 en Venezuela contra Hugo Chávez, cuando el Nuncio en Caracas trató de convencerlo a firmar su renuncia "para evitar derramamientos de sangre."

Al contrario, la Unasur, el Mercosur, la Celac y los Países del Alba, condenaron inmediatamente el "juicio político" contra el Presidente Fernando Lugo, aislando a los golpistas en el continente. En los días siguientes tanto el Mercosur como la Unasur han suspendido a Paraguay de las correspondientes alianzas regionales. Los mismos gobiernos de la derecha (Colombia, Chile y paradójicamente el mismo Honduras), han tenido que tomar distancia del golpe echando mano al argumento que "faltó el debido proceso y sus garantías" para juzgar a Lugo.

Según las últimas denuncias del mismo Lugo [7], ...en el *SENAVE* (órgano de control de las semillas) el nuevo presidente, un vendedor de agrotóxicos, militante del Partido Liberal (PLRA), ha echado a más de cien funcionarios con la acusación de "ser luguistas". En *Itaipu Binacional*, el sindicato controlado por Honor Colorado, STEIBI, en alianza con el actual director general paraguayo, dirigente del PLRA, anuncia el despido de 300 funcionarios con la acusación de ser "zurdos". El nuevo régimen trató de asaltar la TV Pública, lo que generó una heroica defensa de sus funcionarios. Pero ya se iniciaron también las amenazas para dejar de resistir e iniciaron despidos masivos...

En Paraguay, la variada base social de Lugo, hecha de movimientos sociales y de las muchas y siempre en conflicto organizaciones de la izquierda, sólo en marzo del 2010 se han unido en el Frente Guasú (Frente Amplio en lengua Guaraní), juntando así una ventena de organizaciones. Con una base social débil, sin fuerza organizada en las calles y en el Parlamento, la gestión de Lugo ha sido marcada por buenas intenciones, por ineficiencia y por mucha ingenuidad. Y la fragmentada izquierda ha encontrado demasiado tarde cohesión para desplegar una masa crítica suficiente como para parar las fuerzas golpistas, las que perdieron parcialmente el gobierno, pero de ninguna manera el poder real. Hoy la resistencia a los golpistas se reorganiza bajo una nueva forma e impulsa movilizaciones populares en todo el País [8].

En el 2013 en Paraguay deberían realizarse las nuevas elecciones. Al momento parece difícil que la situación pueda volver a la "normalidad" que había antes del parla-golpe. Seguramente los Estados Unidos y sus aliados harán lo imposible para parar cualquiera transformación radical en sentido progresista en su "patio trasero". En México los numerosos fraudes

electorales también nos están hablando en “este sentido”...

Notas

[1] <http://wikileaks.org/cable/2009/03/...>

[2] <http://www.ultimahora.com/adjuntos/...>

[3] Hijo de un inmigrado alemán, Hugo Ströbner de Hof, Baviera y de Heriberta Matiauda, tomó el poder el 15 de agosto de 1954, aboliendo la constitución. Candidato único a la presidencia en varias elecciones, con el apoyo de los EE.UU. quedó en el poder por 35 años. Fue presidente y dictador de su país desde el 15 de agosto 1954 hasta el 3 de febrero 1989.

[4] Fuente: Gobierno de la República del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección General de Control de Recursos Sociales, Informe Final. Auditoría a la Secretaría de Acción Social “ Programa Tekoporá”, Ejercicio fiscal 2007, (Asunción, julio 2009); y Secretaría de Acción Social. Dirección General de Protección Social y Desarrollo Humano. Programa de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, Informe Trimestral 1º, Informe Trimestral 2º, (2009).

[5] www.mag.gov.py/

[6] <http://www.abc.com.py>

[7] <http://paraguayresiste.com/comunica...>

[8] <http://paraguayresiste.com>

Golpe yanqui en Paraguay

Por Carlos Cáceres y Jorge Zárate

Con el apoyo del Partido Colorado y otras expresiones de la derecha local, Estados Unidos produjo un golpe en el corazón de Unasur, donde pierde terreno desde comienzos del siglo XXI. Las nuevas autoridades, así como otras voces del poder real, no demoraron en declarar su intención de establecer un tratado de libre comercio con la Casa Blanca, a la vez que sostuvieron la necesidad de que Washington reactive la base militar en Mariscal Estigarribia, instale allí aviones F-118 y cree nuevas bases militares en el Chaco paraguayo. La resistencia popular ya comenzó y queda planteada la batalla electoral de abril próximo en la medida en que el nuevo gobierno cumpla con los plazos constitucionales.

Con la celeridad y precisión de una operación largamente preparada, bajo la forma de un juicio parlamentario el 22 de junio fue depuesto Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay. Lugo admitió inicialmente la destitución. Su lugar lo ocupó Federico Franco, hasta ese momento vicepresidente. En un amañado juicio político de menos de 36 horas la suerte del ex obispo quedó sellada por 39 votos por la condena y cuatro por la absolución en el Senado constituido en tribunal.

A los pocos minutos de la sentencia, la policía disparaba gases lacrimógenos y balas de goma contra alrededor de siete mil personas que se congregaban en las plazas del Congreso. Las fuerzas de seguridad parecieron no reparar que entre la multitud había mujeres y niños. “Este gobierno ilegítimo nace disparando contra la gente”, reclamaron los manifestantes.

Días después, en entrevista con Radio Nacional de Argentina respecto de la eventual injerencia del Departamento de Estado estadounidense para derrocarlo, Lugo respondió: “Los países que nos enviaron su solidaridad están señalando una gran injerencia de otros países. Hoy, el gobierno que está instalado en Paraguay señala que no permitirá injerencias, pero sin duda que en ningún lugar del mundo un golpe es genuinamente nacional. Siempre hay insinuaciones o efectos de que está hecho con la participación, o por lo menos la anuencia de países, no de la región sino de un poquito más hacia el norte”.

Más directo fue Domingo Laíno, ex parlamentario y principal dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, encabezado ahora por el presidente de facto Federico Franco: “Pareciera que tanto Argentina como Brasil no se dieron cuenta de que la estrategia del imperio es tener como enclave a Paraguay, que le permite tirotear todo el proceso de integración regional y debilitar las dos economías más fuertes de América Latina. Lo que Washington no ha logrado con la medialuna boliviana, ni con Honduras, ni con la militarización de las bases en Colombia, ni con la desestabilización en Ecuador, ni con el golpe y sabotaje en Venezuela, lo está logrando a través de Paraguay. Porque Paraguay es un país pequeño, con ubicación estratégica, inmejorable en el Cono Sur, con una histórica debilidad del Estado y una oligarquía absolutamente medieval que en su afán de dominio sobre este territorio, incluso por encima de su codicia, le hace el juego a las pretensiones del Norte”.

Réplica inmediata

Sin explicitarlo, la mayoría de los gobiernos de la región coincidieron con el veterano político paraguayo, quien renunció a su cargo de embajador en Cuba en rechazo al golpe de Franco. El nuevo Ejecutivo no fue reconocido por ninguno de los países latinoamericanos, que retiraron o llamaron a consulta a sus embajadores en Asunción. El presidente ecuatoriano Rafael Correa se adelantó y desde Río de Janeiro, donde participaba de la cumbre Río+20 declaró que, con prescindencia de la decisión de Lugo, e incluso de la postura que tomara Unasur, Ecuador no reconocería al nuevo gobierno paraguayo. Simultáneamente el primer mandatario boliviano Evo Morales adoptó idéntica posición, reiterada en instantes desde Caracas por el presidente Hugo Chávez. Por caso, a la sazón recrudecía en Bolivia un motín policial sumado al conjunto de conspiraciones que constantemente tratan de desgastar el poder de Evo Morales.

Reunidos en Río+20, los cancilleres de Unasur respaldaron con firmeza a Lugo y una nutrida delegación viajó a Asunción mientras todavía la parodia de juicio estaba llevándose a cabo. Su misión fue infructuosa, aunque a la semana siguiente, reunidos en Mendoza, definieron la separación de Paraguay del Mercosur y Unasur (ver pág. 14).

El gobierno de facto insiste en señalar el carácter legítimo de su ejercicio, amparado en un cerrado apoyo institucional que

se comenzó a configurar con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del planteo de inconstitucionalidad al reglamento del juicio que habían interpuesto los defensores de Lugo.

También el Superior Tribunal de Justicia Electoral (Tsje) dictaminó la legitimidad del gobierno de Franco y señaló que éste debe concluir el período presidencial en agosto de 2013, tal como estaba previsto. El fallo cerró así la posibilidad de un adelanto de las elecciones, una de las salidas que propusieron algunos mandatarios y miembros de la comunidad internacional. El nuevo régimen tiene a su vez el respaldo de la prensa patronal que manejó la situación comunicacional como manda el manual del buen golpe de Estado Latinoamericano: “Todo está tranquilo”, titularon en reiteradas oportunidades.

Azuzar viejos temores

Los sucesos de Curuguaty, donde 17 personas resultaron muertas tras un presunto enfrentamiento entre campesinos y policías, fueron oportunamente azuzados para despertar temores de un levantamiento campesino y dar otro tipo de justificativo al golpe de Estado.

Es que Curuguaty fue el punto más sensible, el que cerró las filas de los antiguos partidos tradicionales de derecha y centro derecha para asegurar en primera instancia el éxito del un juicio político.

La derecha, aglutinada, sostiene que los 50 campesinos que ocuparon Curuguaty infiltraron tiradores del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) para ejecutar al jefe y el subjefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y a cuatro de sus colaboradores, en una emboscada considerada de alta planificación.

Testimonios recogidos por defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones sociales indican, sin embargo, que bien podrían haber sido matones del terrateniente Blas N. Riquelme, ex senador y ex presidente del Partido Colorado, que se atribuye las tierras ocupadas, o fuerzas paramilitares los que dispararon la tragedia. Esta es una hipótesis que los investigadores hasta el momento no tienen en cuenta, dado que probaría el montaje de una provocación como justificación del golpe palaciego.

El presidente Lugo había decidido nombrar una comisión de notables a cargo del periodista Alcibíades González Delvalle para llevar adelante una investigación independiente sobre el caso Curuguaty. La comisión fue disuelta por Franco, en una de sus primeras medidas de gobierno.

Resistencias

Apenas se inició el proceso de juicio político, nació la resistencia popular a lo que finalmente sería un golpe institucional. La primera protesta ciudadana de magnitud se registró en la mañana del sábado 23 de junio, cuando comenzó a concentrarse gente frente al edificio de la TV Pública, en defensa de la libertad de expresión. Unas horas antes un enviado del gobierno de Franco, acompañado de una comitiva policial, intentó interrumpir la programación. Por la tarde del sábado, manifestantes y trabajadores de los medios públicos se congregaron espontáneamente frente al “Micrófono Abierto” que se instaló en la sede del canal de televisión. La transmisión continua se transformó en un fenómeno que desbordó las fronteras del país y alentó el reclamo y la movilización en todo el país en defensa del proceso democrático.

El gobierno de facto cambió las autoridades de la TV Pública, lo que descomprimió la manifestación, aunque las movilizaciones crecieron en las distintas capitales departamentales.

El bloqueo del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con la brasileña ciudad de Foz de Iguazú, por más de un millar de manifestantes, fue otro hecho destacado de la resistencia en la primera semana posterior al golpe.

Por otra parte, el grueso del movimiento social, que sostuvo el gobierno de Lugo, tendrá posibilidades crecientes de organizarse y ganar la calle, ahora que está liberado de la carga de ser oficialista.

Flanco externo

El canciller Jose Félix Fernández adelantó que el gobierno de facto de Federico Franco recurrirá todas las acciones que tomen Mercosur y Unasur, a sabiendas que al país no le conviene un aislamiento regional.

No obstante, tras la resolución de ambos organismos regionales de separar a Paraguay, se sumaron las voces del Ejecutivo para sostener que ahora Asunción se siente emancipada: “al ser suspendido, Paraguay está liberado de tomar decisiones. Vamos a hacer lo que más convenga a Paraguay”, declaró Franco al conocer la decisión. “Ahora se terminó el tutelaje de los países vecinos”, agregó en referencia a Brasil y Argentina. Después aclaró que evaluará costos y beneficios de la

decisión regional. Otros funcionarios afirmaron la decisión oficial de concertar inmediatamente acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y China.

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, retomó una de las banderas de la oligarquía paraguaya: “nos va a beneficiar grandemente salir del Mercosur”. Aventuró que Paraguay logrará “mayores opciones; vamos a desarrollar nuestro músculo para exportar a otros países, vamos a lograr que nuestros socios para el futuro sean otros países y no nuestros vecinos que, nos guste o no nos guste, fueron parte de la Triple Alianza”.

La prensa empresarial consagró la idea de que los países que reaccionaron ante el juicio político a Lugo constituyen una suerte de Triple Alianza, la unión de ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay que asoló a Paraguay en la década de 1870.

Esta tesis tomó cariz diplomático en la exposición del embajador paraguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Hugo Saguier Caballero, que prácticamente reprodujo las palabras de Felippo, y que fuera reproducida en editoriales de diarios, en las redes sociales y por comunicadores de medios electrónicos. Es un viejo programa de la derecha paraguaya profundizar una alianza directa con Estados Unidos, con la formalización de una base de aviones F-118 en Mariscal Estigarribia, como parte principal del acuerdo. En el mismo sentido, el diputado José López Chávez, del partido Unace (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos), reiteró su deseo de que Estados Unidos instale bases militares para frenar lo que denominó “carrera armamentista” boliviana.

Vale recordar que el 5 de agosto del año pasado 21 generales estadounidenses sostuvieron una reunión con la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno de la Cámara de Diputados de Paraguay. Esta comisión parlamentaria es presidida por López Chávez e integrada, entre otros, por Artemio Barrios (ANR, Partido Colorado), que en las horas del golpe catalogó al destituido presidente Lugo de “traidor a la patria”. También participaron de aquel encuentro de agosto de 2011 los senadores Julio César Franco (Plra, liberal), hermano del presidente de facto, y José Manuel Bóveda (Unace).

“Hablamos con ellos (con los militares estadounidenses) de la intención, que en algún momento podría darse, de instalar una base militar en el Chaco y otras cosas más”, afirmó López Chávez en aquellos días. Debe entenderse que se refería al Chaco paraguayo, y no a la provincia argentina en la que funciona desde el año pasado una sede operativa donada por Washington. Una base estadounidense en Paraguay -expuso el legislador- ayudaría a “librarse de las presiones, de las amenazas de Bolivia; y más aún de amenazas que están surgiendo, permanentemente, del bolivariano Hugo Chávez (presidente de Venezuela)”. Buena parte de la derecha paraguaya, hoy más unida que nunca, piensa de manera semejante.

Por eso, el propio Lugo declaró antes de las reuniones de Unasur y Mercosur en Mendoza: “He tenido una reunión con un grupo de campesinos que venden piñas, mandioca, en la región, y yo no quería que los más olvidados, a quienes hemos privilegiado en nuestro gobierno, sean también perjudicados con una sanción económica”, dijo. A pesar de ello, pidió “un llamado de atención” de la comunidad internacional para aquellos que se juntaron para derrocarlo.

El golpe parlamentario en el Paraguay

Por Juan Díaz Bordenave

La caída del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, fue planeada en sus menores detalles y, ni siquiera para los que la vivimos de cerca es fácil entender su génesis y proceso. En mi percepción, se trató de una manifestación natural de la confrontación continental y mundial de dos conceptos antagónicos de democracia: aquella que la ve como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y aquella que la ve como el gobierno de las clases dominantes, por las clases dominantes y para las clases dominantes.

Personalmente, caracterizo al golpe como mercenario y farisaico.

Mercenario: en el sentido de que los principales autores del golpe no obraron por ideales sino por intereses. En efecto, entre ellos estaban terratenientes latifundistas, empresarios del agronegocio sojero y propietarios de industrias. Junto a ellos, miembros de la alta burguesía, políticos de los partidos tradicionales, religiosos conservadores, jefes militares, miembros de la clase media alta, representantes paraguayos de empresas multinacionales, todos ellos preocupados por la amenaza que, en su entender, Lugo representaba para sus propiedades, intereses y privilegios .

Al estar motivados por intereses y no por ideales los mercenarios matan sin remordimientos, como lo hicieron los que infiltraron francotiradores entre los campesinos de Curuguaty para asesinar policías.

Farisaico: el Evangelio presenta al “fariseo” como una persona religiosa y respetuosa de la ley pero que desprecia al pueblo y se considera superior a todas las demás personas. Jesús llamó a los fariseos “hipócritas”, “raza de víboras” y “sepulcros blanqueados”. Cualquier semejanza de este tipo de personas con los líderes golpistas dista de ser mera coincidencia.

El contexto

Si tienen algún mérito los golpistas fue el de haber orquestado magistralmente los elementos que constituyeron el contexto sociopolítico del golpe. En efecto, fueron usados como detonantes:

- ▶ la intensificación de la lucha de los campesinos por acceder a la tierra
- ▶ el aumento de la prohibición de semillas transgénicas lo que puede afectar a los enormes lucros de la multinacional norteamericana Monsanto
- ▶ la propuesta de aplicación de impuestos a la exportación de commodities
- ▶ la fiscalización de pulverizaciones tóxicas aéreas por el SENAVE
- ▶ la decisión de realizar una Reforma Agraria que tenga en cuenta que el 82 % de la tierra está en manos del 2% de los propietarios
- ▶ la creciente organización de los campesinos
- ▶ la probabilidad de que el Partido Colorado retorne al poder
- ▶ la simpatía de las izquierdas hacia Hugo Chávez y el propuesto ingreso de Venezuela al Mercosur
- ▶ el acceso del pueblo a los nuevos medios públicos de comunicación
- ▶ la creciente comprensión popular de que la democracia representativa debería ampliarse hacia la democracia participativa

Como se nota en la lista, el golpe fue motivado fundamentalmente por el temor que sienten las clases que concentran los beneficios del desarrollo, de un gobierno que suponían capaz de promover una distribución más equitativa de los mismos. Los golpistas aprovecharon la legítima ocupación de una tierra mal habida y el consecuente desalojo de los ocupantes, para montar una tragedia capaz de provocar el juicio político del Presidente.

El proceso

Nadie duda de que el golpe que hubo en el Paraguay viene siendo gestado y planeado desde hace mucho tiempo. A comienzos del periodo presidencial de Lugo el entonces vicepresidente fue acusado de participar en reuniones contrarias al presidente, como la ocurrida en la embajada norteamericana con la presencia de militares de esa nacionalidad y de la propia embajadora.

El incidente de Curuguaty, que está todavía siendo investigado, demuestra que el asesinato de policías fue realizado con armas de alto poder, usadas por francotiradores profesionales de alta puntería.

La velocidad con que fue armado el juicio político, criticada en el continente y el mundo, no solamente impidió cumplir con el “debido proceso”, sino determinó la redacción ridículamente improvisada del libelo acusatorio. Pasará a la historia este episodio bochornoso en que un Presidente de la República fue acusado sin pruebas, con un plazo irrisorio para preparar su defensa. Los argumentos de la defensa, de altísima calidad a pesar del escaso tiempo permitido para prepararla, no fueron analizados por los senadores, simplemente porque la sentencia condenatoria ya estaba escrita. Se trató de un adesio legal del cual los abogados paraguayos del futuro sin duda se avergonzarán pues determinó la prostitución del Congreso Nacional y la desnaturalización del Estado de Derecho. Lo peor de todo es que la Constitución Nacional fue farisaicamente utilizada para manipular el fondo y la forma del proceso, de modo a justificar lo injustificable.

Las consecuencias

Son imprevisibles, pero probablemente muy graves, los efectos que tendrán el golpe y el juicio político express sobre la realidad política, económica y social del Paraguay. Ellos dependerán de la capacidad del pueblo paraguayo de comprender lo que realmente pasó, de indignarse ante la índole farisaica y mercenaria del golpe y de, superando sus hábitos culturales de resignación fatalista, concretar su indignación en actos de resistencia y de lucha. El futuro dependerá también de la capacidad de los países vecinos, especialmente los miembros del Mercosur y la Unasur, de continuar manteniendo su actual decisión de no aprobar la interrupción de una presidencia legítimamente establecida por el voto libre de los paraguayos.

Una de las consecuencias positivas del golpe institucional está siendo el despertar cívico de la juventud paraguaya. En efecto, ella estaba ausente en las luchas por el rechazo del ALCA, por la renegociación del Tratado de Itaipu, por la Reforma Agraria y hasta por la Reforma Universitaria. Pero ahora abrió sus ojos y está organizándose para la resistencia pacífica. Si la juventud asume realmente su papel generacional, se podrá decir alguna vez del golpe el refrán español “no hay mal que por bien no venga”. Porque, abiertos los ojos a la necesidad de luchar por la justicia, la juventud percibirá la imperiosa urgencia de la reforma agraria y el desarrollo equitativo del país, así como la necesidad de depurar el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

También puede ser una consecuencia positiva el cambio del concepto y la práctica de la política. Tendremos así en el Paraguay no más una política pragmática de intereses y resultados, que genera injusticia, exclusión, corrupción y pérdida de soberanía y dignidad, sino una política de principios, al servicio al pueblo.

Desigualdad social y crisis institucional en Paraguay

Un golpe total

Por Luis Ortiz Sandoval

Causalidad sin casualidad

Todo proceso social tiene sus causas, aunque generalmente se las escruta cuando los hechos se consuman. Lo que no hay es casualidad. Este es el caso del juicio político que llevó aceleradamente a Fernando Lugo Méndez, Presidente de la República del Paraguay, a su destitución parlamentaria el 22 de junio. Para algunos, se trató de un oscuro plan pensado con antelación y para otros como resultado de su incapacidad en el cargo, costándole una sanción ajustada a la Ley.

El argumento del golpe contra Lugo, por parte de los sectores más conservadores del Paraguay, se basó de inicio a fin en el cumplimiento de una formalidad legal. Aun cuando la sanción constitucional al Presidente no tuvo legitimidad, tuvo curso legal ante un Parlamento aunado en su contra y su debilidad política para sostener una alianza de gobierno extremadamente frágil. En este sentido, el golpe parlamentario del 22 de junio, en Paraguay, fue un golpe total: contó con el apoyo de todo el Congreso traduciendo intereses de clase en una ofensiva política, revirtió un proceso de institucionalización del Estado, que ya funcionaba con reglas de un orden legal obsoleto y, finalmente, asaltó la voluntad popular -expresada en un gobierno legítimo- sin una contestación social multitudinaria.

Apenas dos semanas antes, una manifestación popular desnudaba la débil legitimidad del Parlamento Nacional cuando estuvo a punto de aprobar una ampliación presupuestaria a la Justicia Electoral para proveer fondos a operadores políticos de los partidos representados en el Congreso. Se le sumó otra manifestación del mismo tenor ante el éxito de los legisladores en trabar un proyecto de reforma electoral de amplio alcance democrático. La presión ciudadana en ambos casos, puso en cuestionamiento a los partidos políticos oligárquicos, con excepción de la pequeña coalición que apoya a Lugo y un partido libero-cristiano. Ávidos de una revancha política ante un escenario que favorecía la imagen de Lugo, los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, buscaban cualquier pretexto para debilitarlo o destituirlo.

Fue así que un enfrentamiento armado en el noreste del país, en un operativo en el que la policía trataba de desalojar campesinos de las tierras de un político fraudulento de la era stronista, desencadena una indignación nacional cuando pierden la vida seis policías y once campesinos sin tierra. La ocasión fue perfecta para sembrar la confusión. El Partido Colorado responsabiliza de los hechos a Lugo y promueve un juicio político en su contra.

Un endeble apoyo

El éxito del oportunismo político colorado, se basó en la exaltación de los ánimos y la confusión resultante de los acontecimientos de Curuguaty. La desigualdad de la tenencia de la tierra, causa de ese conflicto, fue la espada de Damocles para el Presidente quien al no haber emprendido acciones decididas para resolver el problema agrario favoreció la tensión que lo secunda. Por otra parte, ante la desacertada decisión de Lugo de confiar la seguridad interna del país al Partido Colorado, como último respiro de ahogado para evitar el juicio político, lleva al fondo su menosprecio al Partido Liberal, principal aliado político en el Parlamento, valiéndole la ruptura y la vía libre a su destitución.

La ruptura de la alianza entre la coalición "Frente Guasu" (Gran Frente) base política del Presidente Lugo y el Partido Liberal, fue justificada por éste como resultado del menosprecio que caracterizó la actitud del Presidente hacia su aliado, lo que motivó a los liberales a apoyar el juicio político promovido por el Partido Colorado. Los liberales, aprovecharon el contexto de tensión social y política para tomar el control del Poder Ejecutivo, a menos de un año de elecciones generales, con todo el beneficio que la disposición de recursos públicos implica para el gobierno de turno en una campaña electoral.

Explicando el problema como efecto de una actitud caprichosa, la verdadera razón del distanciamiento del Partido Liberal del gobierno fue la oportunidad de acaparar el control administrativo y financiero del Estado para promover intereses

sectarios y cambiar la orientación de la política pública del gobierno, de marcado signo redistributivo. [1]

Echar la culpa a una persona, es ocultar que la investidura presidencial en verdad constituye un mandato social y traduce institucionalmente la voluntad popular. Quedó desde un inicio claro que el Partido Liberal no ganaba sin Lugo así como éste no llegaba a Presidencia sin el Partido Liberal. Lo que quiere decir que la población de afiliación liberal que votó a Fernando Lugo, era en su mayoría de la extracción social a la que Lugo buscó reivindicar (el Partido Liberal es un partido de base rural caudillista) y sobre la base de su trayectoria y experiencia episcopal, lo acreditó como candidato que traduciría aspiraciones en hechos concretos. Ningún candidato liberal lo había logrado antes.

Por su parte, el Partido Colorado, apuntaló el juicio político informado de que Lugo desoyó al Partido Liberal en la crisis, terreno fértil para que éste reaccionara con acompañar la pena política máxima. El Partido Colorado así consumó la ruptura de la alianza entre el sector político del Presidente y el Partido Liberal, principales fuerzas políticas que lo desplazaron del poder después de 61 años. Por otra parte, un sector interno del Partido Colorado, que responde al poderoso empresario Horacio Cartes, presionó para acelerar el juicio político, evitando un pacto entre Fernando Lugo y la Presidenta del Partido, Lilian Samaniego, que en los planes ingenuos del Presidente apuntaba a dividir ese partido, ofreciendo al sector de Samaniego la oportunidad de acceder a la burocracia y acumular económicamente con vistas a las elecciones del 2013.

La débil convocatoria de protesta contra el juicio político en proceso se debió a que las bases sociales del gobierno aún estaban dispersas y no se fortalecieron. Los campesinos se hallaban divididos entre su situación vulnerable y un apoyo frágil a un gobierno que no avanzó en las principales reivindicaciones, a saber la tierra y condiciones de producción. Por su parte, la base política de Lugo, reunida en el Frente Guasú y caracterizada por la fragmentación y la desorientación, no fue capaz de aprovechar la inteligencia de Estado para prever los acontecimientos de Curuguaty. El conocimiento (hasta de Vox Populi) de que los campesinos estaban armados, no llevó al Ministro del Interior Carlos Filizzola a prever las consecuencias de la tensión social y no ponderó su impericia para resolver una situación tan delicada.

A falta de abordaje estratégico y de tacto político, Filizzola confió en el “buen devenir” de los acontecimientos. Sin admitir su incapacidad ante el conflicto, no renunció con suficiente antelación para ceder su cargo al aliado Partido Liberal y mandarlo al frente, para que ante la posibilidad de un desenlace conflictivo, fuera el responsable de las consecuencias. En tal escenario, el Partido Liberal para disimular sus errores, no hubiera apoyado un juicio político y sostendría a Lugo. Pero Filizzola renunció después, forzado por la amenaza del Congreso de promover su destitución y la del Presidente.

Consumada la tragedia, el Presidente con su hipótesis obtusa de dividir al Partido Colorado, cedió el lugar a su más acérrimo adversario y puso la seguridad interna del país en manos del sector político más conservador. Organizaciones de derechos humanos denunciaron días después, en manifestaciones públicas, que el nombramiento del ex-Fiscal General del Estado –reconocido conculcador de derechos y de garantías a los movimientos sociales– era un desacierto político que implicaba un retroceso institucional.

Una cosa es la inexperiencia y de ello nadie puede declararse culpable. La entrada de la izquierda al gobierno en el 2008, abrió un camino de aciertos y errores sobre los cuales se pudo aprender así como fortalecer un proyecto de cambio. Pero sí es responsabilidad política la falta de análisis sobre las relaciones de fuerza al interior de la alianza de gobierno, en el Congreso y en la sociedad.

La izquierda y sus diferentes exponentes no apostaron por un proyecto político consistente sino que, sobre las apetencias personales, buscó sacar rédito de su presencia en la burocracia. La búsqueda afanosa de acceder a cargos públicos cegó una estrategia política de fortalecimiento de las bases sociales y la construcción de una agenda común para defender las políticas de redistribución e inclusión social para que perduraran en el tiempo.

Con un Partido Liberal conservador en el propio campo, la ingenua y arrogante actitud de desprecio por parte de la izquierda hacia su aliado, le costó su caída del gobierno y el probable debilitamiento de la política social. El acercamiento táctico y la discusión constante, hubieran asegurado tener de su lado al PLRA y blindarse del previsible ataque del Partido Colorado, que ha hostigado al gobierno desde un principio. Suponiendo que con algunas carteras de Estado cedidas a los liberales bastaría para contenerlos en su afán golpista, la izquierda no tomó con seriedad y responsabilidad el proceso que comprometió su permanencia en el poder.

Ante el juicio político, el Presidente no pudo defenderse. O mejor, no le dejaron defenderse. Apenas pudo presentar alegatos contra una acusación sin causas y asumir con dignidad la arbitrariedad de un proceso viciado. En la mañana del juicio sus jueces en el Senado han anunciado de antemano la condena, redactada en el orden del día. Previamente, lo han

venido anunciando veinticuatro veces en el transcurso de los cuatro años de su mandato. La Corte Suprema de Justicia, que apenas poco tiempo atrás se salvaba de una remoción que promoviera el Congreso, no fue un árbitro ecuánime ante la acción de inconstitucionalidad planteada por los abogados de Lugo. Dar curso a la misma hubiera significado firmar la apertura de un proceso en su contra y su sucesiva remoción.

El no respeto del debido proceso y de las garantías constitucionales del Presidente depuesto, se avizoró como una estrategia para aislar económica y políticamente al gobierno sucesor de Federico Franco. El Partido Colorado calculó y ejecutó no solamente la ruptura de la alianza formal entre el Partido Liberal y la coalición socialdemócrata, sino también una crisis en las relaciones internacionales para el gobierno de facto. ¿O acaso dejaría la ANR a su centenario rival político todas las condiciones para un buen desempeño gubernamental y que cuente con la aprobación generalizada? Desplazada la socialdemocracia, la puja interna en la oligarquía conservadora tomaría su curso normal.

Causas y efectos de un golpe institucional

La irregularidad

Los sucesos recientes en torno al conflicto agrario, tanto en el caso de las tierras mal habidas de Ñacunday como en las de Curuguaty, desnudan la desidia de los sucesivos gobiernos de la transición democrática para conservar las bases de la estructura agraria basada en la extrema desigualdad de la distribución de la tierra. El otorgamiento del dictador Stroessner de grandes extensiones de tierra a sus leales, durante cuatro décadas, no fue revisado en los años de la transición, manteniendo el problema del carácter espurio de incontables propiedades rurales así como la superposición de títulos falsos como resultado de negocios turbios en el Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La situación actual de caos en el registro y catastro de la propiedad rural es su consecuencia más palpable.

Los vicios y delitos relacionados, no solamente con las formas prebendarias de adjudicación de títulos, sino con la complicidad de la justicia y de los adjudicatarios, indican que la estructura agraria adolece de serios cuestionamientos de legalidad. Este vicio de origen se conjugó con la facilidad en la cesión de propiedades a productores extranjeros de soja, sin el respeto de las normativas de prohibición de venta de tierras a colonos extranjeros en la franja de cincuenta kilómetros de la frontera. Asimismo, en los años de la transición se intensificaron la compra y venta de derechos de las tierras de campesinos pobres, afectados por la degradación de sus suelos, por la contaminación de los cauces hídricos y por la vulnerabilidad de sus hogares ante el uso intensivo de los productores sojeros de agrotóxicos. Hay que sumar el beneficio que recibieron los grupos agro-empresariales en el fácil acceso a las tierras, el apoyo técnico y crediticio así como los incentivos fiscales para la exportación de materias primas sin industrialización.

Los productores sojeros pueden conseguir escrituras públicas de compromisos de transferencia de propiedad o de transferencia de derechos de ocupación de parcelas como si fueran títulos legales. La compra de estas tierras por esos actores viola normativas adicionales como la residencia obligatoria en la finca, la ciudadanía paraguaya y el haber restrictivo de una sola parcela [2].

Otra forma irregular de la propiedad son las tierras de origen público que fueron transferidas a particulares y cuyas dimensiones son mayores a las permitidas por la Ley. Esto las convierte en tierras mal habidas ya que las adjudicaciones de tierra en el marco de la reforma agraria se realizan a una población beneficiaria, definida exclusivamente como campesinos que no tienen tierra o la tienen en cantidad insuficiente, estableciéndose en la Ley un tamaño máximo de las fincas [3]. La venta a personas no beneficiarias de esa Ley, tanto de fincas no destinadas a la reforma agraria como de fincas de dimensiones mayores a las establecidas, adolece de nulidad. Este es precisamente el caso del inmueble en litigio en las intermediaciones de Curuguaty [4].

Una última forma viciada de titulación y formalización consiste en la falsificación de títulos, cuando de forma intencionada se produce un título inventado, sin base jurídica. La falsificación de los títulos originales, que en los años de la transición democrática se han agudizado, responde a la generación de derechos espurios para diferentes beneficios [5].

La desigualdad de la tenencia de la tierra en Paraguay se ampara en un modelo de acumulación basado en la ilegalidad. La modalidad en que grandes grupos de propietarios se enriquecieron durante la dictadura stronista como en los años de la denominada “transición democrática”, conservó exactamente el mismo régimen de propiedad (feudal) que se sucedió a la Guerra de la Triple Alianza.

La concentración

Las características semif feudales de la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay se reflejan en los principales indicadores proveídos por el Censo Agropecuario Nacional del año 2008. Su comparación con la información relevada en el censo previo, del año 1991, nos ayuda a comprender las razones del conflicto social en torno a la tierra.

En el periodo 1991-2008 hubo una disminución de las superficies menores a 100 hectáreas, que es donde se concentra la economía campesina. Al mismo tiempo el número de fincas de entre 100 y menos de 500 has. se incrementaron en una tasa de 34,8% y en una tasa de 56% las fincas de 500 hectáreas y más. De un total de 289.666 fincas, 7.478 fincas, que corresponden a las de 500 has. y más, concentran 27.807.215 hectáreas (2,6% del total de fincas con 85,5% del total de la superficie agrícola del país, o sea 8.438.002 hectáreas más que en 1991), lo que significa que se apropiaron del 96,9% de las nuevas tierras habilitadas (8.709.338 has.).

Respecto de los grupos campesinos, entre 1991 y 2008 se incrementa levemente las fincas de menos de 5 hectáreas, como efecto de la pulverización de minifundios pequeños, disminuyendo también la superficie explotada de los diferentes tipos de fincas ubicados entre 5 a 100 hectáreas. Por su parte, se duplica la dimensión de fincas explotadas entre 100 a 500 hectáreas (soja) y de 500 hectáreas y más (soja y ganadería).

Como ha sido la constante durante la dictadura y durante la transición, la transferencia de tierras favoreció a los latifundistas ganaderos y a los empresarios desfavoreciendo a los campesinos, dificultando insertar a éstos en el mercado nacional aún cuando sea de manera económicamente dependiente. Con este proceso se debilitó el modelo de dominación clientelista y de cooptación política, iniciándose una abierta persecución y expulsión de los productores minifundistas. El régimen “democrático” no se distinguió respecto de la política agraria stronista, ya que no variaron las desigualdades en la estructura agraria ni la exclusión social de los sectores campesinos.

La pronunciada desigualdad entre dos sectores rurales con dos sistemas productivos distintos, contribuyó a sostener en los hechos un modelo económico que favorece a una minoría privilegiada, ante lo cual el Estado ha sido históricamente complaciente, sin capacidad ni voluntad de inclinar la balanza hacia una sociedad más equitativa. Los gobiernos de la transición, incluido el de Fernando Lugo, no hicieron nada por tocar la base jurídico-legal de la estructura agraria. Ante una sociedad paraguaya enormemente benévola con los grupos agro-exportadores, que se benefician de enormes ingresos y de una contribución irrisoria al fisco, el Estado no implementó un sistema impositivo que favoreciera a la mayoría de la población rural el acceso a la propiedad y des-incentive la concentración de la tierra en manos de una minoría terrateniente.

En suma, en un país en que la actividad agropecuaria representa la principal generadora de riqueza, la desigualdad de la distribución de la tierra se constituye en el fundamento de la desigualdad social.

El desgaste

Un punto clave para comprender las condiciones sociales e institucionales de la destitución de Lugo es que su gobierno no emprendió una acción clara y decidida para resolver el problema agrario. En efecto, decidió la intervención de la entidad responsable de la política de tierras, el INDERT, recién en el cuarto año de mandato, ante la presión de un conflicto agrario que se le iba fuera de control y a contramano del apoyo social y político que se hallaba en su nivel más bajo [6].

La clase terrateniente, beneficiaria de la irregularidad en la tenencia de la tierra y responsable de la anarquía en el ordenamiento jurídico agrario, promovió sistemáticamente el enmascaramiento del orden jurídico imperante y acusó a las investigaciones sobre la legalidad de las propiedades, como violadoras de derechos y carentes de legitimidad. El Poder Judicial, por su parte, desestimó las denuncias y los pedidos de investigación, demarcaciones y restitución de tierras de origen espurio al patrimonio fiscal.

De todos los gobiernos de la transición, el gobierno de Fernando Lugo es el que menos reprimió ocupaciones campesinas y es el periodo durante el cual se registraron menos invasiones de tierra. El acuerdo entre el gobierno y los campesinos, sobre la base de compra de tierras a condición de disminuir amenazas de ocupaciones, fue visto por la oligarquía como una artimaña clientelista y duramente atacado. De cara a cada ocupación, tomada de manera aislada y manipulada tendenciosamente por la prensa [7], la oligarquía exigió lo que siempre caracterizó a los gobiernos anteriores: la represión y la violencia inmediata. La salida institucional a estos conflictos, que el gobierno de Lugo planteó desde un inicio, buscó establecer garantías a todas las partes involucradas. Pero salidas institucionales sin resolver el problema estructural, lo llevó al atolladero.

La oligarquía, al no apoyar en el Parlamento las leyes de reforma agraria, insistió en culpar a los campesinos por la “afrenta a la propiedad privada” y al gobierno por “agitador social”. A la clase dominante paraguaya, nucleada en los dos partidos

tradicionales, no le vino ex nihilo tomar una posición unitaria a los efectos del Juicio político. Ante la amenaza a sus privilegios tradicionales, los partidos presentes en el Parlamento y que pertenecen a la clase propietaria, defendieron sus privilegios como clase y no como partidos.

Con el uso de armas por parte de los campesinos contra la fuerza pública durante el desalojo de “Campos Morombi”, el 15 de junio pasado, se llegó al punto límite de la tolerancia oligárquica a una institucionalidad endeble. El ataque de los labriegos a los efectivos del Estado, detentador del monopolio legítimo de la violencia física, constituyó la principal afrenta a la clase propietaria, que ha obstaculizado todas las reformas posibles para resolver el problema agrario e hizo todo para minar el éxito de un gobierno cuya política de inclusión social fue su emblema. Los hechos de Curuguaty sirvieron de excusa perfecta para volver al estado de cosas previo al 20 de abril de 2008.

Lo que se jugó en el juicio político fue la reversión de un tablero desfavorable para la oligarquía durante el gobierno de Lugo. Atrincherada en el Congreso para la defensa de sus intereses, emprendió el ataque contra el avance de la socialdemocracia en un país en el que la notoria desigualdad lleva a mostrar la intervención del Estado y las políticas redistributivas como una feroz amenaza.

El contexto externo

Una premisa elemental en Derecho Internacional, cualquiera fuera el proceso de integración entre los países, es la existencia de derechos y obligaciones entre los Estados asociados. En los acuerdos internacionales a partir de la segunda mitad de siglo XX, la democracia se volvió objeto clave de compromisos y responsabilidades, ya que permite evitar la violación de derechos universales al interior de los países miembros (v.gr. los Derechos Humanos) así como prevenir el acaparamiento de recursos y oportunidades por élites gobernantes, que por lo común se constituyen de facto e impiden que los beneficios de la integración se distribuyan con los sectores desfavorecidos de la población.

Paraguay como Estado miembro de varios bloques regionales (entre los más importantes el MERCOSUR y el UNASUR) así como signatario de varios Tratados y Acuerdos internacionales, refrendó las cláusulas y protocolos que establecían la obligatoriedad del cumplimiento de estos compromisos y responsabilidades para ser miembro de pleno derecho. Con el juicio político irregular e ilegítimo del Presidente Lugo, se violaron todos los acuerdos en cuestión al constituir una afrenta a los derechos que todo Estado democrático debe garantizar. Una sanción política a Paraguay por haber faltado a sus compromisos y responsabilidades como Estado miembro de los bloques en cuestión, es previsible.

Los países integrantes de MERCOSUR y los países asociados expresaron públicamente su condena a la ruptura del orden democrático ocurrido en Paraguay y suspendieron la participación del nuevo gobierno en la Cumbre de Jefes de Estado de dicho Tratado, que tendrá lugar en Mendoza, Argentina, el viernes 29 de junio [8]. Por su parte, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay llamaron a sus embajadores para una consulta sobre el proceso de Juicio político, mientras que Argentina, Ecuador y Venezuela ordenaron el retiro de sus representantes diplomáticos.

No es en vano que los países de la región desconfíen sobre el cambio de gobierno en Paraguay, ya que el mismo Congreso en este país, que vetó la entrada de Venezuela al MERCOSUR así como la ampliación del marco de integración regional, es el que impulsó el juicio contra Lugo. Ante este escenario, el presidente de facto, Federico Franco, se verá obligado a revertir su postura y acordar la normalización de las relaciones diplomáticas así como el proceso de integración regional, admitiendo el ingreso de Venezuela al bloque regional.

La difícil situación de Paraguay, en este contexto, en que los países de MERCOSUR y UNASUR condicionan la continuidad de Paraguay con el resarcimiento de la situación generada en el golpe institucional, evidencia que la integración requiere condiciones ratificadas por los Estados parte y que, si bien no justifican afrentas contra la soberanía nacional, su incumplimiento es pasible de sanciones en el relacionamiento externo.

En este sentido, el panorama que se le presenta al gobierno de Federico Franco en el contexto externo es crítico. Todo indica que es un resultado más de la jugada calculada por el Partido Colorado para desgastar a su tradicional adversario político en su corto gobierno. Los colorados, en efecto, se beneficiaron históricamente del aislamiento del país y capitalizará esta coyuntura en las relaciones externas, como un rédito político ante al 2013.

Las paradojas del “juego” democrático

Si el régimen democrático establece la relación entre los ciudadanos y el Estado en un sistema representativo de gobierno, la delegación del poder de las mayorías en sus representantes tiene la finalidad de que velen por sus intereses y que aseguren su bienestar.

El dato de que Paraguay es el país con más desigualdades de América latina interpela la forma democrática del gobierno de esa República. A veintitrés años de iniciado el proceso democrático, cuesta comprender porqué la población paraguaya participa de un régimen político que la sume en la pobreza. O la mayoría de los ciudadanos deciden democráticamente de permanecer en la exclusión, o sea, ejercen hacia sí mismos una especie de masoquismo político votando para desfavorecerse, o bien, la democracia es meramente una fachada.

En esta disyuntiva, la ruptura del proceso social bajo el gobierno de Lugo, es la muestra de que la naturaleza de la democracia paraguaya es una institucionalidad formal adecuada a una sociedad desigual. Esa institucionalidad, plasmada en la Constitución de 1992, refrendó la persistencia del autoritarismo en el Estado, con la consecuente arbitrariedad, discrecionalidad, verticalismo, clientelismo y patrimonialismo, propios de la era de Alfredo Stroessner. Las enormes necesidades sociales insatisfechas durante más de dos décadas de “democracia” son el terreno fértil para su continuidad.

Así, un obstáculo para la democracia en Paraguay es la desigualdad. Los acontecimientos de Curuguaty evidenciaron hasta qué punto ésta desgastó el frágil orden institucional. El conflicto resultante de las acciones contenciosas campesinas ante una situación insostenible de pobreza y de ilegalidad en la tenencia de la tierra, constituye un punto de inflexión y de regresión en el intento por institucionalizar las relaciones políticas en Paraguay.

Tras el velo de un “orden legal” en la destitución del Presidente Lugo, se esconde la rearticulación de un proyecto político conservador y el retorno de sus paladines al frente del Estado, quienes buscarán mantener una institucionalidad que atenúe el conflicto social sin atacar sus causas. Con el juicio político se reafirmó la arbitrariedad como principio rector de las instituciones republicanas, donde las reglas de juego en abstracto ocultan la persistencia de la discrecionalidad y la prevalencia de la fuerza sobre la razón.

La fragilidad de esas instituciones evidencia que las reglas de juego no bastan para garantizar relaciones políticas justas y equitativas. Ningún juego se desenvuelve solamente sobre la base de las reglas. Se requieren además jugadores en condiciones igualitarias para jugar y árbitros ecuanímenes e imparciales. Y, sin duda, la posibilidad de impugnar un resultado fraguado es uno de los principios esenciales de ese juego que llamamos democracia.

Notas

[1] Mientras el Presidente enfatizó, desde el inicio de su gobierno el fortalecimiento de planes sociales orientados a la inclusión social, con aciertos y desaciertos, el PLRA apostó por mantener las relaciones asimétricas de mercado favoreciendo, sobre esa base, la inversión privada, de carácter nacional (agropecuaria y comercial) o transnacional. Un proyecto por el que apostó incansablemente y que ahora podrá impulsar es la instalación de la empresa multinacional “Río Tinto”, a la que ya se facilitaron fondos para estudios de factibilidad (!) y a la que se propone el otorgamiento de subsidios en energía por parte del Estado.

[2] Fogel, Ramón; “Concentración de tierras: Títulos con vicios legales y el Estado ausente”, Revista Acción, N° 323, Abril de 2012, Pág. 5.

[3] Ibidem, Pag. 6.

[4] El INDERT inició una mensura judicial para determinar los límites y superficie exacta del inmueble mal habido del empresario Blas N. Riquelme -reconocido político stronista- denominado “Campos Morombi” para recuperarlo porque era de patrimonio fiscal. El empresario emprendió una demanda judicial solicitando la usucapión de dichas tierras, alegando que la utilizaba ininterrumpidamente desde hace más de dos décadas. El juzgado, sin pedir informes a las entidades competentes sobre la situación legal del inmueble y sobre sus registros públicos, sentencia de forma sospechosamente expeditiva a favor de Riquelme. Una asociación de campesinos, informados sobre esta situación, decide ocupar las tierras, ante lo cual la fiscalía y el juzgado locales, de manera irregular e ilegítima, promueven el desalojo, ejecutado el 15 de junio y tras lo cual se suceden el trágico enfrentamiento entre policías y campesinos.

[5] La enorme dimensión de las tierras mal habidas hace difícil el proceso de recuperación para el Estado puesto que los empresarios rurales, detentándolas de forma irregular, traban las mensuras judiciales y arguyen que con ellas se busca desestabilizar el orden social.

[6] El dictamen del interventor sobre la situación del sistema de propiedad agrícola y de los registros de la tierra, no iba a tener incidencia en el saneamiento y regularización de la tenencia en el corto plazo, como ya lo mostró la lentitud y falta de voluntad del gobierno en los años que precedieron. Pero sí podía sentar las bases para una revisión de la estructura agraria siempre y cuando contara con el suficiente apoyo social y político.

[7] Ortiz, Arístides; “Discurso mediático y justificación de la desigualdad social”, Revista Acción, N° 323, Abril de 2012, Pág. 19-21.

[8] En el caso del MERCOSUR, es cierto que dicho marco de integración sirvió sobre todo a los intereses de las dos grandes potencias regionales, Brasil y Argentina. La crisis en torno a la destitución del Presidente Lugo es utilizada por ésta última para disimular los obstáculos que sistemáticamente fue poniendo a Paraguay desde el inicio de la unión aduanera, en especial con las trabas para el ingreso de productos manufacturados paraguayos al país vecino en el primer semestre de 2012. Ante este hecho, Uruguay y Paraguay han iniciado un proceso de integración complementaria con Bolivia, el acuerdo URUPABOL, para fortalecer las economías de estos países ante sus poderosos vecinos.

¿Qué pasó en Paraguay?

Por César Romero

Juicio político sumario, definían los medios de derechas. Golpe parlamentario, los de izquierdas. Los conservadores referían una institucionalidad forzada. Lo cierto es que en Paraguay pasan muchas cosas desde que un Obispo de la Iglesia Católica primero amagó y finalmente ingreso a la arena política como aliado de un conglomerado de partidos y movimientos sociales, para acceder al Poder Ejecutivo de esta República que el mes pasado cumplía 201 años de vida independiente. Después de 4 años de gobierno y a 9 meses de unas elecciones generales, fue depuesto en menos de 48 horas, en una semana de hechos que todavía cuestan entender a cualquier analista.

Lugo había ganado las elecciones de abril de 2008 en una misma chapa con Federico Franco su sucesor con una alianza formada a meses de las elecciones. Con la Alianza Patriótica para el Cambio con 41% votos derrotó al Partido Colorado (31%). Los Colorados después de 61 años entregaban la Presidencia de la Republica tras un proceso eleccionario y por primera vez en la historia del país se inauguraba la alternancia política pacífica. Los partidos UNACE (22%), Patria Querida (2%) y los votos nulos (1%) y blancos (2%) se repartían las preferencias restantes. Sin embargo la fuerza de Lugo en el Parlamento no estaba cimentada efectivamente ya que contaba solo con 5 votos incondicionales de los 125 de ambas cámaras. El Partido Liberal de Franco su principal aliado, con unos 45 parlamentarios sumaba los votos que le permitía sentarse a negociar. La supremacía Colorada en la Corte Suprema de Justicia seguía indemne desde la mitad del siglo pasado.

Paraguay no conocía en su historia de traspasos de poder entre signos partidarios distintos sin golpes, asonadas o revoluciones. Aquí el primer elemento histórico que podemos definir también cultural en la idiosincrasia política paraguaya. Y la cultura tiene su peso. Ya en la primera semana pos elecciones Lugo y Franco se distanciaron. En el reparto de responsabilidades para el gobierno, Lugo jugo a promover nuevos liderazgos en el partido de Franco. En 4 años estimuló y también frenó con cargos a corrientes internas re-instalándose en el Liberalismo las luchas intestinas propias de su centenaria historia. El Partido Colorado se ocupó de reorganizarse para volver al poder, no sin luchas internas ante la posibilidad de concretar el objetivo con un proceso electoral en puertas. En las elecciones municipales del 2010, el Partido Colorado arrasó.

Crear una nueva hegemonía, era el argumento sottovoce que los allegados a Lugo esgrimían como explicación a las movidas de pieza que se hacían en el Gabinete del ex – Obispo, que hoy incluso depuesto mantiene un alto nivel de popularidad y aceptación (50%) pese al desgaste en función de gobierno, los escándalos de paternidad y las denuncias de nepotismo, mediocridad, adulonería, inutilidad y corrupción que en nada diferenciaron su gobierno de los anteriores. A la par se venía impostando la posibilidad de que uno de los aliados de izquierda cercano a Lugo, sea el candidato a sucederlo.

Lo que Lugo no forzó para nada fue la creación de políticas de estado que brinden un giro copernicano en la historia de los más los pobres. Quizás porque era consciente de sus fuerzas. Si bien no compró una hectárea de tierra para la reforma agraria, emblema de su campaña, movilizó y dio dinamismo a políticas sociales creadas por su antecesor el Colorado Nicanor Duarte, realizando con ellas una cobertura nunca antes vista.

El gobierno de Lugo continuó con la misma matriz políticas económicas del Partido Colorado. Negoció y consiguió con dignidad que Brasil reconozca mayores beneficios a Paraguay con el tratado energético de Itaipú. Con la Argentina para el caso de Yacyreta no le fue bien pese a los esfuerzos. En el concierto internacional, visibilizó a Paraguay no solo por las particularidades de su condición personal, si no porque llevó una voz diferente en los distintos ámbitos. Sembró numerosas iniciativas de carácter social iniciando el mejoramiento de caminos y rutas, impulsando la salud gratuita y la informatización de la educación escolar. Lugo, en definitiva visibilizó a las clases más desfavorecidas del Paraguay.

El depuesto presidente resultó impredecible con su estilo obispal que caracterizó estos 4 años de gobierno. Almorzaba con campesinos y cenaba con estancieros y empresarios del agro negocios. Exponía su condición de católico comprometido a medida que surgían sus escándalos personales. Escuchaba a todos pero terminaba haciendo lo que no le sugerían.

Negociaba con Liberales pero entregaba poder a los Colorados y a la Izquierda. Llegó a vetar proyectos de leyes que el mismo promovió. Toda la prudencia y el sigilo característico de estas contradicciones que se estima un clero lo realiza en el más invisible anonimato, el lo hacía frente a las cámaras. Y la interpretación era libre, por supuesto. Incluso, depuesto aceptó irse para al día siguiente desconocer todo el proceso que lo destituyó.

“Que hace Lugo, conversando con estos invasores de tierras. Esto no puede ser. Aquí lo que falta es que mueran unos cuantos” me decía el año pasado un acaudalado empresario nacido y prohijado en la dictadura de 34 años de Alfredo Stroessner. Régimen cuyos males seguimos padeciendo los paraguayos, sobre todo en cuanto a estructura de la tenencia de la tierra que hace que el 82% de la superficie esté en manos del 2% de la población. Aquella expresión quizás era una añoranza a los métodos que los personeros de la dictadura reivindicaban para instalar “la paz y el orden” de la que se jactaban el dictador y sus correligionarios que hasta hoy copan los cargos públicos, diplomáticos y políticos.

Así, el 15 de junio pasado, en Curuguaty, una localidad cercana a la frontera del Brasil, mueren 11 campesinos y 6 policías en un procedimiento de allanamiento fiscal y judicial a una ocupación de tierras. La propiedad de unas 2 mil hectáreas registradas a nombre de un conocido político colorado, estaban reivindicadas como malhabidas de posesión fraudulenta, por un grupo de 50 campesinos que se tenía información que estaban armados. Ante la conmoción de los hechos sin precedentes, renuncian el Ministro del Interior (Ministerio político por excelencia y responsable de la seguridad civil) y el Jefe de Policía. Lugo nombra como responsable de la cartera a un político colorado que había sido Fiscal General del Estado hasta hacia unos meses atrás y a quien el mismo había acusado de participar de una conspiración para derrocarlo en el primer año de su mandato. Como comandante de la policía, nombra al oficial que comandó los operativos Curuguaty.

La reacción fue explosiva y generalizada. Por este hecho referido y otras desprolijidades de la administración de Lugo que en su momento fueron escándalos políticos, el Partido Colorado pidió el juicio político en los términos que establece en la Constitución Nacional del Paraguay. Los liberales pidieron el cambio del Ministro del Interior nombrado y desoídos por Lugo casi por unanimidad se adhirieron a la propuesta Colorada. También los demás partidos, excepto los incondicionales de la Izquierda. La Cámara de Diputados por 61 votos a 1 aceptó el pedido de juicio y corrió traslado a la Cámara de Senadores que dictó un reglamento que establecía plazos de unas 24 horas para sustanciar el caso. Lugo pidió la inconstitucionalidad de la medida al Poder Judicial. Tres abogados presentaron su defensa en las 2 horas que se establecieron para el efecto.

El libelo acusatorio presentado por los fiscales acusadores de la Cámara de Diputados fue destrozado por la defensa del Presidente. La decisión sin embargo estaba tomada. Los Senadores por 39 votos a 4 lo destituyeron declarándolo culpable. En el palacio de Gobierno el ex-Obispo en compañía de sus más cercanos colaboradores inauguraba otra condición, la de Ex-Presidente y se iba a su casa, decía él, “por la puerta grande, la del corazón de sus compatriotas” desoyendo a sus íntimos que recomendaban saque a las Fuerzas Armadas a las calles, donde unas 10 mil personas se manifestaban a su favor y otras tanto en su contra.

Con la ausencia de los principales exponentes del Partido Colorado, que optaron por no participar de los actos que después de 72 años instalaba a sus principales adversarios en el Poder Ejecutivo, Federico Franco juraba en el parlamento ante la euforia de algunos de sus partidarios, los de su corriente interna. Unos días después la Corte Suprema de Justicia rechazaba la acción de inconstitucionalidad presentada por Lugo, citando como el argumento central un párrafo de un libro sobre derecho constitucional a dos tomos publicado por uno de los abogados que defendió a Lugo.

¿Qué es lo que estamos por hacer?” ...“y decime vos, si tenes claro algún criterio...” es una conversación breve entre un Senador Colorado y otro Liberal en uno de los cuarto intermedio de la maratónica sesión que sentenció el inicio de “la era post Lugo”, como titula uno de los medios de prensa paraguayos.

¿Decisiones apuradas y trascendentes en medio de una gran confusión? ¿Plan certero? A juzgar de todo lo expuesto si bien este escenario estaba en la agenda de algunos, como una “acción alternativa”, no es menos cierto que todos los actores actuaron movidos por intereses. Todos. Incluso los diplomáticos los que vinieron a informarse de la situación y terminaron recomendando a las Fuerzas Armadas una intervención para restaurar el orden. El Partido Colorado, para destrozarse toda posibilidad de la Alianza Patriótica de continuar en el poder. El UNACE y Patria Querida para forzar una alianza que los lleve al poder. Los Liberales por la posibilidad de hacerse del poder en un año electoral.

Incluso los mandatarios de países del MERCOSUR y UNASUR, terminan aprovechando la ocasión para “corregir al socio rebelde” y sustanciar el ingreso de Venezuela al MERCOSUR que venía siendo postergado hacia años por el parlamento paraguayo. El Nuncio Apostólico de la Santa Sede fue el primer representante diplomático en presentar sus saludos al

nuevo Presidente, los Obispos de la Iglesia católica que le habían pedido a Lugo que no se presente a las elecciones, ahora, un día antes le pedían que renuncie para evitar un derramamiento de sangre.

Y como del árbol caído todo el mundo hace leña, los partidarios de Lugo, visto que con su destitución se extinguieron los impedimentos constitucionales que tenía para presentarse a las próximas elecciones, lo candidatearán a Senador al frente de una lista que una veintena de movimientos y partidos políticos que estando en el poder no lograban ponerse de acuerdo. Algunos que no tendrán cabida en los primeros lugares de la lista, empiezan a separarse del Ex-Presidente especulando otras oportunidades del proceso que continuará.

Como corolario de esto que parece el relato de un drama en varios actos, el lector sacara sus conclusiones. A mí, me da pena mi país.

Franco, el presidente de un grupo de conjurados

Por Ariel Zak

Dólares y negocios son las prioridades del nuevo jefe de Estado paraguayo, el hombre que llegó al poder tras el fugaz juicio político que destituyó al ex obispo Fernando Lugo.

Federico Franco, el vicepresidente de Paraguay que –de la noche a la mañana– se tornó en Presidente, camina apurado por la Casa de Gobierno, blanca y majestuosa. Los periodistas internacionales intentan detenerlo, pero resulta imposible. El tema del día es la sanción del Mercosur a su país, pero poco parece importarle. Son las 9.25, y lo que a él más le preocupa ocurrirá en su despacho, en cinco minutos. Lo visitarán acaudalados empresarios norteamericanos: hablarán de dólares.

La escena transcurre la mañana del jueves 28 de junio, día en que los cancilleres del Mercosur decidieron la “suspensión” de Paraguay en la cumbre del Mercosur por considerar que en ese país se quebró el orden democrático. "En Paraguay se acabó el tutelaje de países vecinos", les escupirá al día siguiente, incluso antes de que se pronuncien los presidentes regionales.

La agenda de Franco, el hombre que llegó al poder tras el fugaz juicio político que destituyó al ex obispo Fernando Lugo, tiene otras prioridades. En el sexto día al frente del Ejecutivo y en el segundo desde que ocupó el despacho en el palacio presidencial, abrió las puertas de su nueva oficina a los "empresarios norteamericanos", como los definió su Dirección de Información. Ingresaron –entonces– los representantes de la empresa Crescent Global Oil-Pirity Hidorcarburos. Se encontraron con un hombre despreocupado, extrañamente alegre, envuelto en un impecable traje negro muy distante de los atuendos que elegía Lugo. Cuestión de imagen. Y de negocios.

En esta lógica de darles prioridad a los dólares, la agenda política internacional parece tenerlo sin cuidado. Lejos de intentar indagar la vía diplomática para revertir el rechazo regional –y la indiferencia mundial– a su gobierno, encabezado por Argentina que retiró a su embajador en Paraguay, Franco va directo al choque.

Así, cuando el lunes pasado, en una rueda de prensa los periodistas le preguntaron por la postura adoptada por Cristina Fernández de Kirchner, Franco no dudó en deslizar una amenaza velada: "Gran parte de la iluminación de Buenos Aires se la estamos entregando nosotros desde Yacyretá".

Lo que el mundo piense de él no parece preocuparle al titular de este Ejecutivo sólo reconocido por España, Taiwan, Canadá, Alemania y el Vaticano. Son otras las cosas que le interesan a este hombre que hizo campaña junto a Lugo y se convirtió en su principal opositor al día siguiente de que llagaron al poder, el 28 de abril de 2008, cuando todavía lucía un firme bigote negro que ha sido borrado de su rostro hace pocos meses.

No por casualidad, el primer respaldo que recibió fue por parte de la Iglesia cuando, al día siguiente de la destitución de Lugo, fue acompañado por el nuncio apostólico, Eliseo Ariotti, a recorrer el Palacio de Gobierno. Esa misma tarde Ariotti le regaló una misa en su honor. El gesto fue bien valorado por este devoto creyente que concurre asiduamente a la parroquia Medalla Milagrosa, en las afueras de Asunción, y que acostumbra a persignarse antes de sentarse a comer.

Desde que tomó el poder, Franco repitió que su prioridad es "ordenar la casa" y no la "comunidad internacional". Con ese fin, en menos de una semana intervino las Fuerzas Armadas y nombró un hombre de su confianza, porque tanto él como sus colaboradores consideraban que la cúpula militar anterior tenía buenas relaciones con el presidente caído en desgracia.

También se ocupó de los brasiguayos, quizá los actores más poderosos de Paraguay. Unos 500 mil –según el cálculo de Franco– latifundistas brasileños que manejan el mercado agropecuario. Ya los recibió, en su semana de bautismo.

Con ese mismo estilo, despreocupado por cómo pudieran leerse sus gestos políticos, Franco pasó el miércoles por el Congreso. Como si le estuviera enrostrando a Lugo el golpe que le dio el Parlamento después de 23 intentos fallidos. Reunió a diputados y senadores que habían votado a favor de la destitución del ex obispo durante el juicio político express para presentarles a su equipo económico.

Sin rodeos, les pidió que aprobaran un paquete de 500 millones de dólares. "Sin ayuda de los diputados y senadores, todo esto será estéril", les dijo a los mismos que le negaron la posibilidad de contraer esa deuda al gobierno de Lugo. Todos, sin excepción, lo aplaudieron en el lujoso Salón VIP de Senadores, con vista al río, en el quinto piso del Congreso, mientras degustaban, de entrada, una ensalada de hojas verdes y camarones.

Y no se detuvo. Sonriente, sin desajustarse su corbata azul con fantasías, se frotó las manos y les dijo a los legisladores, entre los que había colorados y representantes de Unacé, el partido de Lino Oviedo: "Qué bien le vendrían a Paraguay unos 3,5 billones de dólares". Se refería a la inversión inicial que prometió la empresa canadiense Río Tinto (planta de Alumino), si consigue hacerse de las condiciones adecuadas para desembarcar en Paraguay. Las condiciones son, entre otras, exenciones impositivas y tarifas subsidiadas, algo imposible sin la colaboración (y aprobación) del Parlamento.

A unas pocas cuadras del congreso, pero muy lejos de la frialdad de los números y el olor de los camarones, un grupo de estudiantes y trabajadores acampó frente al edificio de la Televisión Pública. En esas cuadras que separan a la Plaza de Armas (donde está el Congreso) del autodenominado "bastión luguista", descansan tres carros hidrantes siempre dispuestos a enfrentar a quien se oponga a Franco.

Al pueblo le cuesta salir a la calle. Se siente el miedo. "Somos un pueblo muy golpeado, hemos pasado la vida bajo dictaduras", se excusó, desanimado, Carlos, un taxista que reza por el retorno de Lugo al poder. De todas formas, en la puerta de la TV Pública todavía sobreviven las pintadas que rezan "Fuera Franco, viva la democracia", aunque el campamento allí montado se reduce a diario.

"Lugo se retiró como un obispo y no como un Presidente elegido por el pueblo", lamentó uno de los jóvenes que permanecen de guardia y que hasta antes del golpe luchaba por cobrar su salario. Es que, paradójicamente, la TV Pública paraguaya es un proyecto naciente que ni siquiera tiene un presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo.

Al propio Lugo le faltó entusiasmo para conducir la resistencia. No pudo sostener con hechos la buena imagen que dejó en sus seguidores cuando, empujado por los fundadores de Frente por la Recuperación Democrática (que nació la misma noche del golpe) pasó a hablar en Micrófono Abierto, dispuesto frente al canal público. La multitud que lo acompañó esa madrugada, se entusiasmó.

Después bajó su perfil. Amagó con viajar a la Cumbre del Mercosur, pero desistió. Se dedicó toda la semana a analizar tibias variantes para recuperar su gobierno por la vía legal junto con su equipo jurídico que, ya el lunes, recibió el revés de la Corte Suprema de Justicia. Se conformó con dar breves reportajes a medios internacionales. Nada más.

En el interior del país, se sucedieron marchas y manifestaciones en su nombre. El departamento de San Pedro, su lugar de origen, fue el emblema. Pero, hasta ahora, nada alcanzó. El martes, empujado por los jóvenes que no bajaron los brazos, Lugo comenzará a recorrer el país, nuevamente, como lo hizo en la campaña que lo volvió presidente. Los movimientos campesinos, por su parte, quieren revertir la historia con una marcha nacional a Asunción. Una ciudad sumida en un profundo silencio.

Lugo: “El laboratorio de todo esto fue Honduras hace tres años, y aquí en Paraguay fue perfeccionado”

Gerardo Iglesias entrevista a Fernando Lugo

El pasado viernes (29/6) entrevistamos al Presidente Lugo, depuesto en su cargo a través de un sutil mecanismo constitucional y un grosero proceso que se asemeja a lo ocurrido en Honduras en junio de 2009, lo que pone en estado de alerta a toda la región.

-La intención es confundir a la opinión pública nacional e internacional, pero lo que sucedió aquí fue un golpe de Estado...

► ¡Sin lugar a dudas! Los medios de comunicación privados que responden a ciertos intereses, quieren dar la impresión de que aquí no ha pasado nada, que hubo una sucesión natural de cambio de Presidente de la República. Al mismo tiempo no dan a conocer los más de 40 espacios y lugares de resistencia activos, y la solidaridad internacional que sí confirman que aquí ha pasado algo.

Aquí hubo una ruptura del orden democrático, aquí hubo un juicio político sin razón de ser, se efectuó un golpe parlamentario. Hay varios nombres: golpe express; Cristina Kirchner mencionó que se trata de un golpe suave. El laboratorio de todo esto fue Honduras hace tres años, y aquí en Paraguay fue perfeccionado.

-Llegué anoche, y me llamó la atención la ausencia de la resistencia al golpe. ¿Esa situación tiene que ver con su pronunciamiento de efectuar una resistencia en paz?

► Sí, una resistencia pacífica. En los 40 piquetes que se han realizado no ha habido violencia. Hoy, el puente que nos une con Brasil fue cerrado por dos horas, con gente de Paraguay y brasilera. El puente que nos une con Argentina, en Encarnación, también fue cerrado. La gente está expresando su descontento, su indignación. Hay una sana y pacífica indignación ciudadana. Pero estas manifestaciones no aparecen en la prensa.

Nosotros hacemos hincapié en convocar a manifestaciones pacíficas, uso de la fuerza sí, pero sin violencia y, al mismo tiempo, no salirse del orden jurídico nacional. Las manifestaciones son permitidas y creo que la ciudadanía está despertando a una gran conciencia cívica en todo el país. En siete departamentos se han producido fuertes expresiones de rechazo al golpe, y esto continuará, porque creemos que la voluntad popular expresada el 20 de abril de 2008 fue quebrantada con este juicio político o golpe parlamentario.

-Usted dice no salirse del orden jurídico nacional, los golpistas afirman también que no violentaron ese orden...

► Se respetó, se le dio un viso legal, pero como dijo el presidente Juan Manuel Santos (Colombia), ese viso legal fue violentado, fue forzado.

Aquí no se respetó el debido proceso y tampoco el derecho a la defensa. Cualquier muchacho que tenga un accidente con una moto tiene derecho a dos, tres, cuatro, hasta 18 días para preparar su defensa, yo tuve sólo 17 horas y dos horas para exponerla. En el juicio al presidente José P. Guggiari (1928-1932), él tuvo tres meses para preparar su defensa y otros tuvieron semanas, a mí me dieron 17 horas.

En menos de 24 horas no se puede deponer a un Presidente electo por las mayorías populares. Por eso nosotros estamos recurriendo a la Corte Suprema de Justicia y a las instancias internacionales competentes, como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creemos que esto fue injusto y se violentó la voluntad popular y las garantías del justo proceso.

-¿Quién está detrás del golpe?

► Grupos que nunca muestran los rostros. Grupos económicos, también la clase política tradicional, que no acepta que en

este país pueda haber prácticas políticas diferentes, prácticas políticas que no se basan en el clientelismo ni el prebendarismo, que son comunes de los partidos tradicionales que ahora se unieron en el golpe por primera vez en la historia.

-¿Cuál es vuestra agenda ahora?

► Vamos a salir por todo el país explicando a la ciudadanía lo que pasó. El próximo martes vamos a estar en Caazapá, el jueves vamos a estar en las barriadas de Asunción, y así iremos recorriendo todo el país. Y como lo mencioné, vamos a insistir ante la Corte Suprema de Justicia y ante los organismos internacionales competentes.

-¿Cómo evalúa la solidaridad manifestada por los gobiernos de la región?

► Me da una garantía, confirma que lo que sucedido aquí en Paraguay preocupa porque se trató de una ruptura del orden democrático, y los países hermanos han manifestado su solidaridad de manera ferviente. Siempre dijimos que como país mediterráneo no podíamos estar aislados ni económica ni políticamente, lamentablemente esto ha ocurrido con el golpe.

Error de coyuntura en el cerco oligárquico

Por Aristides Ortiz

La mañana del miércoles 20 de junio, Ricardo Canese y Miguel Angel López Perito llegaban presurosos a la reunión del comité político ampliado del PLRA en el local del este partido. Ambos llevaban sendas carpetas bajo el brazo. En aquel ambiente a un mismo tiempo frío y tenso depositaron la desesperación de Lugo y el Frente Guasu: la candidatura presidencial de 2013 para el PLRA, con el apoyo incondicional del Frente, y una sustancial modificación en el gabinete del gobierno para que el PLRA ocupe más espacios de los que estaba ocupando. Ambos se esmeraron en garantizar que se cumplirían las promesas y en distender los rostros que parecían piedras.

Minutos antes de entrar a la misma reunión, un casi desanimado Blas Llano respondía a la prensa: "... Se acabó el plazo ...", ante la consulta de si seguirían en alianza con el gobierno de Lugo. Casi dos horas después, el mismo Llano, anunciaba, como presidente del PLRA, que su partido acompañaba el juicio político a Lugo, el que ya tenía el apoyo de la ANR, la Unace y el Partido Patria Querida. El veredicto liberal determinaba amargamente la suerte del todavía mandatario. Casi tres días después, el viernes 22, Lugo y su gabinete se despedían en Palacio del Poder Ejecutivo.

El exobispo había cometido un error de lectura y procedimiento en el contexto político inmediato que vivía el país. Mientras se concentraba en su estrategia de dividir al Partido Colorado negociando con Lilian Samaniego cargos y recursos (Candia Amarilla es hombre de Samaniego) y de aplacar el temor de la oligarquía terrateniente ante los sucesos de Curuguaty, poniendo en Interior a un ministro con mano dura, los liberales, principalmente Llano, caían en la cuenta de que se habían convertido en un convidado de piedra en el gobierno que asumió en agosto de 2008. Llano se había hartado de los silencios del presidente las veces que le hacía pedidos políticos (la última fue la destitución de Candia Amarilla), y optó por cambiar de estrategia. El excusa había desatendido el poder efectivo que tiene su principal aliado en el Congreso en momentos de crisis. Y lo desatendió porque no leyó el efecto dominó que podrían tener los sangrientos sucesos de Curuguaty.

Otro hecho ocurrido unas semanas atrás talvez tampoco fue atendido por Lugo y sus más estrechos colaboradores: el veto presidencial a la ampliación presupuestaria al TSJE (en la que estaban incluidos los 50 millones de dólares para que los partidos paguen los sueldos a sus operadores políticos, de cara a 2013) había sido un golpe duro para la ANR, el PLRA y la Unace. Quizás leyeron que fue una jugada más de Lugo en su afán de debilitar a los partidos tradicionales. Las posibilidades de que este hecho haya influido en el ánimo de los parlamentarios colorados, liberales y oviedistas para el juicio político, son muchas.

Dos actores se movieron con vigor y habilidad en este escenario pregolpe parlamentario: Horacio Cartes, hoy el más influyente dirigente dentro de la ANR, y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que articula a los poderosos sectores del agronegocio en Paraguay, hoy hegemónicos entre las fuerzas oligarquías. Ambos actores desarrollaron sus acciones sobre los impactantes 18 policías y campesinos muertos en Curuguaty.

Cartes, asustado por la fuerza que iba cobrando Samaniego en las internas coloradas de la mano de Lugo, se movió rápido aprovechando la acumulada rabia de los partidos de derecha con representación parlamentaria contra el exobispo. Paralelamente, los dirigentes de la UGP participaron del libreto a la oligarquía ganadera y a los propietarios de los grandes medios de comunicación, cuyo argumento fue que el gobierno de Lugo y las izquierdas amenazaban seriamente los territorios rurales sobre los que se asientan sus intereses.

Así, estos actores políticos y económicos terminaron convergiendo para el fulminante golpe parlamentario del 22 de junio, dando al país una lección política de cómo debe articularse una clase social cuando sus intereses están amenazados por un determinado proceso político.

La causa de fondo

Toda la coyuntura descrita en los párrafos de arriba se desarrolla dentro de una estructura de poder, histórico en el

Paraguay. Una estructura cuya base es la propiedad y el uso de la tierra. En este sentido, el gobierno que asumió en el 2008 venía, no solucionando, sino exponiendo, visibilizando cada vez más el problema de la concentración de la tierra en pocas manos, y las consecuencias en términos de desigualdad social que ello implicaba. Los últimos hechos, resonantes mediáticamente, fueron los casos de las tierras públicas usurpadas por Tranquilo Favero en Ñacunday y por Blas N. Riquelme en Curuguaty.

En forma general, puede interpretarse que la exposición del problema de la tierra a la sociedad, y los beneficios que tendría para todo el país su solución, fueron los elementos que crisparon los nervios de la vieja oligarquía para que se precipite a ejecutar la caída de Lugo. Paralelamente, puede también entenderse que los viejos administradores políticos de los intereses oligárquicos (ANR, PLRA y Unace) veían, nerviosos, cómo en el anterior escenario (que tuvo como principal actor al gobierno de Lugo) se iba desgastando cada vez más su legitimidad política y, por ello, amenazado su hegemonía dentro del Estado oligárquico, amenaza que los llevó a ejecutar la destitución del expresidente.

Sería correcto, y oportuno, poner en la lápida del fallecido gobierno que nunca tocó, ni pudo tocar, los intereses de la oligarquía paraguaya; por el contrario, en algunos aspectos, acrecentó el poder económico del ogro. Lo que sí hizo el caído gobierno fue exponer las crueldades del ogro, lo que aumentó la conciencia política de la gente, y mostrar, aunque haya sido muy pequeña esta muestra, que el Estado también puede servir a los más necesitados del país.

“Lo que se juega en Paraguay son las conquistas sociales que benefician a los más humildes”

Sergio Ferrari entrevista a Paí Oliva

El pasado viernes 22 de junio, en apenas 24 horas, Fernando Lugo, obispo católico y presidente del Paraguay fue objeto de un supersónico juicio político por parte del parlamento y destituido de su puesto. El pretexto para procesarlo fue el conflicto campesino que una semana antes había motivado 17 muertos y numerosos heridos en Curuguaty, una comunidad a 200 kilómetros de la capital Asunción. “Se trata de un golpe parlamentario” subraya el sacerdote paraguayo Francisco Paco Oliva, 1928, uno de los principales referentes sociales del país. El “Pai” Oliva (sacerdote en guaraní) jugó un rol decisivo en la movilización ciudadana que culminó en 1999 con la renuncia del antipopular presidente Raúl Cubas. Identificado con la teología de la liberación el Pai Oliva, que reside en un barrio popular y marginal de la capital, dirige numerosos proyectos sociales y ha impulsado importantes iniciativas participativas como el Parlamento Joven y el Foro Solidario.

P: ¿Cómo interpreta el marco institucional en el que se da la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio?

R: Somos una democracia parlamentarista. Y prácticamente desde la elección de Lugo en abril del 2008, los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Colorado, han estado frenando al presidente, amenazándolo de juicio político. La semana pasada creíamos que era una amenaza más. Pero la realidad indicó que no fue así.

P: ¿Esperaba el movimiento popular, la sociedad civil paraguaya, un desenlace político de esta naturaleza?

R: No. Nos pilló de sorpresa. En 24 horas se hizo todo y se procedió a su destitución y al nombramiento al frente del ejecutivo de Federico Franco, hasta entonces vicepresidente, y desde siempre con intenciones personales de poder.

P: Los medios ahora oficialistas hablan de proceso constitucional legítimo. Sectores populares y cada vez más amplios actores de la comunidad internacional consideran que se dio en Paraguay una ruptura de la constitucionalidad. ¿Cuál es su opinión?

R: Es un golpe de estado parlamentario. Los partidos tradicionales encontraron los 30 votos que necesitaban y dieron la sentencia. Luego, lo que vino, fue un circo puro. El veredicto hubiera sido el mismo con defensa o no de Lugo. Las acusaciones no fueron presentadas por escrito. Y las pruebas eran simples fotocopias de recortes de los diarios. La sanción contra Lugo había sido decretada antes de comenzar el juicio.

P: ¿La dimisión de Lugo es un hecho irreversible?

R: Los sectores populares y campesinos no la aceptan. Pero, la fuerza la tienen los dos partidos que ejecutaron el pseudo juicio exprés. Institucionalmente ya es un hecho consumado.

P: Es paradójico que el pretexto de la destitución sea un conflicto campesino, si se considera que Fernando Lugo, denominado “el Obispo de los pobres”, siempre se pronunció a favor del campesinado y la reforma agraria y llegó al Gobierno con el apoyo decidido fuerzas populares. ¿Los hechos que motivaron la destitución se tratan de una trampa de la extrema derecha contra Lugo o de una cierta ingenuidad política del ex- presidente?

R: Las dos cosas. Fue una trampa bien preparada ante la reacción-movilización que comenzaba a protagonizar el pueblo, participando y enviando señales claras a la clase política, especialmente a los partidos tradicionales de oposición. Les dio miedo esta participación creciente y decidieron pararla. La mejor manera fue decapitar al presidente a través del juicio político. Por otra parte, hay que reconocerlo, Lugo fue flojo en la promoción de la Reforma Agraria. El pueblo, el campesinado, la pedían cada vez con más fuerza, pero Lugo no se atrevió a materializarla.

P: Varias de las naciones latinoamericanas, entre ellas Brasil y Argentina, no aceptan como válida la dimisión de Lugo y el nombramiento de Franco. ¿Piensa que los Partidos Colorado y Liberal que apoyaron la destitución estarían dispuestos a reconsiderar esta nueva situación institucional frente a la presión de la comunidad internacional?

R: De ninguna manera. Estamos en el campo de la politiquería. Franco ha sido un vicepresidente de la oposición. Nunca va a reconsiderar nada y menos el Partido Liberal que después de muchos años concreta su aspiración de tener un presidente en el poder. Aunque en el fondo, el que va a salir ganando es el Partido Colorado, que probablemente subirá al poder luego de las próximas elecciones de abril del 2013. Lo ocurrido es solamente un adelanto de lo que temíamos sucediera: el Partido Colorado estuvo 60 años sin interrupción en el poder. Lugo cortó esa racha. En el 2013 el Partido Colorado, casi con seguridad, volverá. Entre sus seguidores naturales y los votos que logre comprar hará todo para recuperar el poder perdido hace cuatro años. A no ser que la juventud se organice, se movilice y se imponga. Es la mayoría absoluta y después de este episodio trágico que acabamos de vivir institucionalmente en Paraguay, va abriendo los ojos.

P: ¿Cuál es la mejor manera de expresar hoy la solidaridad internacional con los sectores populares paraguayos? ¿Qué esperan ustedes de la sociedad civil del mundo entero?

R: ¡Qué informen! ¡Qué expliquen lo que pasó en mi país! Que cuenten con detalles cómo la sentencia de la destitución del Presidente Lugo estaba ya elaborada antes del juicio. Que todo fue un circo, un teatro. También que sean conscientes – y en este sentido se posicionen- que los perdedores son aquellos que se beneficiaron con las conquistas sociales resultantes de la gestión de gobierno de Lugo.

P: ¿Más allá de los hechos puntuales, se corre el riesgo de una cierta ingobernabilidad estratégica en Paraguay?

R: En el fondo, es necesario hacer una constatación clave: a los Estados Unidos les molestan Hugo Chávez (Venezuela) y los otros dirigentes políticos que tienen hoy en el continente una posición progresista. Y poco a poco, promoverán su partida, sea como fuera.

Brasil, si se conserva como ahora puede ser un freno. Pero no olvidemos que Brasil fue y es un imperio con intereses propios. No me refiero al pueblo brasileño, a los campesinos, a los sin tierra, sino a la política exterior de ese país que funciona a la perfección y que tiene aspiraciones de expansión...

P: ¿Qué es lo más importante que pierde Paraguay con la destitución de Lugo?

R: Es un golpe muy fuerte al proceso que estaba naciendo en el pueblo para mejorar sus condiciones de vida, su cotidianeidad. Sin olvidar que un amplio sector de esos sectores populares, viven hoy en la más total extrema pobreza.

P: Para concluir:¿cómo valora la gestión de Fernando Lugo durante su presidencia de casi cuatro años?

R: Con muy buenas intenciones, aunque bastante ineficiente y mucha ingenuidad en su gestión.

Antecedentes del Juicio Político a Fernando Lugo

Por India Juliana

1. Crisis del Poder Judicial

El jueves 12 de abril de 2012, la Cámara de Senadores decidió no confirmar en sus cargos a siete de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia en Paraguay. Con la acción se desconocía también la inamovilidad de los mismos en sus cargos

El Poder Legislativo se otorgó atribuciones que, al decir del Judicial, no le correspondían. Así se inició lo que los medios llamaron La Crisis de Poderes. Estos ministros que debían ser cambiados, según los senadores, se habían autodeclarado inamovibles por lo que fueron cuestionados duramente, no solo por los legisladores sino por el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

Si bien se hicieron críticas a la forma en que los senadores pretendieron remover de sus cargos a los magistrados, no se cuestionó la falta de ética de su permanencia por su autodeclarada inamovilidad.

Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo fue el principal cuestionador del accionar de la corte, no solo por la inamovilidad de sus miembros sino por la parcialidad de sus fallos ya que estaba conformado por representantes del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana), en su mayoría, y del Partido Liberal Radical Auténtico.

Un acuerdo que incluyó al PLRA, el Partido Patria Querida, UNACE, y los senadores oficialistas dejó sin efecto la inamovilidad de siete miembros de la corte: Víctor Núñez, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay Zuccolillo, Alicia Pucheta de Correa y José Raúl Torres Kirmser. Cuatro de ellos colorados y tres liberales

El Poder Judicial denunció, junto con la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), un Golpe Institucional y amenazó con una manifestación.

2. Crisis del Poder Legislativo

A inicios de marzo de 2012 se presentaron dos proyectos de ley que aumentaban el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 215 mil millones de guaraníes (51 millones de dólares). Contemplaba 65.000 millones para la campaña de inscripción de los paraguayos en el exterior al Registro Cívico Permanente, y 150.000 millones para salarios de funcionarios que realicen registros en el padrón oficial, un disfraz obvio para la contratación de operadores para los partidos políticos tradicionales.

El Poder Ejecutivo vetó el aumento. Explicó que lo hacía por la falta de recursos económicos, y, por sobre todo seguía la recomendación del ministro de Hacienda, Dionisio Borda.

El 27 de Mayo de 2012 volvió a sesionar la Cámara de Diputados y aceptó el veto en lo que hace a la inscripción de paraguayos residentes en el extranjero. Sin embargo, aprobó 150.000 millones para los operadores políticos.

Como respuesta a la decisión tomada por los diputados, surgió una manifestación ciudadana convocada a través de redes sociales y respaldadas por medios de comunicación. La protesta se denominó "After Office Revolucionario" y convocó principalmente a sectores de la clase media asuncena. El acto reunió a personas apartadas habitualmente de reivindicaciones sociales. Finalmente y por presión social, la decisión de los diputados fue revertida en la Cámara de Senadores.

En la misma semana la Cámara Alta (Senado) debía decidir sobre un Proyecto de Ley que planteaba la modificación del sistema de elección de los legisladores paraguayos. La convocatoria se repitió y tuvo mucha fuerza. Generó la sensación de que una ciudadanía, harta de los abusos del Congreso, obtendría de nuevo una victoria. Mas no fue así.

A pesar de la presión, el Senado decidió postergar el tratamiento del Proyecto de Ley hasta el año 2015. Tal fue la

indignación contra los parlamentarios que tuvieron que huir por la puerta trasera del Congreso de la Nación.

Ante la impotencia, los manifestantes se dirigieron hacia los locales de los partidos políticos tradicionales y causaron destrozos. También atacaron vehículos identificados como propiedad de los parlamentarios.

Con ciudadanía que expresaba no sentirse representada entraba en crisis el Poder Legislativo.

El nudo que desencadena la decisiva voluntad de tumbar al gobierno de Fernando Lugo tuvo su centro en la crisis de representatividad del sistema democrático, plasmada en un Poder Legislativo absolutamente deslegitimado y desprestigiado, al punto de “escapar como ratas” –expresión ampliamente difundida en los días de protesta-.

Los movimientos, campesino y de trabajadores habían hecho amplio uso del derecho a la protesta a lo largo de los últimos 23 años. Con las movilizaciones de los sectores de clase media y media alta, el llamado al “ejercicio de ciudadanía” se vio legitimado e inobjetable para los medios y la sociedad entera. “Estamos aprendiendo a vivir en democracia”, es lo que se repetía en las radios y canales de televisión de Asunción.

3. Masacre en Curuguaty

El viernes 15 de junio murieron en un enfrentamiento, 6 policías y 11 campesinos, en la Estancia Campos Morombi de la Colonia Yvy Pyta, Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyu.

Era difícil discutir el carácter fraudulento en que el político colorado, Blas N. Riquelme detentaba las tierras. Tanto que políticos de partidos tradicionales, de la zona, apoyaban la ocupación campesina. Ya en el año 2004, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos había solicitado una mensura judicial para recuperar las tierras públicas.

Era muy improbable que la lucha campesina fracasase, como también impensable que un desalojo con características ultra violentas se diera. Sin embargo, los ocupantes recibieron información, durante toda la semana anterior a la masacre, de que serían desalojados y que existía una lista de 7 dirigentes a ser asesinados, por formar parte de la supuesta guerrilla “Ejército del Pueblo Paraguayo”.

Los campesinos se prepararon para resistir. Sucedió tal cual esperaban, con el agregado de que también murieron policías. Algunos, según el informe forense, recibieron disparos de larga distancia, por lo que no se descarta que entre los campesinos haya habido infiltrados. Igualmente, el clima de tensión al que se llega en los desalojos mantiene siempre latente la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos violentos.

La Masacre de Curuguaty dejó claras dos cuestiones. Primero: que los sectores políticos buscaron y encontraron en las muertes un motivo de guerra (“casus belli”) para iniciar el Juicio Político; y, segundo: se confirmó que los campesinos no iban a dejarse avasallar por estructuras represivas que respondían descaradamente a una burguesía corrupta y parasitaria; se iban a defender de cualquier forma, como sea.

Con este hecho se cerró el círculo y el Golpe debía ponerse en marcha, a toda velocidad.

Como respuesta a la indignación generalizada, provocada por las muertes en Curuguaty, Fernando Lugo relevó al ministro Carlos Filizola y nombró, en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla.

Candia Amarilla, reconocido militante del Partido Colorado, fue fiscal general del Estado del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Se mostró implacable con sus acciones represivas hacia el campo popular. Antes había sido abogado y juez. En su juventud, militante del Grupo de Acción Anticomunista (GAA). Sus antecedentes van desde defensas a grandes narcotraficantes hasta el blanqueamiento a ex jerarcas del régimen stronista.

Candia parecía ser la respuesta de Lugo al sector agroganadero e industrial que pedía su cabeza. Sin embargo, su jugada hizo que los golpistas armaran el jaque mate.

Los colorados argumentaron un descontrol total y una inseguridad galopante, el Partido UNACE, de Lino César Oviedo, se alineó sin titubeos, mientras que el PLRA alegó una traición de Lugo por no haberlo llamado a resolver la crisis. El conservador y católico Partido Patria Querida cerró el juego con la colaboración del Partido Democrático Progresista (ex luguistas).

Acorralado, Lugo se sometió a un Juicio Político. Se le dio 2 (dos) horas para defenderse Fue destituido en menos de 24 horas y lo condenaron y apartaron del cargo, sin antes aclarar que las acusaciones eran de público conocimiento por lo que no necesitaban ser demostradas.

Sobre el “juicio político” al presidente Fernando Lugo Méndez

Por Luis Lezcano Claude

Introducción

Como advertencia previa, debe señalarse que el tema, por sus características e implicancias, exige alusiones no sólo jurídicas sino también políticas para su cabal comprensión.

El denominado “juicio político” llevado a cabo entre el jueves 21 y el viernes 22 de junio ppdo., fue un acto de barbarie, brutalidad y prepotencia de las cámaras legislativas, decidido previamente a nivel de los principales partidos políticos con representación en las mismas. Fue un acto manifiestamente arbitrario por su desconocimiento del ordenamiento jurídico y, por ende, contrario al Estado de derecho, realizado bajo el ropaje de las formas previstas en la Constitución para el juicio político. Por ello, bien puede ser calificado como un “golpe de estado legislativo”.

Todo el procedimiento apareció impregnado de la soberbia y de la idea de impunidad de poder llevarlo a cabo de cualquier forma y a cualquier costo, al tener el control fáctico de la situación. Las acusaciones inconsistentes, la pobrísima presentación de las mismas por los fiscales acusadores, los plazos brevísimos, la falta de discusión previa al dictamiento de la sentencia, demuestran el carácter absolutamente arbitrario de un procedimiento basado exclusivamente en una decisión política sustentada en contar con los votos necesarios para formular la acusación y dictar la sentencia condenatoria.

1. Desarrollo del juicio político

El jueves 21, por una amplia mayoría, la Cámara de Diputados resolvió formular la acusación. Votaron a favor no sólo los diputados del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE y el Partido Patria Querida – ideológicamente conservadores o de derecha, y que controlan el 93% de las bancas en dicha cámara- sino también la única diputada del Partido Democrático Popular, en teoría afín al Pdte. Lugo en lo ideológico.

La acusación se basó en los siguientes puntos:

- ▶ El acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería.
- ▶ El caso Ñacunday (invasiones de tierras en del departamento de Alto Paraná).
- ▶ La creciente inseguridad.
- ▶ La subscripción del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II.
- ▶ La matanza en Curuguaty (aproximadamente veinte personas entre campesinos y policías).

Posteriormente, se hizo la presentación oral del libelo acusatorio ante la Cámara de Senadores, por parte de los fiscales acusadores (cinco diputados).

La superficialidad y extraordinaria brevedad de esta presentación, así como la inconsistencia de las causales alegadas, ponían de manifiesto que se trataba del mero cumplimiento de un trámite cuyo final estaba asegurado.

En relación con todos los hechos mencionados, a lo sumo se podía alegar una responsabilidad general e indirecta del Presidente Lugo, aunque ninguno de ellos era de entidad suficiente como para justificar una sanción de tanta gravedad como la separación del cargo.

Entre las causales se destaca la referente a la subscripción del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II. Se trata éste de un acto

jurídicamente inexistente. Al respecto, lo actuado por el Poder Ejecutivo está encuadrado dentro de sus atribuciones. Además, el protocolo aún no fue sometido a la consideración del Congreso, oportunidad contemplada constitucionalmente para que este órgano ejerciendo su facultad de control sobre este tipo de actos, lo perfeccione al aprobarlo, o impida definitivamente su existencia, al no aprobarlo.

Es éste el procedimiento previsto al respecto y no el de considerar el hecho como una causal de mal desempeño de funciones que autoriza la realización de un juicio político y la destitución del titular del Ejecutivo como ha acontecido en este caso. La Ley Suprema establece que “los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados .. integran el derecho positivo nacional ...” (Art. 137 Cn.). Agrega luego que “los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137 (Art. 141 Cn.). Se requiere, pues, que el protocolo sea aprobado por el Congreso y ratificado por el Poder Ejecutivo para que sea incorporado al ordenamiento jurídico paraguayo. Hasta hoy se trata de una causal inexistente, muestra categórica de la arbitrariedad en la génesis del procedimiento. [1]

El viernes 22 de junio se llevó a cabo el “juicio” propiamente dicho, ante la Cámara de Senadores. Según el reglamento aprobado por la misma, la defensa –notificada de la acusación en la tarde-noche del día anterior- debía hacer su presentación oral a partir del mediodía (12:00) y por un tiempo que no excediera las dos horas.

Luego la Cámara de Senadores debía proceder a la admisión o no de las pruebas. A partir de las 15:30, en un tiempo de treinta minutos para cada una, las partes debían realizar la presentación de sus alegatos. Finalmente, el tribunal juzgador debía deliberar y dictar sentencia, lo cual estaba previsto para las 16:30.

Desde el comienzo del “juicio político” en la Cámara de Diputados, hasta el dictamiento de la sentencia respectiva por la Cámara de Senadores, transcurrieron aproximadamente 32 horas, incluidas las de la noche y madrugada de los días de inicio y finalización del procedimiento. Esto amerita sobradamente la denominación de “juicio político express” que le han dado algunos medios periodísticos.

2. Acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional

Por varios motivos, el llamado “juicio político” al Presidente Lugo, aunque haya seguido el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución, constituye un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional. En la Cámara de Diputados se observa una deficiencia de carácter substantivo o de fondo: las acusaciones formuladas no constituyen mal desempeño de funciones. En efecto, si bien es cierto que cuando se trata de una causal de este tipo, es admisible cierto margen de discrecionalidad, ello debe darse dentro de criterios de racionalidad. En otras palabras, el admitir cierta discrecionalidad no significa que se autoriza la arbitrariedad. Sin embargo, parece ser que las cámaras del Congreso entendieron lo contrario, lo cual se aprecia con claridad meridiana, en particular, en el caso más claro, no controvertible y categórico, del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II, al que aludimos más arriba.

Igualmente de relevancia substantiva es el hecho de que en la presentación oral de los diputados que actuaron como fiscales acusadores, se afirmara que no se aportaban pruebas, por tratarse de hechos de pública notoriedad, o que se pretendiera darle el carácter de tales a meros recortes de diarios. Era necesario probar la vinculación directa del Presidente de la República con tales hechos, en forma particular y concreta. Una supuesta responsabilidad general y difusa derivada de su carácter de tal o de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no era suficiente.

Llama la atención también que todas las acusaciones fueran presentadas como casos de mal desempeño de funciones y no como casos de comisión de hechos punibles que algunas de ellas hubieran constituido si fueran verdaderas. Tal vez lo indeble de los medios probatorios obligó a presentarlas como casos de mal desempeño de funciones.

En la Cámara de Senadores se constatan deficiencias tanto formales como substantivas o de fondo, que determinan el carácter de acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional que revistió el denominado “juicio político”.

Una deficiencia substantiva vinculada con lo formal, es el hecho de que a Cámara de Senadores no tiene facultad para reglamentar, por sí sola, el juicio político (Art. 225 Cn.), aunque fuera únicamente en la parte del mismo que le concierne. En efecto, aunque así fuera, se está ante la reglamentación de un artículo constitucional, lo cual debe ser realizado por ley del Congreso. No existiendo esta ley, debió aplicarse la legislación vigente, en forma supletoria. Precisamente la reglamentación del juicio político en la forma que corresponde, es decir, por ley del Congreso, hará posible que en este punto exista seguridad jurídica para los eventuales afectados por el procedimiento. La relativa estabilidad de las normas que

lo regulen, la objetividad de las mismas al ser dictadas sin tener enfrente a un afectado concreto, y su previsibilidad, eliminarán la posibilidad de que la Cámara de Senadores las establezca para cada caso particular, en una forma unilateral y caprichosa que ha alcanzado su expresión más patética, arbitraria, irracional y arrogante en el caso que nos ocupa.

En cuanto a deficiencias formales, se aprecia que el plazo para preparar la defensa fue indiscutiblemente exiguo. No se puede pretender que entre la notificación de la acusación (realizada en la tarde-noche del jueves 21) y las doce del mediodía del día siguiente, existiera suficiente tiempo. Esto afecta el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en juicio, consagrado también para este tipo de procedimiento (cf. Art. 17, incisos 7 y 8). Lo apropiado o inapropiado de los plazos otorgados, debe ser apreciado comparándolos con otros juicios políticos y con los establecidos en el procedimiento de conocimiento sumario o en los procedimientos especiales.

Asimismo, el tiempo otorgado para presentar la defensa oral, fue exiguo. La limitación a dos horas, como máximo, constituye un desconocimiento de la garantía del debido proceso. Igualmente, el plazo previsto para preparar los alegatos y luego para presentarlos oralmente ante la Cámara de Senadores (treinta minutos), fue ínfimo hasta el punto de determinar la irrelevancia de esta etapa.

Otra deficiencia de carácter substantivo lo constituyó el hecho de que la Cámara de Senadores, constituida en tribunal juzgador, no estudió (no hubo debate al respecto) lo alegado y probado por las partes, antes de pronunciarse acerca de la culpabilidad o inocencia del enjuiciado.

La deficiencia substantiva o de fondo más importante fue que la sentencia condenatoria tomara como fundamentos las inconsistentes acusaciones formuladas por los fiscales acusadores, cuyas extremas limitaciones ya han sido apuntadas más arriba. [2]

En consecuencia, la resolución de la Cámara de Senadores en virtud de la cual se declaró la culpabilidad del Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, y se lo separó del cargo, es un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

3. Situación de Federico Franco

Federico Franco asumió la presidencia de la República como resultado de un acto inconstitucional del Congreso (en particular, de la Cámara de Senadores). En consecuencia, Franco no tiene legitimidad de origen (en cuanto Presidente de la República) y, en la terminología constitucional (Art. 138 Cn.), es un usurpador de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Por tanto, contra su gobierno se puede ejercer el derecho de resistencia a la opresión en las dos formas previstas en la Ley Fundamental (cf. Art. 138 Cn.).

Notas

[1] Más datos sobre este tema se pueden encontrar en el artículo de mi autoría denominado “Sobre del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II”, que puede ser consultado en el sitio: www.luislezcanoclaude.wordpr..

[2] Votaron a favor de la sentencia de condena, los senadores del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, y el Partido Patria Querida, todos partidos conservadores de derecha, divergentes en lo ideológico con el Presidente Lugo. Votaron por la absolución: Luis Alberto Wagner, Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Alberto Grillón. Son de destacar los votos de Desirée Masi, del PDP, en Diputados; y de Blas Llano, Efraín Alegre y Enzo Cardozo, en Senadores. Estos tres fueron ministros de F. Lugo y votaron por la condena. El último de ellos lo fue hasta el jueves 21, día en que renunció; el viernes 22 reasumió su banca en la Cámara de Senadores para votar en el sentido indicado.

Lugo: "Aquí hubo un golpe de Estado parlamentario"



25:54 [La primera entrevista exclusiva de RT con Fernando Lugo tras el golpe de Estado en Paraguay RT en Español](#) Hace 3 años El 22 de junio de 2012 Fernando Armindo Lugo Méndez, Presidente de la República del Paraguay, fue destituido en el juicio ...

P.-S.

La entrevista forma parte de la compilación [Junto a Paraguay ¡América Latina Resiste!](#) FEDAEPS, Quito, 2012. Tomado de <http://actualidad.rt.com/actualidad...>

Paraguay

La transnacional Río Tinto Alcán y el Golpe de Estado (I parte)

Por Silvio Núñez

A la prensa internacional parece haberle pasado desapercibido que uno de los primeros países, luego de El Vaticano y Alemania, que reconoció al nuevo gobierno instalado en Paraguay mediante un golpe parlamentario fue Canadá.

Es que el gobierno de Canadá, a través de su embajada de Buenos Aires concurrente en Paraguay, viene realizando desde el 2009 un intenso lobby a favor de la industria extractiva y electrointensiva Río Tinto Alcán, que desea instalarse en ese país sudamericano.

Pero, ¿Qué representa Río Tinto Alcán?

Río Tinto Alcán (RTA) es la segunda mayor fundidora de aluminio en el mundo, además, se dedica la extracción de diversos minerales y tiene presencia en los cinco continentes. Las denuncias contra de RTA incluyen:

Genocidio y crímenes de lesa humanidad

En Papúa Nueva Guinea, isla de Bougainville, se le acusa de haber instigado en 1980 un levantamiento armado que generó el uso de fuerzas militares y miles de muertos. Luego, después de que los trabajadores comenzaron a sabotear la mina en 1988, se acusa a Río Tinto de conspirar para imponer un bloqueo que resultó en la muerte de unos 10.000 civiles hasta 1997. El caso se encuentra actualmente la Corte de EEUU de América, bajo una ley estadounidense de 1978 llamada Alien Tort Statute, en el caso "Sarei et al v. Río Tinto Plc et al", 9na Corte de Apelaciones, Nro. 02-56256 .

El periodista paraguayo, Guido Rodríguez Alcalá, hace una breve pero contundente historial de RTA en el mundo: apoyo al régimen racista de Sudáfrica; el Gobierno de Noruega puso a RTA en la lista negra por atentar contra el medio ambiente y los derechos humanos; por razones similares el movimiento "Fuera del Podio" desea eliminar a RTA como auspiciante de los Juegos Olímpicos y la lista sigue .

La inversión en el Paraguay: un enorme consumo de energía

Es importante aclarar que Paraguay es productora de energía hidroeléctrica, compartiendo centrales binacionales con sus vecinos Argentina y Brasil. Sin embargo, 4/5 de esta energía son exportadas y sólo 1/5 utilizadas en el país. RTA desea consumir, a bajos precios, una cantidad equivalente (1/5). La inversión de RTA tenía dividido al gobierno paraguayo. Si bien el Presidente de la República se había manifestado contrario a un subsidio al precio de la energía, el Ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas -confirmado como ministro por el nuevo presidente Federico Franco- y el entonces Vicepresidente Federico Franco se habían manifestado favorables a cumplir las condiciones de RTA para su venida al Paraguay. El Viceministerio de Energía, había afirmado sin embargo que los subsidios a la energía a RTA equivalía a 200 millones de US\$/año, crecientes . Igual opinión compartían otros ministros no liberales.

Posición complaciente y crítica del Gobierno

Luego de dos Audiencias Públicas realizadas por el mismo gobierno, la batalla en la opinión pública parecía dividida . De ser un tema sumamente popular y con un mayoritario apoyo, la inversión de Río Tinto Alcán empezó a generar opiniones críticas desde los más diversos sectores . Las opiniones muestran su máxima polarización cuando el entonces Vicepresidente critica públicamente a la Viceministra de Minas y Energía, según publicación del diario Ultima Hora del 30 de mayo pasado: "Entonces, yo le he dicho al presidente de la República (Lugo): para qué me envió a Canadá y nos puso a estudiar esto, si al final una viceministra (Mercedes Canese) se va a oponer. Yo tengo el derecho de pensar que lo que se

pretende es seguir favoreciendo a la economía brasileña, porque no cabe en mi cabeza que, pudiendo vender energía mucho más cara que la que le cedemos al Brasil, generando empleo, impuesto y divisas, haya gente que se opone a este proyecto” . Similares publicaciones pueden verse reproducidas en otros medios .

La afirmación de Franco es un falso dilema, pues la venta de energía de Paraguaya de Itaipú a Brasil genera divisas para el desarrollo y la inversión, y además, lo que plantea RTA es pagar precios inferiores -inicialmente 32 US\$/MWh y actualmente 42 US\$/MWh- a los que paga Brasil y que si bien, al precio actual de 52,2 US\$/MWh solamente producen un pequeño beneficio (8,4US\$/MWh) cubren al mismo tiempo los costos de producción (43,8US\$/MWh) .

RTA presiona al gobierno para iniciar negociaciones

Luego de las declaraciones de Federico Franco, la empresa su interés en iniciar las negociaciones con el gobierno, presionando sobre el cronograma de instalación de la planta. Tal es así, que el 13 de junio, se publica en los medios, la visita de los representantes de RTA al Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, afirmando su representante, el hispano-brasileño Juan Pazos: “Consideramos después de tres años y medio que estamos en Paraguay que el gobierno ya tiene todas las informaciones que necesita”. Evidentemente, un tema central es el precio de la energía, pues en la misma nota expresa: “No se puede discutir el precio de la energía, sin discutir lo demás. Forman parte de un paquete”, a lo que agrega el medio periodístico: “sin querer precisar el monto que la multinacional considera ideal por la energía paraguaya.”

Se gesta el golpe

Dos días después, el viernes 15 de junio, sucede la tragedia de Curuguaty. Una jueza dicta una orden de allanamiento a pedido del empresario colorado Blas N. Riquelme, para resguardar su supuesta propiedad privada. El operativo es coordinado por la fiscalía, y termina con la muerte de 18 campesinos y policías. En el lugar, que luego la misma prensa indicaría que eran tierras públicas usurpadas por Blas N. Riquelme , había menos de 50 personas en el momento de la masacre.

El resto es historia. Ese mismo día, Fernando Lugo reemplaza a Carlos Filizzola (del Frente Guasú) en el Ministerio del Interior por el colorado ex Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla, responsable de más de 1000 imputaciones a luchadores sociales y vinculado a Camilo Soares , ex Secretario de Emergencia Nacional, imputado por malversación y miembro del primer anillo Fernando Lugo. El lunes 18 de junio, el Frente Guasú expresa su desacuerdo con dicha designación, igualmente lo hace el Partido Liberal Radical Auténtico (partido de Federico Franco y Francisco Rivas) y para más desconcierto, la propia Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, se desliga de su nombramiento . El jueves 21 de junio la Cámara de Diputados aprueba el juicio político a Fernando Lugo al día siguiente, viernes 22 de junio, la Cámara de Senadores aprueba su decisión.

Golpe parlamentario

La noticia de La Tercera, de Chile, reproduce lo afirmado por el Secretario general de la OEA, General Insulza “...que reconociendo que el artículo 225 de la Constitución del Paraguay confiere facultades a la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político y al Senado para actuar como tribunal, 'la comunidad internacional ha planteado dudas fundadas sobre el cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 17 y 18 de la Constitución del Paraguay y en los tratados internacionales suscritos por ese país, que consagran los principios universales del debido proceso y del legítimo derecho de todo procesado a defenderse usando todos los recursos procesales, contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del juicio y su conclusión'...”

Es que para el Juicio Político a Lugo, el Presidente de Paraguay ha tenido menos de 24 hs para preparar su defensa y no han sido arrojadas pruebas -excepto fotocopias y publicaciones de prensa- para formalizar las acusaciones.

Transnacionales, entre ellas RTA, primeras beneficiarias con el golpe

Correctamente, los analistas políticos han atribuido a los grandes oligopolios de la producción de granos como los principales beneficiarios del golpe de Estado a Fernando Lugo. Fernando Lugo ha sido sometido a un sumarísimo Juicio Político por la matanza de Curuguaty, que desnuda una realidad que no puede ser ignorada: 8 millones de tierras malhabidas que no han sido recuperadas por la Justicia, y Paraguay con la peor distribución de la tierra en la región . A pesar de que la orden de allanamiento fue dictada por una jueza y el operativo policial dirigido por una fiscal, el enjuiciado fue Fernando Lugo. Sin embargo, se olvidaron de un actor clave: RTA.

Discurso de Federico Franco y Francisco Rivas confirmado

En su discurso de Asunción, Federico Franco se refirió largamente al tema energético, “También impulsará al sector energético para lograr utilizar la energía generada en las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá y ‘que nadie tenga que ir al extranjero a buscar trabajo’.”

Canadá lo reconoció inmediatamente. A continuación, fue confirmado al Francisco Rivas, Ministro de Industria y Comercio y lobista de RTA . Evidentemente, las razones son millones.

29-06-2012

Río Tinto Alcán y el Golpe de Estado en Paraguay (II parte)

Por Silvio Núñez

Como informábamos en la primera parte de nuestro artículo, altos funcionarios gubernamentales responsables del quiebre institucional en Paraguay, han realizado un intenso cabildeo a favor de la multinacional canadiense Río Tinto Alcán (RTA), principal beneficiada -así como las transnacionales del complejo agroexportador- del cambio de Jefe de Estado.

Diego Zavala: ¿representante de RTA o asesor del Gobierno?

El abogado Diego Zavala, saltó a la fama en Paraguay por negociar el rescate de su hermano Fidel Zavala, secuestro reivindicado por la supuesta guerrilla del EPP entre octubre del 2009 y enero del 2010. En ese momento, su vínculo con el Gobierno, especialmente con el entonces Ministro de Interior, Rafael Filizzola -actual precandidato a Vicepresidente por la fórmula del presidenciable Efraín Alegre, senador liberal- estaba en su máximo apogeo.

Rafael Filizzola es además primo-hermano y oponente político de Carlos Filizzola, Ministro de Interior de Lugo durante la masacre de Curuguaty, desencadenante del Juicio Político a Fernando Lugo. Ahora, el entonces Viceministro de Interior y partidario de Rafael Filizzola, Carmelo Caballero, ha sido designado Ministro de Interior de Federico Franco.

En octubre del 2010 aparecen las primeras publicaciones sobre Diego Zavala y Río Tinto Alcán. Resulta muy curioso que parece haber una confusión en los medios -lo cual sucede igualmente con la opinión pública- sobre el rol de Diego Zavala.

Tal es así, que el portal PARAGUAY.com, señala en su nota “Inversión de Río Tinto estimula al gobierno de Lugo” de fecha 26 de octubre de 2010 lo siguiente: “Por su parte, el representante de la empresa en Asunción, Diego Zavala, dijo a periodistas que la fundición de aluminio empleará en forma directa a mil trabajadores y en forma indirecta a unos 9.000.” Similar calificación recibe Diego Zavala en la nota de Última Hora de la misma fecha.

Por otra parte, 3 días después de estas publicaciones, el diario ABC Color explica el rol de Diego Zavala: “Participarán también el abogado Diego Zavala, en su carácter de coordinador interinstitucional para el gobierno paraguayo de la inversión de dicha firma, y el economista Fernando Masi.”

También participó de la reunión del 26 de octubre 2010 en Palacio, en representación de RTA, Roberto Codas, hermano del entonces Director General Paraguayo de Itaipú, Gustavo Codas.

Visita a la fábrica de Canadá

Unos días antes de la publicación de ABC Color mencionada en el párrafo anterior, el entonces Vicepresidente Federico Franco visitó la fábrica de Río Tinto Alcán en Canadá. Según ABC Color: “El vicepresidente de la República, Federico Franco, visitó la planta industrial en la región de Saguenay, provincia de Quebec (Canadá). Luego de realizar un recorrido y minucioso estudio señaló que la empresa ‘es líder mundial a nivel de aluminio con responsabilidad social, un gran acento en la seguridad laboral e involucrando a la comunidad en donde está instalada la empresa’. Añadió que merece un reconocimiento especial la ecoeficiencia”.

Cabe aquí una acotación sobre el comentario del entonces Vicepresidente. En la actualidad – 2012- RTA enfrenta demandas en Canadá por el despido masivo de trabajadores. Se denuncia que RTA ha optado por vender energía a mejores precios, a

costa de reducir la producción de aluminio y dejando sin trabajo a más 700 empleados.

En las declaraciones del Vicepresidente, llama la atención su interés por concretar el acuerdo el 15 de mayo del 2011, fecha patria de Paraguay donde se cumplían 200 años de su independencia.

Visita a Oman y Bahrein

En febrero de 2011, RTA invitó a los ministros Francisco Rivas -el único ministro confirmado por el actual presidente Federico Franco- de Industria y Comercio; Efraín Alegre de Obras Públicas y Comunicaciones – quien como senador liberal votó por la condena a Fernando Lugo- y Dionisio Borda -independiente, actualmente renunciante y sustituido por el liberal Manuel Ferreira- de Hacienda, a una visita a fábricas de aluminio en el Sultanato de Omán, como reproduce el diario Última Hora.

Sin embargo, el Decreto N°6.146/11 indica que viajarán Rivas y Alegre, y que además del Sultanato de Omán, visitarían el Reino de Bahrein.

Un año después, en tanto las noticias sobre Bahrein eran sublimadas por la primavera árabe, el Gobierno de Paraguay recibió una invitación para ir a la fábrica de aluminio ALBA, una empresa con mayoría accionaria estatal. Esto sucedía en febrero de 2012. Los gastos de alojamiento y estadía fueron cubiertos por Río Tinto Alcán. El pedido de la empresa era incluir también a un alto funcionario del sector energético, pero finalmente fueron Francisco Rivas, Ministro de Industria y Comercio y Oscar Rivas -actualmente renunciante- entonces Ministro de la Secretaría de Medio Ambiente. También participó el asesor de Francisco Rivas, Fernando Masi.

Ni en la primera visita se consideró que este pequeño país de Medio Oriente, habitado por 1,2 millones de personas, era regido autoritariamente por una monarquía dictatorial que lleva 228 años en el poder, ni en la segunda visita se cuestionó que a raíz de las protestas realizadas en el último año por 300 mil manifestantes, se produjeron más de 1500 arrestos arbitrarios, más de 1800 denuncias de torturas, más de 50 asesinatos políticos y más de 2700 trabajadores fueron despedidos por participar de las protestas.

Conformación del ETI

Durante el largo proceso de análisis de la inversión de RTA, que incluyó la conformación de un Equipo Técnico Interinstitucional (ETI), en enero de 2011, por Decreto N° 5938/11 del Poder Ejecutivo, coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio e “integrado por el Ministerio de Industria y Comercio, Obras Públicas, Secretaría del Ambiente, Cancillería, BCP [Banco Central del Paraguay] y la ANDE [Administración Nacional de Electricidad de Electricidad]...”, se contrató la consultora británica CRU Strategie.

Itaipú Binacional pagó a CRU Strategie para realizar la consultoría, desembolsando 470.000 US\$ mediante una “dudosa” contratación directa. Itaipú Binacional realizó la contratación de CRU Strategie a pedido de Héctor Lacognata -entonces Ministro de Relaciones Exteriores, ex Parlasur por el Partido Patria Querida y asesor de Miguel López Perito, ex Jefe de Gabinete de Fernando Lugo-; Germán Fatecha -entonces presidente de la ANDE, liberal- y Francisco Rivas. Según denuncias de la prensa paraguaya, CRU Strategie estaría vinculada a RTA.

Posicionamientos sobre la inversión de RTA

De una euforia inicial por la oferta de inversión de RTA en el Paraguay, inicialmente de 2.500 y luego de 3.500 millones de US\$, en el transcurso del 2011 y 2012 las posiciones se fueron dividiendo o polarizando.

Tal es así, que el 17 de diciembre del 2011, dos días antes de la Audiencia Pública convocada por el gobierno sobre la inversión, el Diario La Nación publica: “Fernando Lugo señaló que la inversión de Río Tinto Alcan no crearía tantas fuentes de trabajo, sino que más bien es una “carnada” para atraer a otros capitales del exterior. Añadió que la demanda de un subsidio a través de una reducción del costo de la energía eléctrica para la industria proyectada por la corporación con base en Canadá es demasiado alta. Explicó que, en cinco años, el Estado estaría perdonando mil millones de dólares, si acepta bajar el precio como es planteado por los inversionistas. “No estamos para regalar tanta plata”, adujo el presidente”.

La nota de ABC Color del 23 de abril del 2012 presenta un resumen de la situación. Las posiciones de los altos funcionarios del gobierno están divididas:

En contra del subsidio a RTA, la ANDE, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC, del cual depende el Viceministerio de Minas y Energía, VMME) la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH) dependiente del

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Fundan su posición en que “que la tarifa no puede ser menor a US\$ 60 el megavatio hora, puesto que la Itaipú Binacional percibe en dicho concepto US\$ 48,8, a los que se deben sumar por compensaciones otros US\$ 8,4, con lo cual ya llega a US\$ 52,2. Esta cifra todavía no incluye las pérdidas.”

A favor del subsidio: los representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Hacienda (MH), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) e Itaipú Binacional (IB). Ellos son “Los que elevaron al Ejecutivo el informe técnico recomendando la aplicación de US\$ 32 el megavatio hora a RTA”.

Consecuencias para RTA del Golpe Parlamentario en Paraguay

Como decíamos en la primera parte de este artículo, dos aspectos han llamado poderosamente la atención. El primero, que Canadá sea el tercer país -luego de El Vaticano y Alemania- en reconocer a Paraguay, considerando el importante aporte impositivo que realiza RTA al gobierno de Canadá [xxv] . La segunda, que con este golpe parlamentario, se elimina la mayoría -sino todas- las voces disidentes desde el gobierno, a la condiciones que ha puesto RTA para instalarse en el Paraguay.

Hoy vemos las primeras declaraciones del nuevo Presidente de la ANDE, Carlos Heisele -del Partido Colorado- sobre RTA: “Hay que ser claro, la ANDE no puede subsidiar, no está en condiciones de subsidiar; en todo caso debería hablarse en el Equipo Económico para ver quién puede subsidiar”, dijo.

Pocos minutos después, ha aparecido la siguiente noticia en ABC Color: “El presidente de la República, Federico Franco, ha dado instrucciones al Ministerio de Industria y Comercio para que se inicien cuanto antes las negociaciones con Río Tinto Alcan, informó el titular de la cartera de Estado, Francisco Rivas Almada. Dijo que la idea es avanzar de manera a ir definiendo todas aquellas cuestiones que forman parte de las conversaciones con la firma, que prevé una inversión cercana a los US\$ 4.000 millones... Cabe señalar que el actual Presidente es un ferviente partidario de que se posibilite la venida de esta mega inversión en la producción de aluminio...”.

¿Falta algo que agregar?

Tercera Parte

Hemos hecho un extenso relato de las relaciones políticas, acciones y opiniones de los principales actores que han intervenido en el análisis de la inversión de RTA y el Golpe Parlamentario. En la siguiente nota, profundizaremos sobre las posiciones de los actores que no han aparecido a la luz pública y otros actores relevantes fuera del gobierno. También profundizaremos sobre los efectos económicos y políticos esperables por la inversión de RTA en Paraguay.

Continuará...

30-06-2012

La transnacional Río Tinto Alcán y el Golpe de Estado en Paraguay (III parte)

Por Silvio Núñez

Río Tinto Alcán (RTA) es una multinacional canadiense, que se dedica a la industria electrointensiva de producción de aluminio y a la minería extractiva, con presencia en los cinco continentes. Al inicio del Gobierno de Fernando Lugo, presentó una oferta de instalar una industria electrointensiva de aluminio, con una inversión inicial de 2.500 millones de US\$ que posteriormente aumentó a 3.500 o 4.000 millones de US\$, dependiendo de la fuente consultada.

¿Porqué Paraguay?

Paraguay no tiene la materia prima (bauxita) ni los demás insumos para la producción del aluminio. Es un país sin litoral marino y con una escasa población.

Según las expresiones de sus propios representantes, principal atracción de Paraguay fue su “energía abundante y barata”.

Entonces, explicaron que deseaban un contrato a largo plazo, similar al que tenían en otros países, de 50 años, con una tarifa fija o ajustable de acuerdo al precio del aluminio. Posteriormente bajaron el plazo a 30 años, renovable por 20 más.

La tarifa eléctrica

Explicaron que el rango de precios de la energía para que su inversión ofrezca el retorno necesario para establecerse en Paraguay, no debía superar los 38 US\$/MWh, lo cual fue corroborado posteriormente con un estudio que realizó el gobierno de Paraguay a través de la Consultora británica CRU Estrategie.

Estos precios, son similares a los que defendieron los lobistas de RTA, como Diego Zavala - Coordinador Técnico del Equipo Técnico Interinstitucional, hasta su nombramiento como Viceministro de Comercio por el nuevo presidente Federico Franco- y Francisco Rivas -Ministro de Industria y Comercio de Fernando Lugo y único ministro confirmado por el actual gobierno.

Poco antes del golpe, Francisco Rivas defendía que el precio debía ser del 42 US\$/MWh, intermedio entre los 32 US\$/MWh planteados por RTA y los 60 US\$/MWh establecidos por el Viceministerio de Minas y Energía.

Diego Zavala y Francisco Rivas han dicho que el Estado Paraguayo no subsidiará a RTA. Sin embargo, las tarifas que ellos proponen significan un subsidio millonario. Resulta, que de acuerdo a los expertos en la materia, una industria como RTA consume energía las 24 hs del día, en forma continua. Ese tipo de energía, se llama “energía garantizada” cuando proviene de una hidroeléctrica y tiene un 95% de confiabilidad.

Todos los estudios indican que RTA se proveerá de Itaipú Binacional, central hidroeléctrica compartida en partes iguales por Brasil y Paraguay. Paraguay en la actualidad consume aproximadamente un 15% del total, y el excedente lo cede a Brasil a cambio de una compensación.

Según los cálculos estadísticos de las condiciones hidrológicas, este tipo de energía garantizada se produce en Itaipú, 75.150 GWh al año para 12.135 MW de potencia disponible. Ello equivale a 6.163 horas al año, es decir, dividido 12 meses, 516 horas al mes. El costo de la energía garantizada se calcula, tomando la tarifa de la potencia, de 22,6 US\$/kWh y dividiéndola por la cantidad de horas al mes que existe energía garantizada, lo que da 43,8 US\$/MWh.

A este costo, los técnicos agregan la compensación por cesión de energía que Brasil paga, pues será un ingreso que el Estado perderá, de 8,4 US\$/MWh. Entonces, el costo de la energía en Itaipú, para vender a RTA al mismo precio que se vende al Brasil, es de 52,2 US\$/MWh.

Por último, como la energía debe ser transportada por redes de transmisión hasta la fábrica, se deben agregar los costos de transmisión y pérdidas, de 7,5 US\$/MWh, con lo cual la tarifa final, a los costos de oportunidad actual son de 59,7 US\$/MWh.

Vemos entonces, que para la última tarifa planteada por Francisco Rivas, y considerando que RTA consumirá 1.100 MW de potencia y 9.600 GWh de energía por año, el subsidio, multiplicando esa energía por la diferencia entre 59,7 y 42 US\$/MWh, da 165 millones de US\$ al año.

Ni Diego Zavala ni Francisco Rivas han explicado cómo se cubrirá esa diferencia.

Debe añadirse, que estos costos son crecientes considerando el aumento de los precios internacionales de la energía y el agotamiento de las fuentes de energías baratas. Considerando esos costos crecientes, los técnicos paraguayos calculan que en 20 años, el Estado habrá subsidiado 12 mil millones de dólares a RTA.

Industrias asociadas

En compensación al bajo precio por la energía que solicita RTA, las ventajas que ofrecen es que, ayudarán a la industrialización de Paraguay y a la generación de empleo, y que Paraguay tendrá una mayor soberanía sobre su energía pues la energía se utilizará localmente, en vez de exportarse como sucede en la actualidad.

Sin embargo, en su informe, la consultora CRU Estrategie, afirma que no existe antecedente en el mundo donde las industrias procesadoras en el mundo se instalen cerca de las lingoteras (como será la electrointensiva de aluminio). Las industrias procesadoras siempre se instalan cerca de los mercados de consumo del aluminio. Paraguay no tiene vocación de mercado de consumo, con su población de apenas 6,2 millones de habitantes, si tan solo la comparamos con Brasil (190 millones) o Argentina (40 millones).

Empleo

En cuanto a la mano de obra, según RTA generarán 1.250 empleos directos y diferentes cifras de empleos indirectos (han dicho 10.000, 15.000 y ultimamente 50.000). Como consumirá 1/5 parte de toda la energía de Paraguay, si la comparamos con su industria tradicional, que consume 1/30 parte de toda la energía de Paraguay y emplea en forma permanente a 300 mil trabajadores, aún comparando con los 50.000 empleos indirectos, la industria tradicional paraguaya genera 36 veces más empleo que RTA. Si comparamos los empleos directos, la relación es uno a mil cuatrocientos.

Impuestos

RTA ha afirmado que desea acogerse a las leyes de fomento de la inversión del Paraguay y la ley de la Maquila. Es lógico que así sea, según lo cual, la expectativa de cobro de impuestos sería entre 96 y 28 millones de US\$ por año, para una facturación esperada, a un precio del aluminio de 2.000 US\$/kg, de 1,3 mil millones de US\$ por año (entre 7 y 2% de impuestos sobre facturación).

Condiciones de RTA

RTA requiere de parte del Estado inversiones en infraestructura de obras públicas (puentes, caminos, ferrocarriles, líneas de transmisión), cuyo valor se calculó en 700 a 1.000 millones de US\$. La inversión de 3.500 millones de dólares de RTA, sería en de tecnología de punta, donde la mayor parte del capital -los equipos y maquinarias- serían importados.

Resumen

Si el actual gobierno acepta las condiciones de RTA, deberá enfrentar la construcción de obras públicas por valor de 700 a 1000 millones de US\$, más un subsidio anual creciente de 165 millones de US\$ que llegará a 12 mil millones de US\$ en 20 años. El nuevo presidente de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) ya ha afirmado que ellos no podrán soportar dicho subsidio.

A cambio, RTA empleará en forma directa a 1.250 personas (1400 veces menos que la industria tradicional) y pagará entre un 2 a 7% de impuestos sobre la facturación.

Conclusiones

Hemos leído las últimas declaraciones de las nuevas autoridades del gobierno de Paraguay, reconocido por muy pocos países, entre ellos Canadá, El Vaticano y Alemania. En ellas aseguran que acelerarán el proceso de negociación con RTA.

Sin duda, el cambio de gobierno ha sido un enorme golpe de suerte para la transnacional canadiense.

Corolario

El cambio de gobierno de Paraguay no ha pasado de ninguna forma indiferente a la población. Cada día, se realizan movilizaciones multitudinarias de repudio al golpe parlamentario. También la opinión pública ha expresado, a través de las redes sociales, su inquietud en relación a la acelerada negociación con RTA. ¿Tendrá validez un acuerdo así entre el cuestionado gobierno y RTA?

La ciudadanía paraguaya lo dirá.

Nuevo gobierno acelera trámites para que transnacionales operen en Paraguay

Por E'a

Las norteamericanas Monsanto y Crescent Global Oil, la canadiense Rio Tinto Alcan y las ganaderas y sojeras brasileñas serán las principales beneficiadas con la política de apertura del nuevo gobierno al capital trasnacional.

A escasos tres días después del juicio político que destituyó a su antecesor, Federico Franco se reunió, el martes 26 de junio, con una comitiva de agroexportadores y ganaderos brasileños en Palacio de Gobierno. La comitiva estuvo encabezada por el agro exportador brasileño de origen italiano Aurio Fighetto.

Al término de la reunión, Marilene Sguarizi, una abogada representante de la comitiva, afirmó a los medios de comunicación que “el nuevo presidente nos prometió que apoyará al sector agroindustrial, protegerá la propiedad privada e impedirá las invasiones de tierras en el país”. Agregó que Franco les pidió apoyo para que su gobierno tenga buenas relaciones con el gobierno brasileño.

El día siguiente, el miércoles 27 de junio, Franco se reunió con los representantes de la firma Crescent Global Oil-Pirity Hidrocarburos, trasnacional norteamericana en el rubro de prospección, exploración y explotación de petróleo. Richard González, representante de la firma, informó que pusieron a conocimiento del presidente Franco que desde el 2006 su empresa ya invirtió 10 millones de dólares en la prospección de petróleo en el Chaco Paraguayo. González informó también que Franco “nos brindó su apoyo en la misión de búsqueda del combustible, y nos pidió celeridad en los trabajos”. Durante el gobierno de Fernando Lugo, Pirity Hidrocarburos fue sometido a revisión por su supuesta situación ilegal, razón por la cual se le complicaban las posibilidades de firmar un eventual contrato de explotación de petróleo en el país.

La agenda de tratamiento de posibles inversiones trasnacionales en Paraguay por parte del gobierno siguió con la reunión del Consejo de Ministros, el pasado lunes 2 de julio, en la que el Jefe de Estado bajó la decisión de autorizar al Ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, a iniciar negociaciones con los representantes de Rio Tinto Alcan, firmada dedicada a la producción de aluminio. Al mismo tiempo, Franco nombró Viceministro de Comercio al ganadero Diego Zavala, quien durante el gobierno de Lugo cumplía la función de promotor y gestor para que Rio Tinto instale su industria de aluminios en el país. Días antes, Franco había anunciado ante los presidentes de ambas cámaras del Congreso y de los partidos políticos que acelerará la instalación de Rio Tinto en Paraguay.

Por último, el ministro de Agricultura Enzo Cardozo anunció, la semana pasada, que Franco lo instruyó a que acelerará la implementación de la resolución de su ministerio por la cual se autoriza el uso de la semilla de algodón transgénica marca Bollgard BT, producida por la trasnacional Monsanto. A su vez, Cardozo dijo que transmitiría al nuevo presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave), Jaime Ayala, la decisión de inscribir dicha semilla en el Registro Nacional de Semillas, a lo que el anterior presidente del Senave, Miguel Lovera, se negaba porque aducía no tener el dictamen técnico del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Medio Ambiente para el uso del transgénico, algo necesario por ley.

Que el gobierno de Franco hable de cobrar Río 60US\$ mgw/w a Río Tinto es sólo para frenar críticas

Por Jorge González

Como era de esperarse tras la asunción del gobierno de facto, Federico Franco anunció en los últimos días que apuraría la concreción del acuerdo con la gigante transnacional Río Tinto Alcan, para que ésta se instale en el país y fabrique aluminio. Ante esto, varios sectores de la sociedad lo cuestionaron duramente, en un ambiente de ilegitimidad que vive la administración que subió tras la maniobra congresista contra el presidente Fernando Lugo.

Tratando de desinflar las críticas y la resistencia de sectores sociales, Franco y sus ministros empezaron a mencionar que arrancarían las negociaciones con Río Tinto, pero teniendo en cuenta que se venderá la energía nacional a 60 megavatios la hora, la cifra que hoy por hoy valdría en el mercado.

Cone esto intentan responder al principal cuestionamiento hacia la venida de la transnacional, que intenta instalarse en el país comprado nuestra energía a menos de lo que vale, es decir, que el Paraguay subsidiaría el costo a la empresa.

Uno de los principales cuestionadores de la venida de Río Tinto, el ingeniero Ricardo Canese, explica que no solamente el precio al cual tenemos que vender nuestra energía debe ser 60 US\$ mgw/h, sino que tiene que ser por lo menos 60US\$ y ajustable, variable de acuerdo al precio que tenga la energía en el mercado con los años. La empresa tiene la intención de cerrar trato por 30 años.

Faltaré energía para el pueblo

Canese también dijo que de concretarse un acuerdo, Río Tinto usará 1.600 megavatios de potencia, consumo que en siete u ocho años hará que en Paraguay escasee energía eléctrica, ante lo cual buscará alternativas como el carbón, el gas o al petróleo.

El paquete de negociaciones, siguió explicando, obligará que la ANDE garantice la cantidad de energía acordada con la transnacional todo el tiempo, incluso durante las temporadas de baja del río Paraná. Y que para cumplir, o deberá adquirir energía a costos altísimos, o deberá hacer faltar energía a los demás consumidores para priorizar a la empresa. En uno u otro caso, el costo lo pagará el pueblo paraguayo.

Mucha energía, pocos empleos

La otra gran crítica de Canese es que, en proporción a la cantidad de energía eléctrica paraguaya que utilizará la empresa, son pocas las fuentes de empleo que generará. Consumirá 9,6 millones de mgv/h al año y generará 1.250 empleos, quiere decir que por cada 1 millón de mgv/h al año que use, generará sólo 139 puestos de empleo.

Cuando que todas las industrias paraguayas juntas consumen actualmente sólo 1,6 millones de mgv/h al año y generan 322.000 puestos de trabajo, lo que nos dice que por cada 1 millón de mgv/h al año, generan 200.000 fuentes de empleo.

Infraestructura que pagará el pueblo

Por último, indicó, que de entrar en vigencia cualquier acuerdo con la empresa anglo-canadiense, el Estado paraguayo deberá realizar obras por un valor aproximado a los 700 millones de US\$, como líneas de transmisión (otra de 500kv), puertos y otros. Esto para que existan las condiciones de comunicación vial que necesitará la empresa para operar en el país, que finalmente recaerá en el bolsillo de los paraguayos y paraguayas.

Soberanía golpista

Por Gustavo Torres Grossling

En primer lugar, resulta imperioso, imprescindible y fundamental aclarar que (y esto antes de que comience el tsunami de manoseos y manipulaciones en torno al significado y sentido de la palabra/acción “soberanía”) existe una sola soberanía. Es decir, no hay una soberanía para los golpistas y otra para la resistencia.

Y esa soberanía se llama pueblo y, si quieren, patria.

Luego,

La soberanía ha sido violada sistemáticamente y, desde que somos república, más notoriamente desde que el Paraguay ha sido derrotado militar, política, cultural, y casi moralmente si no fuera por su pueblo, en la guerra grande. Antes fuimos un pueblo que, con sus defectos y virtudes, era soberano, es decir, era patria, es decir, éramos vos, yo, nosotros los que decidíamos su destino y estábamos dispuestos a dar la vida por ella.

Después vino la rifa, la ruleta rusa, la rueda de chicago, el chica-grande, la calesita y el gallito ciego.

La soberanía ha sido violada cuando se “vendieron” más de 5.700.000 has. de tierra, equivalentes al 10 % del territorio de Paraguay a la compañía anglo-argentina Carlos Casado S.A, que desde 1910 hasta 1997, arrasó con todos los árboles de quebracho que existían en el Chaco paraguayo utilizados para la producción de tanino usado en la curtiembre, explotando mano de obra esclava de paraguayos y pueblos originarios en las condiciones más perversas de salud, vivienda y educación. Esta misma transnacional vendió a otra transnacional (Secta Moon) unas 400.000 has. con el casco urbano, la iglesia, calles y viviendas, incluidos sus 6.500 pobladores.

La soberanía ha sido violada cuando bajo el gobierno del Gral. Bernardino Caballero y en el contexto del saqueo de las arcas del estado por parte de la oligarquía criolla, se remataron 2.718.750 has. de tierras a favor de La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), empresa que cuenta entre sus socios fundadores al propio Gral. Caballero, padre de la patria “agrarista”, y también fue violada cuando se entregaron más de 600.000 has. al Gral. Patricio Escobar como trueque de guerra para intentar sepultar en el olvido aquel verdadero holocausto de la guerra del 70.

La soberanía también ha sido violada cuando, a través del nefasto Tratado de Itaipú firmado en 1973 por el dictador Stroessner, “único líder” de las cúpulas del Partido Colorado y no del pueblo pobre colorado que también sufrió el “mbarete” y las garras del stronismo, se regaló energía a la oligarquía brasileña para que, a sus anchas, pueda disponer de más del 90 % de la energía producida por la central hidroeléctrica e hipotecándola hasta el 2023, año en el que recién se podrá modificar dicho “acuerdo”. Actualmente “vendemos” energía a 51 dólares por MW hora, que en realidad es la suma de 42 dólares (precio del “tratado”) más 9 dólares (adicionales por compensación lograda por gestiones del gobierno del presidente Lugo), sin embargo, este precio está por debajo del precio de mercado y genera una deuda intolerante que viola alevosamente nuestra soberanía nacional.

La soberanía ha sido violada brutalmente entre 1954 y 2003, gobiernos de turno mediante, al adjudicar unas 7.851.295 hectáreas de tierra a testaferros stronistas, empresarios, militares, politiqueros, chupamedias, hurreros y traficantes de todo tipo. Estas tierras, que debían ser destinadas a la reforma agraria fueron robadas de las manos de campesinos sin tierra, quienes deberían haber sido sus verdaderos poseedores y quienes deberían de haberlas trabajado para producir alimentos y bienestar para sí y para sus familias, y fueron adjudicadas violentando las leyes agrarias que la propia oligarquía dictó a través de sus tentáculos parlamentarios, ofreciendo incluso a través de los clasificados de diarios paulistas las mejores tierras del departamento de Alto Parana conocidas por su productividad y fertilidad.

La soberanía ha sido violada sistemáticamente desde el momento mismo en que la multinacional MONSANTO y su séquito de empresas de agronegocios pusieron un pie en este país con sus semillas genéticamente modificadas, sus maquinarias y sus poderosos y mortales venenos, y comenzaron a pulverizar sin piedad con sus Roundup, más conocido como “mata

todo”, comunidades campesinas, escuelas, cursos hídricos, fauna, flora y todo lo que encontraba a su paso. Y nuevamente la generosa y patriota oligarquía le entregó todo, tierras, recursos naturales, medios de comunicación, soberanía alimentaria, universidades, ministerios y secretarías, parlamento, ejecutivo y poder judicial, todo, absolutamente todo para que pueda destruir lo máspreciado que puede existir en la humanidad que es el alimento y el medio ambiente.

Y para seguir violando soberanía, deporte practicado desde siempre por las clases dominantes de nuestro país sin la más mínima vergüenza, hoy está a la vista de los paladines de la soberanía, quienes ya se están frotando las manos desde el palacio de gobierno, de justicia y el legislativo, una de las entregas más desvergonzadas de la historia con la instalación de la multinacional Rio Tinto – ALCAN, acusada de promover revueltas militares, golpes de estado y de destruir el medio ambiente a escala mundial. Se trata de una minera de origen anglocanadiense que pretende instalar una fundidora de aluminio con una mega inversión de 4 mil millones de dólares, el doble de la deuda externa del Paraguay, lo equivalente a las reservas monetarias internacionales del país y casi un tercio del producto interno bruto!. De lo que estamos hablando no es de una curtiembre que va a contaminar el cauce hídrico de un arroyito pueblerino, estamos hablando de un enclave industrial que va a agredir profundamente al medio ambiente por ser una fundidora de aluminio, altamente contaminante, incluso con consecuencias en el calentamiento de toda la región. El descaro de esta multinacional llega al punto de solicitar una subvención por parte del Estado, cosa que el gobierno de Fernando Lugo estuvo frenando pese a la presión de todos los sectores que hoy brindan por el golpe parlamentario y la unidad de toda la clase dominante. La ANDE debe vender cada Megawatt/hora a 60 dólares, y ellos sin embargo están planteando 33 a 38 dólares! Un robo por parte de una multinacional que no empleará a más de 1.500 personas porque las fundidoras de aluminio son las que menos ocupación crean dado que este tipo de industrias es una de las más automatizadas, porque la vida humana en fábricas de estas características resulta insoportable!. Entonces estamos hablando de un estado dentro de otro estado, y eso ya no es sólo violación de soberanía, eso vulgarmente se denomina invasión!.

Y lo peor de todo, no peor para nosotros, los que decidimos sepultar ad aeternum a la patria oligarca, lo peor de todo, digo, para quienes hoy levantan sin asco la bandera de la soberanía, es que, y esto es lo que les duele, esta soberanía no fue violada por Lugo, el socialismo del siglo XXI, el Frente Guasu, los zurditos, la “izquierda caviar”, los haraganes que cierran rutas y ocupan tierras o los “sin nada” que hoy no pueden discutir sobre soberanía porque la tienen que pelear con el carrito reciclador para llevar algo a la boca de sus hijos; lo que les duele es que ellos, los representantes de la patria oligarca, la patria ganadera, la patria sojera y latifundista, los paladines de la patria contrabandista y mafiosa, los gendarmes de la patria narco, ellos fueron los que, atravesando el corazón mismo del pueblo, se han pasado la vida violando día y noche la soberanía que, pese a ellos, hemos intentado y lo seguiremos intentado construir entre todos los hombres y mujeres dignos de esta patria.

Comenzaré a creer, tímida y dudosamente, claro está, en los “patriotas” que hoy ensucian la palabra soberanía y se llenan la boca de un falso nacionalismo que más bien orilla el fascismo, el día en que devuelvan todo, absolutamente todo lo que se han robado a esta nación heroica y comiencen a recuperar un poco de la dignidad que han perdido exigiendo la restitución de soberanía que ellos han entregado al capital transnacional y a sus lacayos de la mafia local a lo largo y ancho de nuestra historia.

¡Comunicar, organizar, resistir!

[ALBA TV](#)

Tomado de [ALBA TV](#)

Este es un repaso a la actualidad y nuevos desafíos de la Comunicación Popular en Paraguay. Una fotografía tomada por dos referentes de la comunicación que resiste en ese país. En orden de aparición: Guillermo Verón, miembro del Frente Guazú y comunicador popular. Y Marcelo Martinessi, exdirector de la Televisión Pública de Paraguay.

¿Cuál era el presente de la Comunicación Popular en Paraguay antes del golpe?

GV: El sector más conservador, la derecha paraguaya, se ha encargado de que los medios comunitarios no tengan ningún tipo de fuerza. El movimiento de medios y radios comunitarias se empieza a organizar después del '89 a partir de la caída de la dictadura de Stroessner. Es una lucha de más de 20 años por ocupar el espectro radioeléctrico. La derecha se ha encargado todo este tiempo de hacer que los medios comunitarios no puedan tener cabida ni fuerza, se reglamentó hace unos dos años atrás a través del Congreso paraguayo, que fue el que juzgó al presidente Lugo, una capacidad para las radios comunitarias de 50 vatios, eso sería una cuadra a la redonda, y las frecuencias que les asignan a las radios son pocas, de manera que se trata de que las radios comunitarias compitan unas con otras por una frecuencia.

La guerra contra los medios comunitarios fue sistemática desde que cayó la dictadura y se han encargado de evitar que ellas puedan tener fuerza, por ejemplo, han prohibido que instancias como Itaipú Binacional, que es la represa que tiene un componente de ayuda social muy grande pueda cooperar con las radios comunitarias, entonces las posibilidades que tienen los medios comunitarios en Paraguay son muy limitadas, y pese a eso están resistiendo, están luchando y nos están acompañando también con muchas dificultades en este proceso de resistencia por la recuperación de nuestro proceso democrático.

¿Eso las ha llevado a articularse de modo más fuerte entre ellas para tratar de combatir esa realidad?

GV: Sí, de hecho tenemos dos gremios de medios comunitarios en Paraguay, una de ellas es Comunica, que es una asociación de medios comunitarios de Paraguay, está también la Red de Radios Populares que está articulando con Voces Paraguay, las radios y los medios están organizados, están resistiendo con muchas dificultades pero la articulación es importante, incluso tienen un mecanismo para hacer una cadena con todos los medios comunitarios del país, es prácticamente la única voz que tiene el pueblo paraguayo en este momento y que ha tenido casi desde su existencia, hace más de 20 años, porque los medios comerciales no están interesados en dar cabida a la opinión del pueblo paraguayo.

¿Era previsible para la TV Pública que en el momento en que la derecha tomara el poder cercenara ese altavoz del pueblo?

MM: Realmente fue muy extraño todo para nosotros que veníamos trabajando en Televisión Pública, más que nada porque creemos que han dado claras señales iniciando el quiebre del proceso democrático, también han dado claras señales de censura. Desde el atropello a la Tv Pública, intento de desalojo con policías, órdenes de que se cortara la programación y que no se mostrara lo que estaba pasando en el país, fueron demasiadas las señales que nosotros desde la Tv Pública recibimos para entender que este Gobierno que se instaló en Paraguay estaba queriendo silenciar y poner un manto de oscuridad sobre lo que estaba pasando con las manifestaciones pacíficas, con los reclamos genuinos de la gente y con las quejas acerca de este quiebre democrático.

A 13 años de Revolución todavía tenemos vestigios de esa política de derecha en los medios de comunicación, ¿Cuál es el estado de la TV Pública en esa materia?

MM: Realmente lo que pasa es que la Televisión Pública es una creación del Gobierno de Lugo, la Tv Pública tenía seis meses al aire, el proyecto estaba hace más o menos dos años y medio moviéndose, entonces era un proyecto muy nuevo, donde la idea era aportar nuevas ideas, nuevas estéticas, nuevos procesos a la comunicación en Paraguay y se estaba consiguiendo instalar cuestiones lingüísticas muy fuertes, se estaba consiguiendo instalar el tema de la memoria, de la

dictadura, se estaba consiguiendo instalar el tema de la soberanía alimentaria, cosas muy fuertes que evidentemente no tienen cabida en los medios de comunicación comerciales y que se estaban consiguiendo instalar en la Tv Pública y eso es lo que nosotros queríamos desde un principio.

Lo que generó ese atropello inicial a la TV Pública es que se tenía un espacio denominado “Micrófono Abierto” y que es el espacio en que la gente podía hablar de cualquier tema, y en las últimas semanas por lo que venía pasando la gente empezó a hablar de política, a decir que estaba en desacuerdo con los diputados, a llamarles “dipuchorros”, “senarratas”, empezó a haber un fuerte cuestionamiento de parte de la ciudadanía al Parlamento, y eso fue lo primero que se atacó.

A nosotros nos parece que los componentes nos hacen difícil compararnos a una realidad como la de ustedes que tienen totalmente otros procesos, pero evidentemente la intención es la misma: callar a la gente.

Algo que parece incipiente a la distancia es la articulación con los medios comunitarios, ¿cómo iba ese proceso antes del Golpe de Estado?

MM: A nivel de televisión no pudimos empezar ese proceso porque estábamos apenas con seis meses al aire. En televisiones comunitarias existen un par de proyectos, hay uno por ahí más grande que es el de Ecocultura, otros más pequeños, pero todavía no habíamos empezado a hacer ese tipo de articulación porque estábamos apenas arrancando, pero a nivel de radio sí.

GV: Yo creo que la Tv Pública fue despertando mucho interés, estimuló y dio un nuevo aire al sector de las comunicaciones comunitarias porque era una experiencia que nosotros nunca habíamos tenido, una Tv Pública en Paraguay, y en ese sentido los medios comunitarios estaban muy pendientes del desarrollo y el crecimiento que iba teniendo la Tv Pública.

Muchas de las radios comunitarias representan a organizaciones campesinas, y la Tv Pública daba un espacio, por ejemplo, que reivindicaba a las semillas, la comida tradicional de los pueblos originarios, entonces se cortó un proceso que creo iba a materializar una articulación, una hermandad muy fuerte entre la Tv Pública y los medios comunitarios, y lastimosamente ahora tenemos un Gobierno de facto que ha cortado todas esas posibilidades que se estaban generando a partir del proceso que se inició en el 2008 con el presidente Fernando Lugo.

Con los medios comunitarios es previsible el futuro, les queda resistir y luchar. ¿Hoy cómo sigue el futuro de la Tv Pública? ¿Desaparece o cambia de forma bajo este Gobierno de facto?

MM: Pues la verdad es que la Tv Pública salió con una visibilidad muy fuerte de este quiebre democrático, ¿a qué me refiero?, a que fue frente a la Tv Pública donde se levantó el último bastión de resistencia ciudadana, la gente salió a la calle a defender a la Tv Pública, se instaló frente a ella, resistió allí durante varios días. Ahí la gente impidió que entraran policías, impidió que se cambiara la programación, impidió que se cortara el programa “Micrófono abierto”, todo eso visibilizó muchísimo el rol de la Tv Pública, y no quiero usar la palabra “blindó”, porque en un proceso tan terrible como el actual en Paraguay no podemos usar una palabra como esa, porque lo que hizo fue poner en el debate la importancia de la Tv Pública y de que ese espacio siga siendo un lugar de construcción. Muchos de nosotros ya estamos afuera, algunas personas están saliendo de Tv Pública, en mi caso que estaba en la dirección y algunos gerentes, porque evidentemente se convierte en un lugar más difícil de trabajar, mucho más difícil para conseguir alianzas para poder construir ese medio.

Creo que el proceso de Tv Pública va a sufrir también gravemente con este quiebre democrático, pero nosotros estamos instando a los ciudadanos y ciudadanas a que nos ayuden a resistir, a pelear, a disputar espacios adentro y afuera, creo mucho en la disputa de diversidad en los medios comerciales, que es un tema que tenemos que visibilizar como ciudadanía para cuestionar los medios hegemónicos. Me parece que la Tv Pública es un componente muy fuerte pero también debe haber un cuestionamiento a todo un mapa de medios para poder tener fuerza y tener presencia con un proyecto que aspira, como decía Guillermo, a recuperar la democracia.

Rescatando la palabra “disputa” y sumándola a las movilizaciones que se vienen dando, al hablar de Micrófono Abierto, esa experiencia se replicó en la última movilización. ¿Hay alguna articulación tomando en cuenta que Tv Pública ya no es el proyecto original? ¿O hay algún plan de sustentar el Micrófono Abierto con las radios comunitarias?

MM: Se está haciendo Micrófono Abierto en Canindeyú, San Pedro, Concepción y en diversos lugares se volvió muy importante para la ciudadanía y en este momento estamos buscando la forma de crear esa articulación y por ahí están los componentes de formar gente, producir y difundir, esos serán elementos muy importantes a la hora de presentar disputa, poder pelear por espacios de voz ciudadana.

Creemos que puntualmente en el tema de Micrófono Abierto que en este momento trasciende a Tv Pública y se puede convertir en un formato de resistencia para un país que tiene una historia muy oscura, de mucho silencio, de incluso mucha apatía, toda esta cuestión de treinta y cinco años de dictadura hacen que el pueblo paraguayo dé la sensación de que vive con la cabeza agachada, creemos que eso está cambiando, hay un proceso que se inició y que no hay que volver a esa oscuridad. Ganar ese espacio de Micrófono Abierto como ciudadanía en este momento es muy importante, sea en el proyecto político que se quebró o en otros espacios comunitarios, como las radios comunitarias, como los pocos canales comunitarios y canales webs que hay y en todas las iniciativas ciudadanas puede ser un espacio muy importante para este momento y evidentemente es nuestra intención poder articularlo.

GV: La propuesta de micrófono abierto fue la manifestación más concreta, palpable del repudio generalizado que tuvo este juicio político, este Golpe de Estado exprés en Paraguay. Tan fuerte fue lo que generó Micrófono Abierto que se convirtió la Tv Pública en el bastión de resistencia, después del juicio político la gente estaba buscando rearticularse, volver a organizarse, y Micrófono Abierto en Tv Pública se convirtió en un faro que convocó a miles de personas frente a la sede de la Tv Pública y puso sobre el tapete que los medios comerciales no dan espacio y no sirven para expresar lo que piensa el paraguayo, la paraguaya, incluso desafiamos a los medios comerciales, que ellos también puedan tener un micrófono abierto, haciendo entrar en contradicción el carácter de los medios comerciales, pues creemos en ese formato de micrófono abierto, como decía Marcelo, para un pueblo que estuvo durante treinta y cinco años bajo una de las dictaduras más terribles de la región.

Obtuvimos en la dictadura el premio al mejor país anticomunista, entonces que vos le des la posibilidad al pueblo paraguayo un micrófono donde expresarse genera un cambio de conciencia impresionante. Ni siquiera estamos dimensionando el poder que tiene ese micrófono abierto y yo creo que eso va a ser incorporado indefectiblemente en nuestro proyecto político, porque es un formato que nos ayuda a entender cómo piensa nuestro pueblo y a dimensionar la importancia que tienen los medios que realmente representan los intereses del pueblo paraguayo, del común de la paraguaya y del paraguayo.

Campaña mediática contra dirigentes de resistencia civil

Por Alai

El partido Tekojoja denuncia que el gobierno de Franco ha puesto en marcha una campaña mediática para desacreditar y desfigurar la imagen de quienes encabezan la resistencia civil al golpe de Estado parlamentario que depuso al presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio.

El gobierno de Franco, difundió este jueves un video en el que aparecen imágenes del senador Sixto Pereira, del partido Tekojoja, junto con el ex dirigente del Partido Patria Libre, Omar Martínez, condenado el miércoles pasado por la justicia ordinaria por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Pereira y Omar Martínez fueron colaboradores del presidente Lugo.

Estas imágenes, según los medios privados que apoyaron el golpe contra Lugo, sería la prueba, de que el ex mandatario y sus aliados tienen vínculos políticos con la guerrilla del EPP.

“Advertimos a la población de esta agenda perversa del golpista Franco. Dejamos sentado que dicho video se sacó de contexto, se manipula y tergiversa y nada tiene que ver con la realidad actual. El compañero Sixto Pereira, contra quien hacen los disparos mediáticos y políticos de mentirosas acusaciones de supuestos vínculos con "secuestradores sin pruebas", posee una larga trayectoria de defensa de los derechos campesinos por vías pacíficas y legales, siendo un abanderado de la causa por la reforma agraria, un nuevo modelo de desarrollo rural, y la resistencia a los transgénicos, a través de métodos democráticos e institucionales, por tanto esto surge por el temor de una minoría oligárquica, mezquina y golpista ante la posibilidad real de victoria de los sectores progresistas y de izquierda en las próximas elecciones del 2013”, señala un comunicado del partido Tekojoja.

Para la organización partidista el montaje del gobierno no es más que una cortina de humo para tapar la realidad del golpe a la democracia, buscando desviar la atención del hecho principal que es la instalación de un gobierno dictatorial.

Tekojoja aclara también que cuando se produjo la filmación del video, Sixto Pereira, como dirigente social y campesino mantenía reuniones “buscando dar solución y destrabar los distintos problemas campesinos con todos los sectores sociales”, por tanto, cualquier intento de "crear una ficción mediática para vincular (lo) a hechos posteriores violentos que condenamos, es solo parte de la agenda de persecución política e ideológica".

Tekojoja advierte sobre el rebrote de una caza de brujas contra los sectores democráticos y repudia “la metodología del Gobierno de facto de distribuir supuestos video o fotos para acusar a los demócratas sin pruebas que cuestionan su gobierno de dictatorial”.

Otro video difundido el 3 de julio por la Ministra de Defensa, María Liz García, sería la prueba de que el canciller venezolano Nicolás Maduro se habría reunido con altos mandos militares a los que habría “arengado” para que impidan la destitución de Lugo. Sin embargo, el 26 de junio el comandante de la Fuerza Aérea, Miguel Christ, ya desmintió esta versión diciendo: “Nadie me pidió nada durante la crisis”.

Tekojoja denuncia “la férrea censura que rigen en Paraguay” y la complicidad de varios medios con el golpe. “Esto echa por tierra de que en el Paraguay exista una real libertad de prensa y expresión, ya que solo se informa lo que hace y dice el Gobierno dictatorial de Franco. Varios medios conservadores cerraron filas con el golpe y también ponen en marcha un golpe mediático, censurando la noticia y tergiversando la información queriendo mostrar la falsa realidad de que en el país no pasó nada. En los medios prevalece un coro golpista de derecha, que viola la libertad de expresión de la ciudadanía paraguaya, desnaturaliza y prostituye los fines de la libertad de prensa”, agrega.

Tekojoja señala, por último, que “estudiará medidas políticas y legales contra el gobierno de facto y ciertos medios de comunicación social, que realizan irresponsables calumnias contra dirigentes políticos de la resistencia civil”.

En Paraguay denuncian censura informativa

Por Washington Uranga

Para Juan Díaz Bordenave, uno de los más prestigiosos intelectuales de Paraguay, ampliamente reconocido en América latina y quien fuera uno de los principales asesores del derrocado presidente Lugo, “el golpe parlamentario” es “mercenario y farisaico”, y “en mi percepción, se trató de una manifestación natural de la confrontación continental y mundial de dos conceptos antagónicos de democracia: aquella que la ve como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y aquella que la ve como el gobierno de las clases dominantes, por las clases dominantes y para las clases dominantes”. Las afirmaciones del intelectual forman parte de un documento distribuido por él mismo vía correo electrónico en el que sienta su posición frente a los hechos que culminaron con la destitución de Lugo y en el que explica que “la caída del presidente del Paraguay fue planeada en sus menores detalles, y ni siquiera para los que la vivimos de cerca es fácil entender su génesis y proceso”.

La denuncia de Díaz Bordenave se conoció en el mismo momento en que desde el Frente por la Defensa de la Democracia (FDD) se denuncia censura informativa y bloqueos de cuentas de correo electrónico de allegados a Lugo. También se supo que el gobierno de Federico Franco comenzó una “limpieza” del sistema de medios públicos. Las nuevas autoridades echaron sin motivo fundado a periodistas y comunicadores a los que se considera afines a Lugo y que hasta ahora trabajaban en la Sicom (Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo), Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia oficial de noticias IP Paraguay. Mientras tanto en Asunción se sigue aguardando una resolución sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados de Lugo contra la determinación tomada por el Congreso. De no concederse el pedido del ex presidente, se adelanta que la destitución sería apelada ante los organismos internacionales.

En su análisis sobre el “golpe parlamentario”, Díaz Bordenave sostiene que “los principales autores del golpe no obraron por ideales sino por intereses” y asegura que entre los golpistas “estaban terratenientes latifundistas, empresarios del agronegocio sojero y propietarios de industrias”. Y agrega que junto a los mencionados se agruparon “miembros de la alta burguesía, políticos de partidos tradicionales, religiosos conservadores, jefes militares, miembros de la clase media alta, representantes paraguayos de multinacionales”, porque todos ellos estaban “preocupados por la amenaza que, en su entender, Lugo representaba para sus propiedades, intereses y privilegios”.

Al enumerar las causas que provocaron el golpe parlamentario, Díaz Bordenave señala “la intensificación de la lucha de los campesinos por acceder a la tierra; el aumento de la prohibición de semillas transgénicas, lo que puede afectar a los enormes lucros de la multinacional norteamericana Monsanto; la propuesta de aplicación de impuestos a la exportación de commodities; la fiscalización de pulverizaciones tóxicas aéreas por el Senave (Servicio Nacional de Calidad Animal y Vegetal); la decisión de realizar una reforma agraria que tenga en cuenta que el 82 por ciento de la tierra está en manos del 2 por ciento de los propietarios; la creciente organización de los campesinos; (...) el acceso del pueblo a los nuevos medios públicos de comunicación” y “la creciente comprensión popular de que la democracia representativa debería ampliarse hacia la democracia participativa”.

En la raíz de las afirmaciones de Díaz Bordenave están las presiones ejercidas por el grupo Monsanto, utilizando la Unión de Gremios de Producción (UGP) para legalizar el uso de la semilla de algodón transgénico Bollgard BT para su siembra en Paraguay. En octubre del año anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces a cargo del liberal Enzo Cardozo, habilitó el uso de la semilla, pero el Senave no validó esa decisión por inexistencia de controles técnicos y sanitarios. Fue entonces cuando el grupo Zuccolillo, aliado a Monsanto y que controla el diario ABC Color (el de mayor circulación en Paraguay), denunció por corrupción a Senave y a su director, Miguel Lovera, designado por Lugo. El 8 de junio pasado, ABC Color publicó una nota titulada “Los 12 argumentos para destituir a Lovera”. Luego, mientras desde el diario ABC Color se denunciaba por presunta corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez, y al ministro de Ambiente, Oscar Rivas, que negaron el aval técnico al uso de las semillas transgénicas de algodón, Monsanto, en complicidad con el ministro Cardozo (del mismo partido del actual presidente Federico Franco), insistió en buscar la

legalización de otra variedad transgénica de algodón: BT y RR (resistente al Roundup). El grupo Zuccolillo es uno de los principales socios paraguayos de la transnacional Cargill.

Díaz Bordenave confirma también las denuncias en el sentido de que “el incidente de Curuguaty –que sirvió de pretexto para el juicio político– (...) demuestra que el asesinato de policías fue realizado con armas de alto poder, usadas por francotiradores profesionales de alta puntería”. En ese incidente murieron once campesinos y siete policías y, según las fuentes cercanas a Lugo entre los campesinos ocupantes, hubo “infiltrados” que atacaron y dieron muerte a los policías.

Desde el Frente por la Defensa de la Democracia (FDD) se asegura que Federico Franco, uno de cuyos principales colaboradores es el ecuatoriano Jaime Duran Barba –el mismo que cuida la imagen de Mauricio Macri–, ha contado con el respaldo de grupos religiosos conservadores y de ultraderecha. Allí están incluidos personajes de la Secta Moon, de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y grupos evangelistas fundamentalistas. Vale recordar que el Vaticano, a través del nuncio en Paraguay, Eliseo Antonio Ariotti, fue el primero en reconocer al gobierno golpista de Franco, y que la Conferencia de los Obispos católicos le había “recomendado” a Lugo, un día antes de su destitución, renunciar para “evitar más derramamiento de sangre”.

Desde el FDD se insiste en la activa participación que los grupos mediáticos tuvieron en el golpe. De hecho, los dos diarios más importantes del país, ABC Color y Última Hora, venían alentando desde hace mucho tiempo la idea del juicio político. ABC Color pertenece al grupo Zuccolillo y Última Hora al grupo Vierce, dueño también de Telefuturo, La Tele y diez radios repartidas por todo el país.

Por su parte, la Asociación de ONG de Paraguay (Pojoaju) alertó sobre la posible violación de los derechos humanos por parte de las nuevas autoridades, denunciando la “instalación de la desinformación y el miedo”, y la “paralización de programas y proyectos sociales”.

Caza de brujas

Por Rubén Ayala

Es asombroso como 23 años después de la caída de la dictadura en Paraguay sigue la cultura stronista a flor de piel. La intolerancia a ideas disímiles a los grupos hegemónicos instalados y apuntalados a través de los diferentes sistemas que la sociedad dispone: educación, religión, familia, medios de comunicación, etc., patentiza la poca evolución de nuestra cultura democrática. Y es más lamentable aún que hoy los medios de comunicación sean los principales vehículos propulsores de esta campaña de intransigencia, lamentable porque se supone que los medios suelen ser, en la mayoría de los casos, las primeras víctimas de ideas absolutistas que impiden el desarrollo y libertad de pensamiento y expresión.

Días o incluso horas después del juicio político (que ya tiene su origen y basamento en la intolerancia y persecución política que es absolutamente inconstitucional) y asumir el gobierno de Franco, empezó la “caza de brujas” respecto a “los comunistas”, “marxistas”, “bolivarianos” y hasta contra “sacerdotes guerrilleros que enseñan a los indígenas a usar la flecha” (?!!!). Y se hace a través de una campaña mediática de “pánico moral” cuyo efecto principal buscado es instalar el temor paralizante, en primer lugar, y el odio y descrédito a toda idea o visión de sociedad defendida por el establishment.

Para construir y fortalecer nuestra democracia en Paraguay es fundamental, indispensable si se quiere, la construcción de la cultura democrática, esto es el respeto y la tolerancia, en primer lugar a la libertad de pensamiento, expresión y organización; y, consecuentemente, aceptar con naturalidad la posibilidad que existan personas, grupos y organizaciones sociales y políticas que tienen otras formas de pensar y ver el mundo y hasta propuesta de otro modelo económico y político de estado o relación social. No debería asustarnos esto, ni debería ser, mucho menos, razón para desarrollar una campaña atemorizante y de persecución.

Muy grave daño se está causando a nuestro país y a nuestra democracia con esta campaña “macarthista” que crispa más la situación política y divide y enfrenta a la población por el simple hecho de pensar diferente.

A continuación comparto la publicación de “wikipedia” respecto a la caza de brujas y el macartismo... y la conclusión será indudablemente que no exagero con el título de este comentario.

Según Wikipedia en internet. La caza de brujas es la búsqueda de brujos, brujas o evidencias de brujería, que llevaba a acusar a la persona afectada de brujería, a un juicio y finalmente a una condena. Muchas culturas, tanto antiguas como modernas, han reaccionado de forma puntual a las acusaciones de brujería con miedo supersticioso y han castigado, o incluso asesinado, a los presuntos o presuntas practicantes.

Las cazas de brujas todavía ocurren en la actualidad y suelen clasificarse dentro del persecución llamado pánico moral. De forma general, el término ha llegado a denotar la de un enemigo percibido (habitualmente un grupo social no conformista) de forma extremadamente sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real.

McCarthy instigó una cruzada anticomunista, titulándose defensor de los auténticos valores americanos. Los elementos más conservadores de la clase política norteamericana, entre ellos el futuro presidente Richard Nixon, le apoyaron en su labor en el Comité del Senado que presidió.

Por extensión, el término «macarthismo» ha sido acuñado para describir específicamente la intensa persecución anticomunista que existió en Norteamérica desde 1950 hasta alrededor de 1956, momento en el que se le empezó a conocer popularmente como Red Scare. Durante este periodo, las personas que eran sospechosas de diferentes grados de lealtad al comunismo se convirtieron en el blanco de investigaciones gubernamentales. Estos procesos fueron conocidos como la «caza de brujas». Gente de los medios de comunicación, del gobierno, militares y funcionarios fueron acusados por McCarthy como sospechosos de espionaje soviético o de simpatizantes del comunismo.

Yo estuve allí

Por Augusto dos Santos

Estuve viendo en la Television los segmentos de nuestra sospechosa presencia en el Palacio de Lopez el día del Juicio Político.

Se que en SICOM, la Secretaria con rango de Ministerio que orgullosamente me toco fundar, estuvieron haciendo esfuerzos por encontrarme en las fabulosas "videocassetadas del Palacio de Lopez" y me adelanto a declarar urbi et orbi que YO ESTUVE ALLI.

Con una actitud altamente sospechosa ingrese al Palacio – como todos los días – y aun recuerdo que ese día aciago pedí en la Secretaria Privada, mientras aguardaba que me atienda el terrible dictador Fernando Lugo, un café cortado. Y me adelanto a ofrecer este detalle (del café cortado) para que agreguen a la imputación otro dato: grave adulteración láctea de un típico producto colombiano. Gesto de por si bolivariano.

Pero peor aun, encontré a todos los Ministros (incluyendo a varios compañeros y compañeras que continúan aun en el actual gobierno) en el supremo acto de execrable sedición de saludar a Lugo y ofrecerle su solidaridad por el patriótico y sesudo juicio político que se desarrollaba en el Parlamento.

Hago publica mi intención de entregarme a las autoridades por el acto subversivo de estrechar la mano esa mañana a malhadados visitantes del Palacio de Lopez, entre los que recuerdo a los Cancilleres de Argentina, Uruguay, Peru y al canciller de Venezuela, si!, y que las futuras generaciones no retiren de mi memoria lo vomitivo de este propio impropio y deleznable episodio.

Ah, y como si todo eso fuera poco, exijo que se forme una comisión especial para investigar porque al Embajador Ecuatoriano le distinguí con un abrazo, lo cual no tiene el perdón de Dios.

Ningun tribunal será suficiente para perdonarme que incluso, en un momento dado de la multitudinaria concurrencia en el despacho del Presidente, èste me pidió que lea el texto de su renuncia a los Ministros, Ministras y colaboradores civiles y militares presentes (entre ellos varios y varias que siguen trabajando para el actual Gobierno, para los y las que pido, naturalmente ,que no exista sanción de ninguna especie porque el solo hecho de ser readmitidos los libera de culpa y pena).

Pero el mas terrible acto, el mas impresentable de todos, ante el cual no me queda otra que pedir ya la constitución de un pelotón de fusilamiento en los bajos del congreso, es por haber entrado a ¡ una sala de reuniones! que bien se documenta en los fantásticos videos rescatados por la SICOM.

Y merezco el fusilamiento porque a quien sino a mi y todos los ministros, y ministras y colaboradores que allí estuvieron(entre ellos varios que siguen trabajando para el actual gobierno) se me ocurriría repetir un acto que hacia sistemáticamente hace 4 años, casi todos los días, acompañando a mi déspota presidente, justo el dia en que grababan las videocassetadas de Faustao.

Y cuando me asista el ultimo suspiro, gracias al acto fulminante del pelotón de francotiradores, juro que moriré con una sonrisa entre dientes pensando en el próximo presidente que sufra un golpe en Paraguay, abandonado por sus colaboradores, solo para no salir en la tele al dia siguiente como peligrosos visitantes del Palacio de Lopez.

No estamos locos. Estamos estúpidos.

Golpe de Estado en Paraguay: ¿quién ganó qué?

[Immanuel Wallerstein](#)

El 22 de junio de 2012 el Senado paraguayo invocó una cláusula de la Constitución que autorizaba el juicio político del presidente por el "mal desempeño de sus funciones". El mandatario era Fernando Lugo, quien fue electo tres años antes y cuyo cargo estaba por terminar en abril de 2013. De acuerdo con la normatividad, Lugo estaba limitado a un solo periodo en el cargo.



El "mal desempeño" invocado por el Senado fue el hecho de que el 17 de junio hubo un enfrentamiento entre trabajadores agrícolas pobres que pugnaban por el derecho a la tierra y la policía que los desalojó de la tierra que ocupaban. Diecisiete personas (campesinos y policías) perdieron la vida. El Senado lanzó su proceso el 21 de junio y ofreció a Lugo dos horas para presentar una defensa (lo cual él rechazó por considerarlo sumamente inapropiado). El Senado votó al día siguiente su retiro del cargo.

Su vicepresidente, Federico Franco, pertenece a un partido diferente al de Lugo. Sin embargo, Franco entró a las elecciones de 2008 con Lugo, con el fin de derrotar al Partido Colorado, que había estado en el poder por más de 60 años. Una vez en el cargo, Franco se opuso consistentemente a las políticas de Lugo. La Constitución paraguaya prevé que, en caso de destitución del presidente, automáticamente el vicepresidente asuma el cargo. El golpe de Estado hizo a Franco mandatario.

Lugo arguyó que se trataba de un golpe de Estado y que si en lo técnico no era ilegal, ciertamente era ilegítimo. Casi todos los gobiernos de América Latina concordaron con el análisis, pidieron su destitución y de varias formas cortaron relaciones con Paraguay. ¿Qué condujo a este golpe? ¿Qué esperaban conseguir los que lo tramaron? ¿Quién los respaldó? ¿Cuáles son las consecuencias reales para Paraguay, América Latina y el mundo?

Paraguay ha sido durante mucho tiempo una de las peores dictaduras en el continente americano, manejado por una pequeña clase terrateniente organizada en el Partido Colorado, con miserables condiciones para el campesinado, la mayoría del cual pertenece a pueblos indígenas. En 1989 el exilio del dictador del Partido Colorado, Alfredo Stroessner, aflojó un poco las restricciones políticas. El principal partido de oposición, Liberales (partido de Franco), representa más a las élites urbanas, pero tiene igualmente muy poca simpatía hacia el campesinado. Las elecciones de 2008 prometían ser las primeras que fueran relativamente abiertas.

Fue en este punto que el obispo de San Pedro, Fernando Lugo, entró en la escena política. Conocido de tiempo atrás como el "obispo de los pobres", Lugo era asociado con la teología de la liberación, alguien que no contaba con los favores de otros obispos ni del Vaticano. Su plataforma política planteaba una mejor distribución de la tierra. Dado que la Constitución paraguaya y el Vaticano no permitían que un clérigo compitiera por un cargo político, Lugo renunció a su cargo como obispo y buscó la "laicización". Pese a que el Vaticano se negó a ello, compitió de todos modos y el Vaticano lo "laicizó" tras la elección.

Lugo recibió únicamente una pluralidad de votos en lo que fue una elección de tres opciones, pero el Partido Colorado aceptó las elecciones de forma pacífica. Lugo fue el primer político de izquierda en ganar una elección en Paraguay (excepto por una corta victoria de alguien en 1936, quien fue depuesto en un año). La elección de Lugo fue parte de una ola de victorias para los partidos de izquierdas en el continente americano en la primera década del siglo XXI. Para Paraguay fue un símbolo de esperanza.

No obstante, había ganado únicamente por una pluralidad y su partido tenía poca fuerza en la legislatura, especialmente en el Senado. El resultado casi inevitable fue que Lugo sólo pudo hacer muy poco de lo que había prometido. No hubo una reforma agraria. Lugo había prometido poner fin al papel de las fuerzas estadounidenses en el llamado programa antidrogas. En cambio, lo continuó. No hizo maniobra alguna para cerrar la base militar estadounidense en Paraguay. Dado este

decepcionante desempeño, ¿por qué sus oponentes se molestaron en retirarlo del cargo nueve meses antes del fin de su periodo?

De hecho, para quienes emprendieron el golpe de Estado el derrocamiento de Lugo tuvo la consecuencia negativa de hacer posible lo que el Senado había bloqueando por años. Paraguay es miembro del Mercosur, junto con Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. Venezuela había solicitado su inclusión. Esto requería la ratificación de las legislaturas de los cinco estados. Todos habían otorgado su asentimiento, excepto el senado paraguayo. Tras el golpe, el Mercosur suspendió a Paraguay y de inmediato dio la bienvenida a Venezuela como miembro.

Así que, ¿quién ganó en Paraguay con el golpe? En términos de las políticas gubernamentales, no ha hecho una diferencia real. Lo que las élites locales mostraron fue su músculo, tal vez confiando en intimidar no sólo a la izquierda paraguaya, lo que ha ocurrido, sino enviar un mensaje a los otros países, especialmente a Bolivia. Los obispos paraguayos y el Vaticano tuvieron su revancha contra un partidario de la teología de la liberación, aunque no fuera sino un débil.

¿Y Estados Unidos? Estados Unidos ya tenía en Paraguay lo que quería. Seguramente, con Franco garantizaron que continuarán teniéndolo. Las declaraciones de Hillary Clinton posteriores al golpe apenas si fueron condenatorias. De hecho, Estados Unidos bloqueó cualquier reprimenda del golpe por la Organización de Estados Americanos. Pero los vínculos de Paraguay con los militares estadounidenses estarán sujetos ahora a la presión y al debate en América Latina. Así que no está claro lo que ganó Estados Unidos.

Una forma de interpretar el golpe es verlo como una escaramuza en la batalla entre Estados Unidos y Brasil por la hegemonía geopolítica en Sudamérica. Las jugadas iniciales de Brasil –suspender a Paraguay no sólo del Mercosur, sino de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)– no son exactamente lo que quiere Estados Unidos.

Pero hay, sin embargo, ambigüedades en la posición de Brasil. Las plantaciones en Paraguay contra las cuales los campesinos luchaban incluyen un número significativo que son propiedad de los brasiguayos (brasileños y uruguayos) y en consecuencia Brasil no quiere cortar todos los vínculos económicos con Paraguay. Además, Paraguay es una fuente importante de energía hidroeléctrica para Brasil.

¿Qué pasará? El actor clave es precisamente Brasil. No puede darse el lujo de recibir un golpe que será interpretado por toda Sudamérica como algo que fortalece la posición de Estados Unidos. Pero los intereses políticos de Brasil como potencia "emergente" –la creación de un bloque sudamericano, encabezado por Brasil– tuvieron que ser balanceados por los intereses económicos de Brasil en la propia Sudamérica. Para saber lo que ahora ocurrirá en Paraguay uno debe mantenerse atento a Brasil. *(Traducción Ramón Vera Herrera - La Jornada)*

Golpes de estado 2.0 en las Américas

[Gonzalo Fernández](#)

Por todos y todas es conocida la complejidad de entender hoy en día los procesos alternativos que se están desarrollando en las Américas, donde múltiples sujetos y agendas se entrecruzan en la voluntad de romper con la historia de dominación y exclusión del subcontinente. Por un lado, el siglo XXI ha venido acompañado por la llegada de gobiernos anti-neoliberales a diversos países, con desigual carácter transformador, pero que suponen la respuesta al hartazgo de las mayorías populares a la realidad de pobreza, desigualdad y dependencia externa; por otro lado, y aprovechando precisamente esta coyuntura favorable, muchos movimientos sociales -y muchas sociedades en movimiento- han planteado la necesidad de avanzar de manera contundente en la puesta en práctica de agendas políticas emancipadoras, que superen de una vez las lógicas colonizadoras y de subordinación a las que han estado históricamente sujetas la región y sus habitantes.

Así, tras unos inicios en los que actores institucionales y sociales marchaban de la mano, han surgido tensiones entre gobiernos y movimientos, así como entre viejos y nuevos movimientos sociales: la rapidez o lentitud de los procesos de cambio; el corto plazo de los gobiernos o el largo de la emancipación; desarrollismo o transición decidida al buen vivir; la necesidad de superar aquí y ahora los patrones de dependencia o la imposibilidad de hacerlo en un tiempo tan corto en términos históricos. Estos son precisamente los debates que complejizan y enriquecen la realidad de América Latina. Las respuestas a estas situaciones no son sencillas, ni son categóricas, y profundizar en ellas es uno de los grandes retos de toda la izquierda, también de la europea.

No obstante, lo que no podemos negar, independientemente de dónde nos situemos, es que todos estos procesos iniciados con el nuevo siglo han abierto brechas, han permitido espacios de acumulación de fuerzas, espacios de articulación de luchas, espacios de ejercicio de la ciudadanía por parte de las grandes mayorías. Y eso no lo puede capitalizar nadie, es parte de la acción tanto de movimientos como de gobiernos. Eso bien lo sabe la derecha, que pretende acabar de cualquier manera con toda esta nueva etapa ilusionante. Así, los ataques de las oligarquías y de sus medios de comunicación -hegemónicamente alineados con ellas- no cejan en el esfuerzo de desacreditar gobiernos y luchas sociales, con el ánimo de desestabilizar la región y de volver a la situación previa de control absoluto del subcontinente. Para ello, están dispuestas a todo, incluidos los golpes de estado.

En esta clave se entiende el golpe de estado en Venezuela en 2002 y el golpe de estado en México en 2006 -vía fraude electoral-. Pero también así se entienden los golpes de estado 2.0 de Honduras (2009) y de Ecuador (2010), donde se ensayan nuevas fórmulas de golpe en las que se busca que, con idénticos resultados, la comunidad internacional y la población no los asimile como tal. De esta manera, frente al golpe militar puro y duro, se plantean nuevas vías, que van desde la desestabilización social generada por la policía, hasta al uso fraudulento de recursos legales e incluso constitucionales.

Esta nueva trama golpista 2.0 sigue hoy por hoy muy presente en América. La pasada semana el presidente de Paraguay fue destituido en base a un juicio político, figura legal de la constitución que permite apartar de su cargo a un presidente por incapacidad manifiesta para ejercer sus funciones. En este sentido, se orquestó una escenificación legal para un acto ilegítimo y antidemocrático, en la que se fulminó a un presidente elegido por votación popular en un juicio sumario en el que sólo tuvo dos horas para ejercer su defensa, sin posibilidad de prepararla como es debido, y ante una acusación tan grave. El objetivo último del golpe: que una de las oligarquías más retrógradas del continente frenara los tímidos procesos de cambio generados en los últimos años, así como evitar que la izquierda contara con las fuerzas suficientes para enfrentar las elecciones presidenciales de 2013.

Por otro lado, todos los medios de comunicación del mundo se hacen eco desde el pasado fin de semana de los disturbios generados por la huelga policial en Bolivia -hecho ilegal en muchos países-, y que preludian quizá nuevos intentos de desestabilización en el país andino. Finalmente, veremos qué pasa este domingo en las elecciones mexicanas, donde un amplio movimiento estudiantil ha cobrado un gran vigor frente a la posibilidad de que el PRI regrese al poder, que cuenta con todo el apoyo de la derecha, de los grandes conglomerados mediáticos.

Habrá que estar muy atentos y atentas a estas nuevas realidades, y denunciar sin paliativos, aquí y allá, los atropellos que se pretenden realizar contra la democracia en las Américas. Independientemente de las opiniones que nos merezcan unos gobiernos u otros, de su compromiso mayor o menor con la emancipación del continente, debemos tener una cosa clara: lo conseguido en esta última década no podemos permitir que se revierta, y debemos unir fuerzas para evitar regresiones antidemocráticas, por solidaridad internacionalista, y por la importancia de la región como fuente de inspiración para plantear propuestas que nos permitan vislumbrar otros caminos para superar esta crisis civilizatoria, que nos afecta a todas y todos. Nuestros caminos están profundamente entrelazados, su democracia es también la nuestra.

El legado del golpe hondureño aún amenaza la democracia en América Latina

[Mark Weisbrot](#)

Artículo original en [CEPR](#)

Han pasado 3 años desde que el ejército hondureño lanzó un ataque en la casa del Presidente Mel Zelaya, lo secuestró, y lo llevó fuera del país. La administración de Obama, según sus propias conversaciones con la prensa, estaba enterada del golpe de antemano. Pero el primer comunicado de la Casa Blanca —a diferencia de los del resto del mundo— no condenó el golpe. Eso le mandó el mensaje a la dictadura hondureña y la comunidad diplomática que el gobierno estadounidense apoyaba el golpe y haría lo posible para asegurar que fuera exitoso. Y eso fue exactamente lo que sucedió.

Al revés de Washington y los pocos aliados derechistas que le quedaban en el hemisferio, casi toda América Latina vio en el golpe una amenaza a la democracia en la región, y en efecto en a sus propios gobiernos.

—*Bastaría que alguien diera un golpe cívico ayudado por fuerzas militares, o simplemente cívico, y luego subsanar esto con una convocatoria a elecciones*— les dijo la presidenta argentina Cristina Fernández a los mandatarios suramericanos, —*con lo cual entonces las garantías democráticas serían una verdadera ficción*—. Fue por eso que Suramérica negó a reconocer los “comicios” hondureños celebrados bajo la dictadura seis meses después del golpe. Pero Washington quería que el régimen fuera legitimado. La administración de Obama impidió que la Organización de Estados Americanos (OEA) tomara medidas para restaurar la democracia antes de que las “elecciones” fueran llevadas al cabo.

—*Tenemos informes de inteligencia que dicen que después de Zelaya sigo yo*— dijo Presidente Correa después del golpe en Honduras. Esto resultó ser cierto: en septiembre de 2010, una rebelión por la policía tomó a Correa como rehén en un hospital, hasta ser liberado después de un tiroteo prolongado entre la policía y militares leales a Correa. Fue otro intento de golpe en contra de un presidente socialdemócrata.

La semana pasada, la advertencia de Cristina Fernández sobre un “golpe civil” resultó acertada con el golpe en Paraguay. El presidente izquierdista paraguayo, Fernando Lugo, fue destituido por el Congreso en un “proceso de juicio político” en el que recibió menos de 24 horas de aviso para preparar la defensa y sólo 2 horas para defenderse. Los 12 Ministros de Asuntos Exteriores de UNASUR, incluso los de Brasil y Argentina, viajaron a Paraguay el jueves para advertirles a los opositores derechistas que esta violación clara de debido proceso era además una violación de la cláusula democrática de la UNASUR. La mandataria brasileña Dilma Rousseff sugirió que el gobierno de los golpistas debiera ser echado tanto de la UNASUR como del MERCOSUR, el bloque comercial del Cono Sur.

Pero los derechistas de Paraguay, país que quedó bajo el poder de un sólo partido por 61 años hasta la elección de Lugo, estaban determinados a volver a su pasado ignominioso. Y sabían que tenían a por lo menos un aliado con que podían contar en el hemisferio.

—*En general, esto no lo hemos llamado un ‘golpe’ porque se siguieron los procesos*— dijo Victoria Nuland, la portavoz del Departamento del Estado de los Estados Unidos, el 26 de junio. Y, como si estuviera recordando al mundo de la estrategia de Washington respeto al golpe hondureño, agregó: —*Uds. saben que ellos deben tener elecciones en 2013, que tienen que avanzar. Entonces, creo que nos abstenemos de más comentarios hasta que veamos como salimos de la reunión en la OEA*—.

Por supuesto ella sabía que la reunión de la OEA no resolvería nada, porque en ese foro los Estados Unidos y sus aliados pueden bloquear cualquier iniciativa que no les gusta— como hicieron al principio de la semana pasada. La conclusión es obvia: cualquier facción derechista, ya sea militar o civil, que pueda derrocar a un gobierno izquierdista, aunque sea elegido democráticamente, puede contar con el apoyo del gobierno estadounidense. Ya que éste es el país más rico y poderoso del hemisferio y del mundo, este apoyo vale mucho.

Mientras tanto, desde el golpe de 2009 Honduras se ha transformado en una pesadilla, con el nivel de homicidio más alto del mundo. La represión política compara con los países más pésimos del hemisferio: periodistas, activistas opositores, campesinos luchando por reforma agraria y activistas LGBT han sido asesinados con impunidad. Esta semana 84 congresistas estadounidenses le enviaron a la Secretaria de Estado Hillary Clinton una carta [[PDF](#)] pidiendo acción por parte de Estados Unidos en contra de los asesinatos de activistas LBGT y de miembros de la comunidad en Honduras. En marzo, 94 congresistas le pidieron a ella que “suspendiera cualquier ayuda estadounidense al ejército y policía de Honduras, dado las acusaciones creíbles de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad.”

Hasta ahora la administración de Obama ha ignorado estas peticiones del Congreso, y la atención de la prensa internacional ha sido poca. Irónicamente, esto se debe no a la importancia de Honduras sino a su gran importancia: Estados Unidos mantiene una base militar en Honduras y preferiría guardar el país como su propiedad.

Pero el hemisferio y el mundo han cambiado. Estados Unidos ha perdido gran parte de su influencia en la inmensa mayoría de países de América durante la década pasada. Sólo es cosa de tiempo hasta que los países pobres como Honduras y Paraguay ganen sus derechos a la democracia y la autodeterminación.

Publicado originalmente en The Guardian Unlimited, 29 de junio, 2012

Tsunami geopolítico en el Cono Sur

Por Raúl Zibechi

La tarde del 22 junio cuando el Senado de Paraguay votó el “juicio político” al presidente Fernando Lugo, se disparaba la mayor crisis política que conoció el Mercosur en más de 20 años. Las fichas aún no terminaron de acomodarse en el tablero, pero es seguro que el temblor ha sido tan fuerte que con el paso del tiempo nada quedará en su lugar.

En Paraguay las fuerzas políticas y económicas más retrógradas han ganado espacios, abriendo la posibilidad de estrechar alianzas con Estados Unidos que gana un aliado en un lugar donde puede hacer mucho daño a Brasil. La sanción a Paraguay, adoptada tanto por el Mercosur como por la Unasur, permitió el ingreso de Venezuela al Mercosur que estaba pendiente desde 2006 por la negativa del parlamento de Paraguay a aprobar lo que ya habían decidido Brasil, Argentina y Uruguay.

China aprovechó el momento para dar un paso adelante en su relación con la región al proponer un tratado de libre comercio al Mercosur. Paraguay no sólo bloqueaba el ingreso de Venezuela sino que es uno de los pocos países del mundo que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, lo que revela el carácter de su dirigencia política.

Lección “pedagógica” a Paraguay

El conservador Folha de São Paulo fue el primer medio internacional en titular que el golpe de Paraguay es similar al realizado en Honduras en 2009. En Brasil, incluso los conservadores observan con preocupación los cambios que se están produciendo en la región.

La destitución de Lugo tomó por sorpresa al gobierno de Dilma Rousseff, cuyos principales ministros estaban pendientes de la cumbre Rio+20. El 21 de junio, cuando el parlamento de Asunción decidió que al día siguiente se realizaría el juicio político contra Lugo, Dilma decidió que la respuesta fuera colectiva y estuviera a cargo de la Unasur y del Mercosur. A las 19 horas el canciller Antonio Patriota partió rumbo a Paraguay junto a los cancilleres de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela [1].

Al día siguiente se sumaron los demás. Lo que escucharon y lo que vieron luego de entrevistarse con parlamentarios y dirigentes políticos paraguayos, quienes prácticamente se negaron a escuchar sus argumentos, los convenció de la necesidad de dar una “lección pedagógica” a la clase política de ese país [2].

El centro de investigaciones BASE Investigaciones Sociales sostiene que la derecha paraguaya es “una de las más retrógradas, reaccionarias y serviles de América Latina, producto del particular desarrollo capitalista en Paraguay y de su histórica vocación autoritaria” [3]. Además sostiene que la masacre de Curuguaty “fue un plan montado de antemano, implementado cuando pudieron juntar los votos necesarios en el Parlamento” [4].

Uno de los grandes virajes que hubo en Paraguay bajo la presidencia de Lugo, es que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que había sido un importante foco de resistencia a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), traicionó a sus bases y a su historia y se convirtió en un partido más al servicio de las elites empresariales corruptas vinculadas al contrabando, el narcotráfico y la apropiación ilegal de tierras.

La dictadura facilitó la fusión entre un empresariado ligado a negocios ilegales y el Partido Colorado, que fue el partido-Estado de Stroessner, que gobernó Paraguay durante 60 años ininterrumpidos (desde la guerra civil de 1947 hasta 2008 cuando gana Lugo) en alianza con los militares y gran parte del tiempo bajo el estado de sitio.

La tierra es el mejor ejemplo del tipo de elites que se crearon en Paraguay. Según la FAO, la concentración de la tierra es la más desigual del mundo ya que el 80% está en manos del dos por ciento de los propietarios [5]. La dictadura se sostuvo entregando tierras a militares, empresarios y miembros del Partido Colorado, que consigna la Comisión Verdad y Justicia en su informe final entregado en 2008 [6].

El informe establece que entre 1954 y 1989 se entregaron de modo ilegal 6,7 millones de hectáreas, a las que se deben sumar otro millón entregadas de forma irregular entre 1989 y 2003. A esas tierras el informe las denomina “tierras malhabidas” que suman el 32,7% de la superficie arable del país y el 20% de la superficie total de Paraguay [7].

Una parte considerable de esas tierras, sobre todo en los departamentos fronterizos, fueron entregadas a hacendados brasileños, los brasiguayos, que hoy detentan alrededor de 5 millones de hectáreas según el investigador Marcos Glauser [8]. En el departamento donde se realizó la masacre de Caraguaty, en Canindeyú, los brasiguayos poseen el 40% de la tierra y el 80% de los cultivos de soya [9].

Ese empresariado y esa derecha forzaron la destitución de Lugo, exigiendo mano dura contra los campesinos que ocupan tierras malhabidas para que sean usadas para la reforma agraria. Tanto el Mercosur como la Unasur decidieron en la cumbre de Mendoza, el 29 de junio, poner un freno a un modelo de “golpe constitucional” que se estrenó en Honduras en 2009 y prosiguió en Paraguay.

Es cierto, como ha sido denunciado por diversos medios, que la multinacional Monsanto presionaba para que se liberara el algodón transgénico, que otra multinacional, Rio Tinto Alcan, quiere instalarse en Paraguay aprovechando su energía abundante y barata, y que los Estados Unidos venían alentando la destitución de Lugo desde 2009 [10]. Pero estas presiones habrían fracasado si no existiera una clase política corrupta.

El Mercosur en su hora más difícil

Todos los gobiernos de la región, incluso los países gobernados por la derecha como Chile y Colombia, consiguieron tomar una decisión común: ambos organismos suspendieron a Paraguay hasta las elecciones de abril de 2013 y mostraron unanimidad y distancia de Washington aún en una situación compleja porque se trató de un golpe de Estado de nuevo tipo.

Ni la Unasur ni el Mercosur impulsaron sanciones económicas contra Paraguay. Esto se debe a dos cuestiones. Paraguay es un gran proveedor de energía a Brasil, de la represa de Itaipú, y a la Argentina, por la de Yacretá. Además, sus vecinos no quieren que Paraguay se retire de esas organizaciones ya que puede estar tentado a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y a instalar bases militares en su territorio.

Algo de eso insinuó el nuevo presidente Federico Franco cuando dijo que con las sanciones “terminó la tutela de los países vecinos”, y aseguró que ahora “Paraguay está liberado para tomar decisiones” [11]. Por eso Brasil logró convencer a Hugo Chávez para que no interrumpa el suministro de petróleo a Paraguay.

No será fácil que Paraguay renuncie a la región pues tiene una enorme dependencia de sus vecinos. El 55% de sus exportaciones van al Mercosur siendo Brasil su principal mercado, sobre todo soya, carnes, cereales y oleaginosas [12]. Siendo un país mediterráneo, toda su producción sale por los puertos brasileños y argentinos de los cuales tiene una total dependencia, así como de sus carreteras.

Sin embargo, el golpe en Paraguay no consigue disimular las dificultades del Mercosur, aquejado por la crisis mundial y el ascenso de China. Existe una fuerte disputa entre Argentina y Brasil y entre los dos pequeños (Uruguay y Paraguay) con los dos grandes del bloque. La alianza está paralizada porque lo que conviene a unos perjudica a los otros.

Expresión de las dificultades fue la renuncia del embajador Samuel Pinheiro Guimarães, Alto Representante General del Mercosur, en la reciente cumbre en Mendoza. En su carta-relatorio de despedida traza un lúcido análisis sobre la realidad actual del bloque.

Señala que la crisis económica en Europa y Estados Unidos y el ascenso de China generan un enorme flujo de capitales hacia el sur que “erosiona los vínculos comerciales intra-Mercosur que son el principal cimiento del proceso de integración” [13]. La desindustrialización se deriva de esas políticas y debe ser enfrentada utilizando los recursos de la exportación de commodities.

Pinheiro asegura que la Unasur “no puede ser la piedra fundamental para la construcción del bloque económico de América del Sur” porque Chile, Colombia y Perú firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, lo que imposibilita la construcción de políticas regionales de promoción del desarrollo.

Por eso cree que el bloque regional debe ser formado “a partir de la expansión gradual del Mercosur”, incluyendo a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam y Guyana. Los últimos deberán contar con condiciones de ingreso especiales por su bajo nivel de desarrollo y el interés político que tienen para la región.

Para avanzar, dice el embajador, el bloque debe aumentar de forma significativa la coordinación política y la cooperación económica. “La característica central del Mercosur son las asimetrías”, explica, que provocan tensiones políticas. Apuesta por una fuerte expansión de los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural para favorecer a los más pequeños, que hoy cuenta con apenas 100 millones de dólares anuales.

Quizá el momento más luminoso de su carta sea el párrafo 34: “En un mundo multipolar, en crisis, con grandes cambios de poder, no es del interés de ningún bloque o de ninguna gran potencia la constitución o el fortalecimiento de un nuevo bloque de Estados, en especial si son periféricos. Cualquier gran potencia considera más conveniente negociar acuerdos con Estados aislados, en especial si son países subdesarrollados, más débiles económica y políticamente” [14].

Sólo a los miembros del Mercosur les interesa su bloque. Sin embargo, cuando fue creado en 1991 no fue concebido como organismo para promover el desarrollo sino como unión aduanera para promover el libre comercio. La propuesta de Pinheiro consiste en que sea capaz de impulsar un desarrollo regional armonioso y equilibrado, eliminando las asimetrías y construyendo una legislación común de modo gradual.

Este viraje es necesario porque las respuestas de los países industrializados a la crisis son “una verdadera suspensión, en la práctica, de los acuerdos de la OMC negociados en la época de hegemonía del pensamiento neoliberal” [15].

Si el Mercosur no da estos pasos, “podrá sobrevivir pero siempre de modo claudicante y no se transformará en un bloque de países capaz de defender y promover sus intereses en este nuevo mundo que surgirá de las crisis que vivimos”. El diagnóstico hecho por uno de los más destacados intelectuales de Brasil, parece acertado. Los próximos años dirán si hay voluntad política para cambiar el rumbo.

China da un paso al frente

Wen Jiabao, primer ministro chino, visitaba la región cuando se producía el golpe en Paraguay. El momento álgido de su visita a Brasil, Uruguay y Argentina, fue la videoconferencia que mantuvo desde Buenos Aires el lunes 25 con Dilma Rousseff, Cristina Fernández y José Mujica.

Según la agencia china Xinhua, el primer ministro hizo tres propuestas: fortalecer la confianza mutua y la comunicación estratégica con el Mercosur, duplicar el comercio para 2016 llevándolo a 200.000 millones de dólares, además de las inversiones y la cooperación financiera y tecnológica, y fomentar las relaciones bilaterales en el campo de la educación y la cultura [16].

La propuesta de Wen Jiabao fue interpretada por sus interlocutores como lo que realmente es: una vasta alianza estratégica que incluye un tratado de libre comercio China-Mercosur. A destacar que se aprovechó que Paraguay estaba por ser suspendido del Mercosur, ya que no tiene relaciones con China. Al día siguiente realizó una importante disertación en la CEPAL, en Santiago de Chile.

Allí realizó la propuesta dirigida a América Latina y el Caribe consistente en “combatir el proteccionismo”, “profundizar la cooperación estratégica” y abrir nuevos mercados con el objetivo de que el intercambio comercial bilateral “supere los 400.000 millones de dólares en el próximo lustro” [17]. Propuso la creación de un fondo de cooperación al que China hará un aporte inicial de 5.000 millones de dólares y una línea de crédito del Banco de Desarrollo de China para la construcción de infraestructuras.

Además propuso una amplia cooperación agrícola y establecer un mecanismo de reserva alimentaria de emergencia de 500 mil toneladas destinado a contingencias naturales y ayuda alimentaria, incluyendo la instalación de centros de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología agrícolas.

La oferta china luce tentadora en momentos en que el Mercosur atraviesa enormes dificultades. La CEPAL elaboró un documento titulado “Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos globales” [18]. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL, señaló en el prólogo que la región está ante una oportunidad histórica para dar un salto en infraestructura, innovación y recursos humanos, o sea “traducir la renta de los recursos naturales en formas variadas de capital humano, físico e institucional”.

Para eso debe atraer inversión directa de China que le permita diversificar las exportaciones. De los más de 40 apartados que incluye el documento, uno debería ser especialmente atendido por los países de América del Sur: hacia 2030 dos tercios de la población de clase media vivirán en la región Asia-Pacífico frente a sólo el 21% que lo harán en Europa y América del Norte.

En consecuencia, la clase media asiática se transformará en “mercado clave para los alimentos, confecciones de mayor calidad, turismo, fármacos, servicios médicos, retail y artículos de lujo”, lo que permitirá que América Latina diversifique sus exportaciones y les sume valor agregado [19]. Agrega que la internacionalización del renminbi puede beneficiar a la región ya que China se convirtió en su segundo socio comercial.

Entre las conclusiones se destaca que el ascenso de China permite a la región sudamericana prolongar el ciclo favorable de términos de intercambio que vive desde 2003. “Si no se aprovecha bien el momento, podría acentuarse el proceso de reprimarización exportadora, estableciendo modalidades renovadas del vínculo centro-periferia”.

Para conseguirlo la CEPAL apunta la necesidad de establecer una “agenda regional concertada de prioridades”, que supere las iniciativas unilaterales. O sea, lo decisivo es lo que denomina como el “desafío interno”. En este punto decisivo, el análisis de Samuel Pinheiro y de la CEPAL coinciden plenamente. Sin embargo, la guerra comercial entre los miembros del Mercosur sigue siendo un factor de desestabilización.

Las divisiones a menudo escalan de la economía a la política. El ingreso de Venezuela decidido en la cumbre de Mendoza provoca reacciones encontradas. Según el canciller uruguayo Luis Almagro, Dilma presionó para que se tomara esa decisión que Mujica quería postergar porque no acordaba con las formas [20]. Marco Aurelio García, asesor de la presidenta de Brasil en cuestiones internacionales, afirma que la decisión se tomó por consenso y que el estilo de la diplomacia de su país no es presionar [21].

Este es el tipo de problemas al que alude Pinheiro: falta de confianza mutua, falta de visión estratégica, predominio de las cuestiones locales por sobre las generales y del corto plazo sobre el largo, incapacidad de comprender los cambios globales. Dicho en palabras del italiano Antonio Gramsci, es el predominio de la “pequeña política”. Lo que está en juego es demasiado importante y no todos parecen comprenderlo.

Notas

[1] “Dilma comanda reação para evitar queda do paraguayo”, Folha de São Paulo 22 de junio de 2012.

[2] “Brasil discute afastar Paraguai do Mercosul como punição por impeachment”, Folha de São Paulo, 24 de junio de 2012.

[3] “El porqué del golpe en Paraguay y los escenarios para el 2013”, BASE IS, 25 de junio de 2012.

[4] La masacre de Curuguaty fue un incidente entre policías y francotiradores infiltrados entre los campesinos que ocupaban una hacienda obtenida ilegalmente por Blas Riquelme, ex senador del Partido Colorado, en el que murieron 17 personas entre campesinos y policías. Es la primera vez en la historia de las miles de ocupaciones de tierras realizadas por los campesinos en que se producen muertos y el hecho fue usado para destituir a Lugo.

[5] BASE IS, Comunicado a la opinión pública, 21 de junio de 2012.

[6] La Comisión Verdad y Justicia comenzó a redactar su informe sobre la dictadura en 2004, bajo el gobierno del colorado Nicanor Duarte y estuvo presidida por monseñor Mario Melanio Medina.

[7] Comisión de Verdad y Justicia, Informe Final, Tierras Mal Habidas, tomo IV, Asunción, 2008, pp. 25 y 26.

[8] Marcos Glauser, Extranjerización del territorio paraguayo, Asunción, BASE IS, 2009.

[9] Idem pp. 31 y 32.

[10] Idilio Méndez Grimaldi, “Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo”, Rebelión, 21 de junio de 2012 y “La conspiración se instaló hace mucho”, Página 12, 29 de junio de 2012.

[11] “Paraguai ameaça procurar outros sócios se for suspenso do Mercosul”, France Presse, Asunción, 29 de junio de 2012.

[12] ABC, 26 de junio de 2012.

[13] Samuel Pinheiro Guimarães, Relatório ao Conselho de Ministros, Mercosur, junio 2012.

[14] Idem. p. 9.

[15] Idem. p. 14.

[16] Xinhua, Buenos Aires, 25 de junio de 2012.

[17] “Texto del discurso del primer ministro chino ante CEPAL”, Xinhua, Santiago, 26 de junio de 2012.

[18] CEPAL, Santiago, 2012.

[19] Idem. p. 16.

[20] <http://www.elobservador.com.uy/noti...>

[21] “Não fizemos pressão sobre nenhum país”, Folha de São Paulo, 2 de julho de 2012.

Paraguay (junio 2012)-Honduras (junio 2009)

De un golpe de Estado a otro

Por Eric Toussaint

A tres años de distancia se repite en Paraguay el mismo escenario de golpe de Estado practicado en Honduras, en junio de 2009. En los dos casos, un órgano del poder, que había quedado en manos de representantes de la clase dominante, destituye a un presidente elegido democráticamente. El golpe de Estado respeta las apariencias de legalidad. En un análisis redactado en 2009, el CADTM denunciaba el golpe de Estado de Honduras, las complicidades que los golpistas tenían en Washington. La última frase del artículo anunciaba lo que acaba de pasar en Paraguay: «El caso hondureño tiene el riesgo de ser una puerta de entrada a golpes de Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones estatales como el Parlamento o el Tribunal Supremo». [1]

Desde 2009, la gran prensa internacional concedió un sostén pasivo o activo a los golpistas hondureños y el diario Libération (Francia) está reproduciendo, en caliente, el mismo comportamiento. He aquí lo que publicó respecto al golpe de Estado en Paraguay: «El presidente paraguayo Fernando Lugo ha sido oficialmente despojado de sus funciones este viernes, culminando así un proceso de destitución efectuado en pocas horas en el Senado, como comprobó un periodista de AFP.» La frase siguiente nos muestra claramente la opinión del diario: «Elegido en 2008 con el apoyo de una amplia coalición de una veintena de partidos, Fernando Lugo había perdido en forma progresiva una parte esencial de sus partidarios en el Parlamento después de una serie de desacuerdos políticos.» [2] En realidad, Fernando Lugo, que fue elegido presidente por sufragio universal con un fuerte apoyo popular, nunca tuvo una verdadera mayoría parlamentaria para poder llevar a cabo satisfactoriamente su proyecto puesto que los dos partidos tradicionales de la derecha dominaban las instituciones parlamentarias —Partido Liberal y Partido Colorado. Este último apoyó la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989, y dominó el gobierno y el Estado paraguayo durante 62 años—. En consecuencia, Lugo tuvo que negociar el respaldo del Partido Liberal, del que una parte importante de sus dirigentes se habían opuesto a la dictadura de Stroessner. [3] Por lo tanto, contrariamente a lo que afirma Libération, Lugo no perdió lo esencial de sus partidarios en el Parlamento. Éstos, propiamente hablando, eran muy pocos y se mantuvieron a su lado. Su relación con Domingo Laino, [4] un dirigente histórico del Partido Liberal (por su oposición radical al régimen de Stroessner), y sus partidarios incluso se ha reforzado. Por el contrario, la dirección del Partido Liberal al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, que acaba de tomar el poder, sólo sostuvo a Lugo como la cuerda que sostiene a un ahorcado. Nunca formó parte de los partidarios de Lugo. El Partido Liberal era un aliado que bloqueaba todas las tentativas de realizar las profundas reformas sociales y económicas que el país necesita. A pesar de ese bloqueo, las realizaciones sociales del gobierno Lugo, aunque limitadas, fueron innegables y la popularidad del presidente es bien real. Desde el comienzo de su mandato, el vicepresidente Franco multiplicó sus críticas contra el presidente desconociendo el compromiso político que lo ligaba. Ahora, acaba de acceder a la presidencia gracias al sostén de la oligarquía que mantuvo el control de las instituciones parlamentarias, debido a décadas de dominación política en un país donde el clientelismo tiene una función clave. Por otra parte, los disidentes del Partido Liberal, Domingo Laino y el senador liberal Luís Alberto Wagner se opusieron el 22 de junio de 2012 a la decisión tomada por el comité político de su partido de destituir al presidente Lugo. Denunciaron la falta de respeto a las normas internas del Partido Liberal y afirmaron que semejante decisión sólo podía ser tomada por el directorio del partido, una instancia superior y más amplia que su comité político. [5]

Honduras 2009

Tres años después del golpe de Estado en Honduras, presentamos como recordatorio de los acontecimientos y con el fin de ayudar a la comprensión de las similitudes entre los golpes de Estado hondureño y paraguayo un largo extracto de un artículo publicado en octubre de 2009, en nuestra web www.cadtm.org [6]:

«Cuando el presidente constitucional Manuel Zelaya fue destituido por los militares el 28 de junio, la gran mayoría de los

media declararon, deformando totalmente la verdad, que los militares habían reaccionado a la voluntad del presidente de modificar la Constitución con el fin de mantenerse en el poder. Muchos medios agregaban que así seguía el ejemplo de Hugo Chávez, presentado como un dirigente populista autoritario. En realidad, Manuel Zelaya sólo proponía a sus conciudadanos pronunciarse a favor de la organización de elecciones generales para una Asamblea Constituyente, que habría representado un verdadero avance democrático en ese país. Este hecho está muy bien explicado por Cécile Lamarque y Jérôme Duval, a la vuelta de una misión del CADTM a Honduras: «El golpe de Estado tuvo lugar el mismo día en el que Manuel Zelaya organizaba la «consulta», de carácter no vinculante, donde se preguntaba a los hondureños si deseaban, o no, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, después de las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2009. La pregunta era la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que en las elecciones generales de noviembre 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva Constitución política? Si esta consulta hubiera recogido una mayoría de «sí», el presidente habría sometido un decreto a la aprobación del Congreso para que, el 29 noviembre, los hondureños se pronunciaran formalmente sobre la convocatoria de una constituyente, en una «cuarta urna» (las tres primeras estaban reservadas para la elección de presidente, de diputados y de alcaldes, respectivamente). Para darle un matiz de legalidad al golpe de Estado, el Congreso y el Tribunal Supremo, aliados con el golpe, decidieron que la consulta era ilegal y dictaminaron que el presidente Zelaya había «violado la Constitución» al intentar modificarla «para poder pretender un nuevo mandato», como un «aprendiz de dictador chavista». Sin embargo, Manuel Zelaya no buscaba, por la vía de esta consulta, renovar su mandato presidencial en las próximas elecciones legislativas, ya que éstas se realizarían en el marco de la actual Constitución, que prevé mandatos presidenciales de cuatro años no renovables. Por lo tanto, Zelaya no podía ser candidato a su propia sucesión.» [7]

»Mientras que los movimientos populares de oposición al golpe de Estado multiplicaron las huelgas y manifestaciones en julio, agosto y septiembre, los grandes medios periodísticos les dedicaron apenas unas líneas. Las pocas veces que los grandes diarios dedican un artículo de fondo a la situación en Honduras, continúan practicando una política denigratoria con respecto al presidente constitucional, en el caso en que no presenten directamente a la acción de los militares como un golpe militar democrático. Por ejemplo, The Wall Street Journal decía en su editorial del 1 de julio de 2009: «el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático». El editorial agregaba que «las autoridades legislativas y judiciales permanecieron intactas» tras la acción militar. Por otra parte, y de forma más matizada, el conocidísimo diario francés Le Monde participó también en esta campaña. He aquí un ejemplo: El 12 de septiembre de 2009, Jean-Michel Caroit, su enviado especial en Honduras, citó las palabras de una francesa expatriada en ese país y a continuación agregó la mentira sistemáticamente repetida sobre las malas intenciones atribuidas a Manuel Zelaya. «Para los hondureños el retorno de Zelaya es inaceptable ya que significaría 20 años de dictadura a la [Hugo] Chávez», exclamaba Marianne Cadario, refiriéndose al presidente de Venezuela, quien —como su aliado Manuel Zelaya pretendía hacerlo— modifico la Constitución para poder ser reelegido. Madame Cadario, una francesa instalada en Honduras desde hace 30 años, dice estar «súper asombrada por la reacción de la comunidad internacional», que ha condenado el golpe.» [8] El tono de diarios como Le Monde y Libération comenzó a cambiar a finales de septiembre, después de que los golpistas subieran algunos grados en la represión. Dicho esto, Libération merece un premio por la utilización de eufemismos. En efecto, el 28 de septiembre de 2009 (justamente tres meses después del golpe), subtitulaba con «Perfume de dictadura» (subrayado por Toussaint) un párrafo en el que se explicaba que el gobierno golpista había decretado: «la prohibición de “toda reunión pública no autorizada”, detención de “cualquier persona que ponga en peligro su vida o la de los demás”, “evacuación” de locales ocupados por manifestantes e interferencias de “la emisión por cualquier medio de los programas que traten de alterar la paz”». [9], [10]

El régimen surgido del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 se benefició de la complacencia incluso del sostén activo del gobierno de Obama. El CADTM informó de la resistencia del pueblo hondureño y analizó la actitud de Washington que significaba incitar a otros candidatos golpistas en América Latina. He aquí lo que se publicó en la web del CADTM en diciembre de 2009:

«Mientras que el presidente Manuel Zelaya, que había entrado clandestinamente en su país el 21 de septiembre de 2009, encontró refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, la capital hondureña, los golpistas continuaban reprimiendo violentamente las manifestaciones de los partidarios del presidente constitucional y decretaron, el 27 de septiembre, un estado de sitio de 45 días de duración. [11]. Hubo un comentario del número dos de Washington en la OEA, Lewis Amslem: «el retorno de Zelaya es irresponsable». [12] Por su parte, Hillary Clinton no condenó el prolongado toque de queda. El acuerdo al que se llegó el 30 de octubre de 2009, bajo los auspicios de Washington, entre los representantes de

Manuel Zelaya y los de Roberto Micheletti estipulaba expresamente que las partes se comprometían a no hacer un llamamiento directo o indirecto a la convocatoria de una asamblea constituyente o a cualquier otra consulta popular (punto 2 del acuerdo). Además, no preveía explícitamente el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia del país para terminar su mandato. Roberto Micheletti y sus partidarios habían decidido no devolver la presidencia a Zelaya quien, en consecuencia, pidió a la población que no participase en las elecciones generales previstas para el 28 de noviembre de 2009. El principal candidato de la izquierda a la presidencia, Carlos Reyes, así como una centena más de candidatos de diferentes partidos (entre los cuales un sector del Partido Liberal), [13] decidieron por lo tanto retirar sus candidaturas. El 10 de noviembre de 2009, Washington anunció que reconocía el resultado de las elecciones. A pesar de que en la víspera de las elecciones las organizaciones de defensa de derechos humanos habían contabilizado más de 20 oponentes políticos asesinados desde el golpe de Estado, así como 211 heridos durante las acciones de represión, cerca de 2.000 detenciones ilegales, dos tentativas de secuestro y 114 prisioneros políticos acusados de sedición. Los medios de comunicación opuestos al golpe fueron cerrados o acosados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), [14] los países miembros del Grupo de Río y del ALBA habían decidido no enviar observadores. Los cálculos del porcentaje de electores que habrían participado en el escrutinio oscilan según las fuentes. Pero seguramente no se llegó a la mitad del padrón electoral. A pesar de ello, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Nelly, vio las elecciones como «un necesario e importante paso adelante». [15] Washington reconoció la elección a la presidencia de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, un representante duro de la oligarquía, de los terratenientes y de la derecha que organizó el golpe de Estado. El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, declaró que las elecciones habían constituido una «gran celebración de la democracia» y afirmó que los Estados Unidos trabajarían con Porfirio Lobo, de sobrenombre Pepe: «Pepe Lobo es un hombre de una gran experiencia política», indicó a la radio HRN. «Yo le deseo buena suerte y Estados Unidos trabajará con el presidente para el bien de nuestro país...Nuestras relaciones serán muy fuertes». Respaldo a un proceso salido de un golpe de Estado y actuar a favor del reconocimiento internacional de las autoridades que lo perpetraron y de las que surgieron del mismo, da aliento a los candidatos golpistas que se colocan políticamente en el campo estadounidense.» [16]

Prosiguiendo el análisis, en enero de 2010, en la web del CADTM, se podía leer la descripción del golpe de Estado en preparación en Paraguay, golpe que finalmente tuvo lugar el 22 de junio de 2012.

«En el caso de Paraguay existe una parte de la derecha que retomó la ofensiva. En diciembre de 2009, el senador liberal Alfredo Luís Jaeggli hizo un llamamiento al derrocamiento del presidente Fernando Lugo que acusa, como se hizo con Manuel Zelaya, de imponer un modelo chavista del «socialismo del siglo XXI». Jaeggli, cuyo partido constituye el principal «apoyo» parlamentario del gobierno, afirmaba siguiendo la marcha de los acontecimientos que el golpe de Estado realizado en Honduras no había sido tal: el derrocamiento de Manuel Zelaya y la acción llevada a cabo desde ese momento por el régimen de facto serían perfectamente legales. [17] Este senador incluso pide al parlamento paraguayo que intente un proceso político contra Lugo con el objetivo de destituirlo y reemplazarlo por el vicepresidente de la república, el liberal de derecha Federico Franco. El senador Jaeggli reprochaba a Lugo de no tomar el ejemplo de los países que habían tenido éxito en la reforma económica como Chile, con los cambios que había comenzado Pinochet, y la Argentina de Carlos Menem. Evidentemente, el caso hondureño tiene el riesgo de ser una puerta de entrada a golpes de Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones estatales como el Parlamento o el Tribunal Supremo» [18].

El 22 de junio de 2012, luego de un proceso expeditivo, el Senado paraguayo controlado por la oligarquía descontenta por las políticas de Fernando Lugo destituyó al presidente elegido democráticamente por sufragio universal en 2008. El 23 de junio de 2012, un amplio frente de la resistencia se comenzó a organizar para obtener el restablecimiento de la democracia. El 24 de junio, siete países latinoamericanos retiraron o llamaron a sus embajadores en Paraguay (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador y México). Cinco anunciaron que no reconocían al nuevo gobierno: Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. El MERCOSUR, del que la economía paraguaya tiene una fuerte dependencia por sus intercambios comerciales, decidió no invitar al nuevo régimen como representante de su país en la reunión que se celebrará en Mendoza, Argentina, el 29 de junio de 2012. En Paraguay la movilización popular en defensa de la democracia se está organizando. Es importante que se pueda respaldar sobre un máximo de apoyo internacional.

En Honduras, pasaron tres años desde el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Zelaya y contra el pueblo hondureño que lo había elegido. El país está hundido en una crisis sin precedentes. La violencia ha aumentado considerablemente contra aquellas u aquellos que resisten para defender las libertades y los derechos fundamentales del pueblo y para denunciar la orientación ultraliberal del gobierno de Porfirio Lobo, a sueldo de la oligarquía y de las transnacionales cómplices del golpe. Los sindicalistas, militantes asociativos y de derechos humanos, feministas,

homosexuales, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, periodistas de oposición, etc. sufren presiones, intimidaciones, acosos y agresiones —en el caso de que no caigan bajo las balas—, por el poder del Estado pero también por parte de grupos paramilitares y de milicias privadas que actúan con total impunidad. En la región de Aguán, la represión continúa contra las comunidades campesinas en el marco del conflicto agrario que los opone a los grandes terratenientes. Según Reporteros sin Fronteras, más de 40 abogados perdieron la vida en estos tres años por haber defendido a víctimas de abusos policiales y del ejército, y 28 periodistas fueron asesinados en el transcurso de la última década, de los que 23 lo fueron después del golpe de Estado. [19] Para el 28 de junio de 2012, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) organiza una movilización nacional con ocasión de tercer aniversario de ese régimen funesto. *(Traducido por Griselda Pinero)*

Notas

- [1] Véase el artículo en inglés: Eric Toussaint, “The U.S. and its unruly Latin American ’backyard’”, 26 de enero de 2010 “Clearly, Honduras can easily become a dangerous precedent as it opens the door to military coups condoned by some state institutions, such as the parliament or the Supreme Court.” <http://www.cadtm.org/The-U-S-and-it...>
- [2] <http://www.liberation.fr/depeches/2...>
- [3] Lugo, que no pertenecía a ningún partido político, consiguió reunir alrededor de su candidatura a un amplio espectro de partidos y movimientos sociales, reagrupados en el seno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una coalición que va desde el Partido Liberal Radical Auténtico hasta grupos de izquierda más radicales.
- [4] <http://es.wikipedia.org/wiki/Doming...> Domingo Laino , nacido en 1935, luchó contra la dictadura de Stroessner y por ello fue expulsado del país. Estuvo en el exilio entre 1982 y 1987. Después, fue varias veces el candidato liberal a la presidencia de Paraguay (obtuvo el 32,1 % de los votos en 1993 y el 42, 6 % en 1998). Su último mandato de senador lo realizó en el periodo legislativo 2003-2008. En 2010. fue nombrado por el presidente Lugo administrador de la empresa pública Itaipú.
- [5] <http://www.abc.com.py/nacionales/li...> Véase también: <http://www.youtube.com/watch?v=WgTZ...>
- [6] Véase Eric Toussaint «Venezuela, Honduras, Perú, Ecuador : “pequeños” olvidos y “grandes” mentiras <http://www.cadtm.org/Venezuela-Hond...>
- [7] Cécile Lamarque y Jérôme Duval, «Honduras: Pourquoi le coup d’État?», 17 de septiembre de 2009, www.cadtm.org/Honduras-Pourq...
- [8] Jean-Michel Caroit, «Au Honduras, la campagne électorale s’ouvre dans un climat de haine», Le Monde, p. 8, sábado, 12 de septiembre de 2009.
- [9] <http://www.liberation.fr/monde/0101...>
- [10] Fin del extracto del artículo de Eric Toussaint «Venezuela, Honduras, Perú, Ecuador: “pequeños” olvidos et “grandes” mentiras» 5 de octubre de 2009 <http://www.cadtm.org/Venezuela-Hond...>
- [11] El ejército hondureño tomó el control de los locales de la radio Globo el lunes 28 de septiembre de 2009 al alba y puso fin a las emisiones televisadas del Canal 36, la única cadena que difundía informaciones desfavorables a los golpistas.
- [12] Lewis Amsalem, representante permanente adjunto de Estados Unidos en la OEA, fue acusado por organizaciones de defensa de los derechos humanos por rechazar asistencia y por difamación respecto a su compatriota Dianna Ortiz, una religiosa progresista estadounidense de la orden de las Ursulinas, que fue torturada y violada varias veces por elementos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 1989. En esa época Amsalem trabajaba en la embajada de Estados Unidos en la capital de Guatemala, como funcionario encargado de los derechos humanos. <http://www.kaosenlared.net/noticia/...>
- [13] Véanse los análisis de Maurice Lemoine: <http://www.monde-diplomatique.fr/ca...>
- [14] Creada en mayo de 2008, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) agrupa a 12 países de América del Sur, que representan 388 millones de habitantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela
- [15] Citado por AFP, el 30 de noviembre de 2009: <http://www.easybourse.com/bourse/ac...>
- [16] Véase Eric Toussaint «Du coup d’Etat au Honduras aux sept bases US en Colombie: la montée de l’agressivité de Washington», 7 de diciembre de 2009, <http://www.cadtm.org/Du-coup-d-Etat...>
- [17] Jaeggli declaró en una radio pública argentina: «El presidente hondureño asumió la presidencia con un mandato liberal, pero lo traicionó y se alistó en el socialismo del siglo XXI. Lo que pasó en Honduras [Jaeggli se refiere claramente al golpe de Estado del 28 de junio de 2009], para mí, y me excuso, es totalmente legal». La versión audio de la entrevista está disponible en Internet <http://www.radionacional.com.ar/aud...>
- [18] Eric Toussaint, “The U.S. and its unruly Latin American ’backyard’”, 26 de enero de 2010 <http://www.cadtm.org/The-U-S-and-it...>
- [19] <http://fr.rsf.org/honduras-la-fidh-...>

Un golpe dirigido a la región a través de Paraguay

Por Abel Irala

La masacre de Curuguaty el pasado 15 junio pasado ha sido el inicio de un sombrío plan de desestabilización a nivel nacional y regional, impulsado por sectores de los partidos tradicionales de derecha. Las primeras víctimas fatales de este plan fueron seis policías del GEO (Grupo Especializado de Operaciones) y once campesinos, aunque en el caso de los campesinos lo más probable es que nunca se sepa con exactitud el número de bajas que se dio en la balacera ya que pobladores de la zona aseguran que algunos de los cuerpos asesinados por la policía se hicieron desaparecer.

El objetivo final de lo acontecido en Curuguaty quizá no era precisamente el juicio político a Lugo, pero sí crear un ambiente de suma violencia, debilitar al gobierno, preparar el terreno propicio para reabrir la política represiva contra los movimientos sociales de la mano del Ministerio del Interior y el Poder Judicial -con el asesoramiento colombiano-, además de garantizar en estos últimos meses que le tocaba gobernar a Lugo, el giro del gobierno para que retome una política aún más represiva de la que tuvo a sus inicios.

Con la amenaza del juicio político la derecha tendría el control sobre las acciones del Ejecutivo, como ya lo venía haciendo prácticamente desde el año 2008 en que asumió Fernando Lugo. Con esto se habría logrado por lo menos dos objetivos: uno de carácter nacional y electoral que consistiría en debilitar el Frente Guazú y fraccionar a los partidos de izquierda, alejar al gobierno de Fernando Lugo del apoyo popular con miras a las elecciones próximas del 2013, deslegitimar sus acciones y asediarlo para que responda exclusivamente a los intereses económicos y políticos de la derecha paraguaya aliada con el capital nacional e internacional.

El segundo objetivo sería de carácter imperial. En este punto es preciso tener en cuenta que nos encontramos en un momento en donde el Pentágono desarrolla una política de profundización y expansión de su presencia militar en la región. Con mayor fuerza y agresividad en Centroamérica y Colombia, como parte de la expansión hacia el Cono Sur, en el mes de abril se inauguraba en Chile un centro de entrenamiento militar del Comando Sur y en el Chaco argentino se intentó instalar una base militar disfrazada de un centro de ayuda humanitaria la cual fue rechazada por los movimientos sociales y luego contó con el aval del gobierno argentino para la no concreción de la mencionada base. Por lo tanto, el país más apto y cercano para mudar la base es Paraguay, como plus ya cuenta con una en Mariscal Estigarribia, Chaco, esperando ser reactivada. Un clima de violencia y fragilidad democrática facilitaría su reactivación con la explicación de que colaboraría en la restitución del orden democrático, la seguridad y la lucha contra el terrorismo, etc.

De hecho, desde el año pasado entre los representantes de Washington y el Congreso paraguayo se vienen retomando las conversaciones para ello. Los hechos violentos y la aparición de una supuesta guerrilla en Paraguay a través del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) son algunos de los condimentos necesarios para lograr una mayor injerencia de los Estados Unidos, no con la mira puesta precisamente en Paraguay, sino en la región, extender el conflicto tipo Honduras al Cono Sur lo cual le permita explayar su política militarista, introducir una palanca de contrariedad en la UNASUR y debilitar al bloque que cuestiona el imperialismo norteamericano. Dado los hechos de Curuguaty, la Unión de Gremios del Paraguay (UGP) exigió el juicio político a Lugo; no es raro ni la primera vez que los gremios de la derecha realicen este tipo de declaraciones, sin embargo los diferentes partidos políticos de derecha no estaban tan seguros de enjuiciarlo y pedían unánimemente la destitución del entonces Ministro del Interior, Carlos Filizzola, pedido que no tardó en ser concedido por el presidente Lugo. Todo esto cambió cuando Fernando Lugo anunció la constitución de una Comisión para investigar los hechos ocurridos en Curuguaty.

En paralelo, corrían las versiones de que esto había sido un montaje de algunos sectores del poder y la hipótesis de que tanto los policías como campesinos fueron llevados a una muerte segura iba cobrando fuerza. Esa reciente comisión habría logrado descubrir aspectos que ya sabemos que la fiscalía y el poder judicial no lo harían, ni lo harán. Pudo haber confirmado esas versiones que aseguran que la matanza que se dio en el departamento de Canindeyú fue parte de una conspiración con participación de ciertos sectores conservadores y de derecha. Anunciada la Comisión, casi

instantáneamente el pre candidato a presidenciable por el Partido Colorado, Horacio Cartes, el político con mayor poder económico y sindicado como una de las personas clave de la mafia y el narcotráfico, fue el primero en anunciar que su partido impulsaría el juicio político a Fernando Lugo. Logró consenso en la cúpula partidaria y así fue, los liberales hicieron lo mismo casi con la misma rapidez; a pesar de las fuertes fracciones en las que se encontraban los partidos de derecha como nunca en tan poco tiempo cerraron filas, acuerdos y se congregaron alrededor del “sí al juicio político”. Se sumaron los otros partidos, UNACE y Patria Querida, con una convicción tal de llevar esto hasta las últimas consecuencias, como si existiera una fuerza externa que los apuntalaba en las decisiones que iban a tomar y que, de tratarse de un plan, era demasiado perfecto para creer que un sector de la derecha paraguaya lo haya pergeñado sin asesoramiento de expertos en desestabilización.

La gente salió a las plazas frente al Congreso Nacional, se sabía que sólo una gran fuerza movilizada en todo el país podría parar el juicio político que de juicio tuvo poco o nada. Los cancilleres de la UNASUR llegaron al país para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo y ser testigos de un juicio que terminó siendo un Golpe de Estado parlamentario. Los obispos pedían a Lugo que presente su renuncia, al tiempo el mismo pedido lo realizó la embajada de los Estados Unidos. Algunos dirigentes de izquierda creían ingenuamente que con negociaciones se podría revertir la posición de algunos parlamentarios y se avocaron a esa tarea que no tuvo el mínimo efecto sobre la decisión que ya estaba tomada, destituir al Presidente de la República.

La movilización popular no alcanzó a desarrollarse a lo largo del país y no tuvo el número ni la fuerza suficiente para frenar el golpe parlamentario que terminó de consumarse en mucho menos de 48 horas; parte de esa misma derecha con la que Lugo y su equipo había gobernado en los últimos años, se despojaba de todo rasgo de progresismo y asumía su entera hipocresía para derrocarlo. Los parlamentarios escucharon a la defensa de Lugo, esta rebatió todos los argumentos presentados en su contra, se tomaron cinco minutos de cuarto intermedio para luego leer la sentencia que encontraba “culpable” al presidente y procedieron a su destitución. En su reemplazo fue nombrado su vicepresidente Federico Franco del Partido Liberal. Ya al mando del ejecutivo, cabe destacar dos de las primeras decisiones de Franco: una fue dejar sin efecto la comisión que investigaría los hechos acaecidos en Curuguaty y dos el nombramiento del nuevo ministro del interior Carmelo Caballero, hombre que meses atrás se desempeñaba como vice ministro del interior del gobierno de Lugo. Caballero junto con Rafael Filizzola (ex ministro del interior) implementó una política de seguridad con el pleno asesoramiento del gobierno Colombiano, impulsaron fuertes operativos militares y policiales en diferentes departamentos del país en contra de las organizaciones campesinas y han estado a cargo del primer estado de excepción en el año 2010 en cinco departamentos del país, con la excusa de atrapar a los integrantes del EPP, pero sin lograr ese objetivo.

Con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos se equiparon y montaron un centro de operaciones especiales en Huguá Nandú, departamento de Concepción y se inició la formación de un nuevo grupo de élite de la policía nacional denominado COR (Comando de Operaciones Rurales), por lo tanto no es difícil imaginar qué tipo de acciones tomará Caballero como encargado de la seguridad del país. Lo acontecido en Paraguay arroja varias enseñanzas para la izquierda y el movimiento popular, pero no obstante es necesario entender que el golpe está siendo encaminado en contra del proceso democrático del país y contra la integración regional. El golpe no acaba con la destitución de Lugo, se prolongará sobre el movimiento social paraguayo y sobre la integración de los gobiernos regionales.

Por ahora se visualizan tres alternativas para las fuerzas populares en Paraguay: a) una izquierda que se disponga a unificarse y fortalecerse electoralmente, superar las contradicciones internas, para una buena participación en las próximas elecciones generales, b) se retome la organización y movilización en todo el país, con amplia participación de las bases, promoviendo ocupaciones de tierras, huelgas y

manifestaciones pacíficas como forma de resistencia y desconociendo la figura de Federico Franco como presidente o c) el desarrollo de una lucha que contemple ambas estrategias, en base a un análisis de correlación de fuerzas, que fortalezca un proyecto electoral sin abandonar la acción directa, las movilizaciones, conquistando el apoyo de todos los sectores progresistas a nivel nacional e internacional.

Una barrera contra el golpismo

Por Ernesto Espeche

Los jefes y jefas de Estado de Sudamérica pisaron suelo mendocino -en el oeste cordillerano de la República Argentina- con la certeza de arribar a los consensos que exigen las urgencias regionales.

Un largo camino recorrido en conjunto permitió que los debates descansaran sobre un piso muy alto de acuerdos: la ilegitimidad del Golpe de Estado en Paraguay no estuvo en discusión. La cuestión a resolver era, entonces, la intensidad y la oportunidad de la respuesta.

La Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se realizaron entre el 28 y el 29 de junio, una semana después de la destitución de Fernando Lugo, las asonadas policiales contra Evo Morales y las maniobras de desabastecimiento en Argentina.

Ese marco requirió de un complejo trazado estratégico: las sanciones aplicadas al entuerto golpista debían ser un mecanismo para establecer las condiciones políticas que permitan reubicar a Paraguay en el concierto de la integración latinoamericana. Por ello se consensuó la suspensión del país de todos los órganos de Mercosur y la Unasur hasta tanto se realicen elecciones libres, limpias y sin proscripciones.

La resolución trasciende el mero repudio discursivo y supera los límites de la formalidad institucional. Se trata, en el fondo, de una señal cuya firmeza radica en su contribución al logro de un objetivo superador: evitar que la reacción conservadora -a la defensiva y tirando manotazos- recupere espacio político en la región luego de casi una década de ofensiva democrática, popular y progresista.

Como parte de ese objetivo superador, las sanciones económicas quedaron descartadas desde un comienzo. Así lo expresó Cristina Fernández, como posición de su gobierno, al abrir las deliberaciones; y así también lo entendieron los cancilleres que -horas antes- elaboraron un borrador.

¿Qué impidió un posible bloqueo a Paraguay? A priori, esa tesis aparecía como la respuesta más sólida para aislar al gobierno ilegítimo, forzar su repliegue e impedir que otro golpe se sustancie en la región. Los antecedentes acumulados en materia de intervención política frente a maniobras desestabilizadoras le aportaron al bloque experiencia resolutive en estas lidés. Los hechos ocurridos en Honduras durante 2009 marcaron un punto de inflexión a partir del cual quedaba demostrada la factibilidad de los nuevos modelos destituyentes. En contraste, los intentos golpistas en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010) fracasaron al calor de una férrea resistencia popular y -en los últimos dos casos- gracias a una rápida reacción de la Unasur.

Esa empírea le aportó sustancia política al sostenimiento de los procesos transformadores en la región: una de las facetas de la integración es, sin dudas, la defensa de los gobiernos populares. Por ello, los matices ideológicos no impidieron a los mandatarios visualizar con agudeza política un asunto central: no debían afectarse las condiciones materiales de vida del pueblo paraguayo, principal víctima del golpe y -a la vez- sujeto indispensable para una salida no cosmética hacia la institucionalidad democrática.

Además, una condena económica aportaría una nueva excusa a los golpistas para victimizarse ante la sociedad. De hecho, los enviados especiales del diario ABC -en sintonía con los intereses destituyentes- instalaron la hipótesis de una reedición de la Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay). De acuerdo al planteo editorial del periódico de Asunción, estaríamos ante una versión agiornada de la ignominiosa ofensiva desatada contra el pueblo guaraní entre 1865 y 1970. El triunfo de esas interpretaciones en el ideario popular paraguayo sería un fuerte golpe para la articulación de una fuerza progresista capaz de imponerse en las próximas elecciones.

El propio Lugo, quien hasta último momento evaluó viajar a Mendoza, se pronunció en contra de una posible sanción económica contra su país. Entendió, al igual que los mandatarios de la región, que la condena debe recaer sobre la

dirigencia política paraguaya y no sobre el pueblo.

Argentina, Brasil y Uruguay acordaron, además, integrar a Venezuela al Mercosur como miembro pleno. La prensa de derecha en toda la región leyó este punto y la suspensión de Paraguay como parte de un mismo movimiento. En rigor, la membresía de Venezuela estaba bloqueada por el parlamento paraguayo, el mismo que montó una grotesca simulación de juicio político contra Lugo. Sin embargo, se trata de dos aspectos que los cancilleres desvincularon en cada intervención pública con un argumento de hierro: el pedido de ingreso del país caribeño al Mercosur tiene larga data y sus aspectos formales se resolvieron hace un largo tiempo en los países que hoy integran el bloque.

Hugo Chávez, por su parte, no participó del cónclave. Las posiciones de Venezuela estuvieron representadas por el canciller Nicolás Maduro. De todos modos, el líder bolivariano se expresó con rapidez en relación a lo dispuesto por sus pares.

En esa misma línea, el presidente uruguayo José Mujica abogó por la incorporación de más países sudamericanos al Mercosur. Su petición no es casual: el predominio económico de Argentina y Brasil generó, a lo largo de la historia del bloque, algunos planteos disidentes por parte de uruguayos y paraguayos.

El ingreso de Venezuela opera, además, en un sentido simbólico como un elemento reordenador de las relaciones de fuerza: se trata de una economía con fuerte peso en materia energética que obligará a nuevos consensos. Sus definiciones políticas están en sintonía con los ejes programáticos de los países del Cono Sur; sin embargo, se ubica en un plano ideológico cuya radicalidad levantará el techo de las definiciones antiimperialistas.

La presidencia pro t mpore del Mercosur qued  en manos de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Hugo Ch vez se comunic  con ella de inmediato para felicitarla y compromet  su presencia el 31 de julio en R o de Janeiro, fecha y lugar estipulados para la formalizaci n del ingreso de su pa s al Mercosur. Ollanta Humala, por su parte, asumi  la presidencia de la Unasur, hasta ese momento en poder del destituido Fernando Lugo.

En paralelo, un conjunto de organizaciones sociales de Sudam rica organizaron la Cumbre Social de los Pueblos. Durante tres jornadas, miles de participantes debatieron en comisiones e intercambiaron experiencias en torno a la relaci n de los actores sociales con los Estados transformadores. El encuentro cont , adem s, con la presencia de distintos funcionarios de los pa ses de la regi n: un s ntoma, apenas, de los cambios que se experimentan en nuestros pa ses desde hace a os.

Sin cocteles ni democracia

Por Natalia Brite

En la XLIII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), y la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –celebradas ambas en Mendoza, provincia del oeste argentino- los jefes y jefas de Estado decidieron suspender a Paraguay de sendos organismos.

Según lo que informó el canciller argentino Héctor Timerman, la resolución que estableció la suspensión de la República del Paraguay del derecho de participar de los órganos también señala que cesará cuando se verifique el pleno reestablecimiento del orden democrático mediante elecciones universales y libres, previstas, en principio, para el 21 de abril de 2013.

Además, el funcionario aclaró que los jefes y jefas de Estado resolvieron garantizar la continuidad de los proyectos que competen al Paraguay para no perjudicar a sus ciudadanos.

Sobre la decisión en el interior de Unasur, el presidente ecuatoriano Rafael Correa explicó que “hubo diferentes posturas”, y que una de las discusiones al respecto giraron en torno a que aún en ese organismo no estaba aprobado el protocolo de la Cláusula Democrática.

Al referirse a la no aplicación de sanciones económicas, Correa recordó que, en realidad “lo que perjudica al pueblo paraguayo son los golpistas y el mayor mal para pueblo paraguayo es dejarlo a la merced de esos golpistas”.

Los mandatarios de Ecuador, Venezuela y Bolivia llevaron a la reunión una propuesta de sanciones duras frente al golpe de Estado paraguayo, ya que, según comentó Correa, si no se actúa de manera contundente “éstas aventuras anti-democráticas continuarán en Paraguay y en nuestra América”.

Tras la suspensión, la Cancillería paraguaya informó que el gobierno “no acepta” la decisión y advirtió que “evaluará, conforme a sus legítimos derechos e intereses, su continuidad” en el bloque regional.

Federico Franco, ungido presidente tras el derrocamiento de Fernando Lugo, sostuvo que la suspensión ha “sido adoptada al margen de las disposiciones” del tratado constitutivo de la Unasur y se ha tomado “sin sustento jurídico alguno”.

Franco, se defendió al afirmar que la sanción “no afectará de ninguna manera la actividad comercial del país” e ironizó sobre la ausencia de Paraguay a las reuniones del organismo: “Nos permitirá ahorrar dinero en cócteles y banquetes”.

Según El Nacional, además, Franco calificó de “ilegales e ilegítimas” las sanciones de Mercosur y Unasur, ya que se tomaron “sin observar el debido proceso y sin concederle oportunidad para la defensa” –¡vaya observación luego del proceso que lo llevó a la presidencia paraguaya!-. El actual presidente de Paraguay confirmó que su gobierno “promoverá las acciones que correspondan al amparo del derecho internacional”.

Sobre el tipo de sanción del Mercosur y Unasur contra Paraguay, el presidente venezolano Hugo Chávez expresó: “me parece muy buena esa decisión de no hacer nada que afecte al pueblo noble y heroico del Paraguay”. El Nacional de Caracas resaltó que el bolivariano dijo: “Detrás del Congreso paraguayo está la mano del imperio. Por eso el ingreso de Venezuela a Mercosur es una derrota para la burguesía”.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, explicó que se suspendió a Paraguay hasta que se lleve a cabo un “proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular en elecciones libres y democráticas”.

Además, en la apertura de la Cumbre de presidentes, Fernández argumentó -desde el punto de vista legal, desde la acción parlamentaria y desde la valoración política- por qué se cataloga sin duda alguna como “golpe de Estado” a lo acontecido el 22 de junio en Paraguay.

También adelantó que la posición argentina –en lo previo a las deliberaciones- era sancionar políticamente a Paraguay, pero no hacerlo en lo económico, ya que eso implicaría un castigo y costo para el pueblo paraguayo. La mandataria fundó esa

posición, además, en la coherencia de “nuestros países” que “hemos criticado” a quienes apelaron y sostienen económicas que no hacen más que maltratar la calidad de vida del pueblo.

Respecto de la no sanción económica, el paraguayo Diario Popular rescató que “los 680 millones de dólares del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur seguirán llegando a Asunción, a pesar de la suspensión”. En otro tono, TN Press, de Ciudad del Este, afirmó que “resignados a que los traten como ‘el niño difícil’, el gobierno y la clase empresarial (paraguayos)” cerraron “filas ante la suspensión temporal del bloque”.

Aunque no fue el tema que salió a la luz, pero sin dudas tampoco es ajeno a los y las mandatarias regionales, la condena al golpe de Estado en Paraguay es defensa de la democracia, pero también defensa de la soberanía y va en contra las nuevas formas de dominación.

La periodista Stella Calloni, publicó en el diario mexicano La Jornada, una investigación titulada “Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay”. En el texto, la analista internacional argentina afirma que “mientras se realizaba el juicio político ‘express’ contra el presidente democráticamente elegido en Paraguay, Fernando Lugo”, diputados paraguayos “se reunían con militares de Estados Unidos, para negociar la instalación de una base militar en el Chaco, un territorio extenso y despoblado en ese país”.

Según fuentes del ABC Color, el más poderoso complejo mediático de la derecha en Paraguay y clave en la destitución del presidente Lugo, “el diputado José López Chávez del grupo disidente del Partido Colorado, la UNACE, encabezado por el golpista general Lino Oviedo confirmó que dialogó con jefes militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar las bases, aunque el tema está siendo analizado por el Pentágono”.

Calloni afirma que el legislador, en diálogo con una radio local, afirmó que “es necesario” instalar estas bases ya que, según su apreciación, Bolivia “constituye una amenaza para Paraguay debido a la carrera armamentista que desarrolla”.

La periodista analiza que estos avances en la apertura a la militarización estadounidense “podría ser una de las causas de la rapidez con que se sacó a Lugo del medio, por los compromisos con el Mercosur y la Unasur, lo que no hubiera permitido avanzar en este proceso de bases”.

Calloni recordó que Lugo pudo evitar un desembarco anterior aludiendo a los compromisos regionales de su país, pero que desde antes de la asunción del ahora derrocado presidente existían autorizaciones al libre desempeño de militares enviados por Washington a la región. De hecho, “los militares del Comando Sur, han marcado el territorio que está sobre el extenso Acuífero Guaraní, uno de los más grandes de agua potable del mundo ubicado en la Triple Frontera que tiene Paraguay con Argentina y Brasil”.

Segunda advertencia a América Latina

Por Frida Modak

El golpe de Estado que se ha consumado en Paraguay es una nueva voz de alerta a los pueblos latinoamericanos, la primera fue el golpe de Estado en Honduras y esta vez no debe permitirse que la gravedad de lo ocurrido ahora se diluya como sucedió en el caso hondureño.

Con otra modalidad, para evitar una reacción similar a la que provocó el golpe de Honduras, ahora se convocó a una sesión del parlamento paraguayo para discutir un llamado “libelo acusatorio” contra el presidente Lugo, en vez de falsificar una renuncia como se hizo en relación al presidente Zelaya.

Más allá del “show” tenemos que entender que los grupos de poder del llamado mundo desarrollado no van a respetar nada, ni constituciones, ni parlamentos ni mucho menos los derechos de los pueblos porque su objetivo es salir de la crisis que ellos mismos han creado.

El “motivo”, si así se lo puede llamar, que habría originado el conflicto no puede ser más falso. La disputa por la tenencia de la tierra en Paraguay no sólo es antigua sino que es permanente porque los “influyentes” no cejan en su propósito de apropiarse de ella.

Quien haya estado en Paraguay aunque sea un par de días, habrá leído en la prensa los detalles del conflicto por la tierra de ese momento. En el caso actual hay casualidades reveladoras, las tierras eran de uno de los hombres más ricos e influyentes de ese país. Desde luego fueron “adquiridas” durante la dictadura de Stroessner y resulta que de la matanza de campesinos que hicieron los policías enviados a desalojarlos se responsabilizó de hecho al presidente Fernando Lugo, en vez de investigar lo actuado por el jefe de la policía.

Los motivos reales del golpe de Estado también han ido quedando al descubierto. Las transnacionales tienen la mirada puesta en Paraguay, en sus tierras, ríos y demás recursos naturales.

Ricos, pero pobres

Paraguay se cuenta entre los países pobres, sin embargo su territorio guarda codiciadas riquezas y eso es lo que está en el fondo de las situaciones que le ha tocado enfrentar a sus habitantes, desde guerras a largas dictaduras.

Es un país que no tiene costa marítima, pero sus dos ríos principales, el Paraguay y el Paraná llegan al Océano Atlántico y tiene puertos francos en el río Paraná. El río Paraguay divide al país en dos regiones, la Oriental y la Occidental o Chaco.

La primera abarca el 39 por ciento del territorio del país y allí vive el 97.3 por ciento de los habitantes. La Occidental comprende el 61 por ciento del territorio y allí habita el 2 por ciento de la población.

Pero la mayor riqueza está en las reservas de agua dulce del llamado Acuífero Guaraní, que cubre un millón 190 mil kilómetros cuadrados, que comparte con zonas de Brasil, Uruguay y Argentina.

Se estima que este acuífero contiene 5 mil kilómetros cúbicos de agua, con lo que es capaz de abastecer a la población mundial actual, 6 mil millones de personas, durante 200 años.

En abril de este año, el gobierno del Presidente Lugo anunció que realizaría un inventario de los recursos naturales del país, para lo cual se formó un grupo de trabajo cuyo objetivo inmediato era valorizar e inventariar todos los bienes naturales para ir construyendo una visión común para su uso a fin de que la sociedad se beneficiara de ellos, según señalaron los ministros del Ambiente y de Planificación.

Los resultados o avance de este inventario no han trascendido, pero en la reunión cumbre Río+20 realizada hace pocos días en Río de Janeiro, los representantes de Paraguay pidieron soberanía sobre los recursos naturales.

El canciller Jorge Lara Castro señaló: “Abogamos por una integración energética solidaria basada en la soberanía de los

recursos naturales en nuestros países y por una transferencia de tecnologías limpias que contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos”.

Responsabilizó al modelo económico de la crisis mundial debido a que “no ha dado prioridad a la vida y la naturaleza sino a los mercados”. Sostuvo que la naturaleza no puede ser tratada como mercancía sujeta a las leyes del mercado.

Más adelante manifestó que “Sudamérica abastece al mundo pero gran parte de la población sufre, pasa hambre y vive en condiciones de extrema pobreza”, agregó que la región está ante el “desafío de la concreción histórica que involucra la recuperación soberana de los recursos naturales y energéticos para avanzar hacia la soberanía”.

No resulta casual, entonces, que el golpe de Estado se produjera un par de día después y que Jorge Franco, que asumió como nuevo presidente dijera que va a utilizar la energía de las hidroeléctricas de Itaipú y Yaciretá para crear industrias y crear empleos para que los paraguayos no tengan que buscarlos en otros países.

Contragolpe de Unasur

Por América XXI

La Unión de Naciones Suramericanas suspendió a Paraguay como miembro pleno hasta que se normalice el sistema institucional, quebrado tras el golpe a Fernando Lugo. Quedaron desechadas las sanciones económicas. Fue una reacción política acordada trabajosamente con aquellos países que pedían medidas más severas. El cerco político sobre el nuevo régimen busca acompañar la resistencia popular interna hasta obligar a dar marcha atrás con el golpe. Federico Franco, reemplazante de Lugo, asegura que, por fin, Paraguay dejó de estar atado a una región que “entorpece” su desarrollo. La celeridad con la que Unasur envió a sus cancilleres a Asunción permitió exponer el golpe parlamentario.

Habrà sanción política pero no económica para el régimen paraguayo que derrocó al presidente Fernando Lugo. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en consonancia con el Mercosur, optó por una respuesta ejemplificadora que no afecte la situación económica y social de uno de los dos países más pobres de la región. Pese a que se hicieron públicas las diferencias y contradicciones entre los gobiernos, los presidentes suramericanos reaccionaron con celeridad para responder a una ruptura institucional de consecuencias aún impredecibles.

La ciudad argentina de Mendoza albergó, en menos de 20 horas, dos cumbres regionales: la reunión semestral del Mercosur, en agenda desde hacía varios meses, y la reunión extraordinaria de Unasur, convocada de urgencia para tratar el golpe parlamentario en uno de sus Estados miembros. La Cumbre fue el corolario de una rápida reacción de Unasur, que incluyó una reunión convocada para el mismo día en que comenzó el juicio político que destituyó a Lugo (22 de junio), con el propósito de encontrar una salida que evite la ruptura del orden democrático, pero que no pudo arribar a un acuerdo.

Los dos bloques regionales –con realidades bien diferentes– acordaron criterios similares e incluso conformaron una comisión común que se encargará de seguir la evolución de la crisis abierta tras el golpe contra Lugo. Los presidentes decidieron “suspender en sus atributos políticos a Paraguay hasta tanto se restablezca el orden institucional, con un presidente electo en elecciones limpias y democráticas”. El calendario electoral paraguayo plantea elecciones para el 23 de abril de 2013 y la asunción del nuevo mandatario para el 15 de agosto.

La suspensión implica la limitación en la participación de los órganos y la pérdida de los derechos de voto y veto, y del derecho a participar en los órganos del Mercosur en los términos del Protocolo de Ushuaia. La suspensión no debe producir perjuicio alguno al pueblo paraguayo, subrayaron los cancilleres. El documento final esgrime el “compromiso con el espíritu y los principios democráticos suscritos en Unasur, Mercosur y la Celac”, e invoca “el papel crucial de Unasur para contrarrestar los intentos contra la democracia”.

Dos criterios

El debate de los presidentes y cancilleres de Unasur, reunidos en Mendoza, evidenció al menos dos líneas de acción frente a la crisis paraguaya: los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, propiciaban sanciones contundentes, que aislaran definitivamente al régimen paraguayo. El modelo a seguir era el antecedente de Venezuela, que tres días antes había cortado el envío de petróleo a Asunción. Finalmente se impuso la tesis de Brasil y Argentina: castigar políticamente al nuevo gobierno paraguayo, pero sin cercenar la posibilidad de acceder a productos o dinero que ponga en riesgo a la población.

La presidente Cristina Fernández de Kirchner planteó esta última postura en el inicio mismo de la cumbre, cuando sostuvo que “Argentina no impulsa ni apoya sanciones que afecten al pueblo paraguayo, porque muchas veces las sanciones de este tipo las termina pagando el pueblo”. El presidente Correa alertó sobre la gravedad de los sucesos en Paraguay y pidió, en consecuencia, sanciones contundentes. Pero el presidente Morales fue más allá aún y planteó, a su turno, imponer una sanción económica contra el gobierno de Paraguay. Para el mandatario boliviano, una declaración política reconoce en forma indirecta la ruptura del orden democrático de un país de Suramérica.

Finalmente, Mercosur y Unasur acordaron la línea de acción que iba en consonancia con lo que había sugerido el destituido

Lugo. “A este gobierno se le va a hacer muy difícil atender todos los problemas sin contar con el apoyo internacional”, razonó. En varias entrevistas que concedió a medios latinoamericanos, el ex obispo alertó que “con este golpe no pierde sólo Paraguay, pierde la región”. El mandatario destituido se mostró esperanzado de que “el respaldo de países, bloques, pueblos y partidos de la región, sumado a la indignación popular en Paraguay, hace que el nuevo gobierno tenga que repensar lo que hizo, razonar y restituir al presidente”.

Madurez y confianza

Diez días antes del golpe contra el presidente Lugo, Asunción había sido sede del Consejo Suramericano de la Defensa (CDS), organismo que reúne a los ministros del área de los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas. Allí, en la capital paraguaya, se analizó el Registro de Gastos de Defensa, un documento presentado un mes antes en la ciudad de Bogotá. Era la primera vez que los países suramericanos compilaban oficialmente información sobre las erogaciones que realizan en materia de Defensa. La idea es que cada gobierno remita al Centro de Estudios Estratégicos –con sede en Buenos Aires- detalles de sus gastos. Este instituto se encarga de procesarlos, analizarlos y elaborar documentos para presentar a los demás gobiernos.

Unasur fue creada en mayo de 2008. En este corto tiempo mostró reflejos políticos importantes para resolver graves asuntos internos de los países miembros (desestabilización en Bolivia e intento de golpe en Ecuador, además de lo ocurrido en Paraguay) o en problemas bilaterales, como el que mantuvieron en 2010 Venezuela y Colombia.

El mayor logro del bloque suramericano –integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela– es la institucionalidad, a través de Consejos de Ministros que atienden los asuntos más delicados de la integración. Unasur tiene, además del CSD, otros siete consejos: Salud, Desarrollo Social, Infraestructura y Planeamiento; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación; Drogas; Economía y Finanzas; y Energético.

Unos días después de la reunión del Consejo Suramericano de la Defensa, el ex ministro venezolano Alí Rodríguez Araque asumió como secretario general de la Unasur. La ceremonia oficial se realizó en Bogotá, el 11 de junio, durante un acto en el que participaron los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Paraguay, Fernando Lugo, a cargo de la presidencia temporaria del bloque regional. Fue el último viaje al exterior que realizó el mandatario, que 10 días más tarde sería víctima de un golpe.

Otro golpe de Estado en América Latina

Por Marco A. Gandásegui

El golpe de Estado ejecutado por la derecha terrateniente del Paraguay contra el presidente Lugo dejó las mismas huellas que el derrocamiento en 2009 del presidente Zelaya en Honduras. Por un lado, el rastro de sendas oligarquías que gobernaron a través de dictaduras militares por gran parte del siglo XX. Por el otro, las heridas de la intromisión abierta por parte de EEUU que llevó de la mano a los militares criollos para que respaldaran las acciones de una oligarquía golpista. Incluso, la trama norteamericana fue realizada en alianza con los partidos liberales tradicionales de ambos países. Una coincidencia que refleja la frágil constitución política de los dos países.

En Paraguay la oligarquía terrateniente trabaja en estrecha relación con el gran capital agrario brasileño que experimenta uno de sus auges económicos más espectaculares de su historia. Incluso, uno de las causas por las cuales fue procesado en forma sumaria el presidente Lugo fue por las protestas de los campesinos que están siendo despojados de sus tierras por capitalistas agrarios brasileños que operan en Paraguay. En Honduras, pasó algo similar. En ambos casos, EEUU colaboró en el golpe y en el apoyo de las maniobras diplomáticas posteriores al golpe. De manera aún más rápida que en Honduras, en el caso de Paraguay, los gobiernos latinoamericanos rechazaron la arremetida de EEUU. De una vez, los latinoamericanos convocaron las instancias políticas de la región como UNASUR, CELAC y el MERCOSUR. Gobiernos de derecha como México, Chile y Panamá (, incluso, ¡Honduras!) condenaron el golpe. La mayoría retiró sus embajadores de Asunción, capital paraguaya, encabezados por los países del ALBA. Paraguay y Honduras se diferencian radicalmente de los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador que también fueron objeto de golpes planeados en EEUU. Los cinco países tenían en común que sus gobiernos progresistas no tenían raíces en organizaciones con largas trayectorias. Sin embargo, los tres últimos movilizaron con rapidez el apoyo popular que les permitió dar el contra-golpe en el momento necesario. Según Jean-Guy Allard, en 2010 Wikileaks ya señalaba como EEUU y el vice-presidente Franco conspiraban para derrocar a Lugo. Según un informe de la Embajada (de EEUU) en Asunción mencionaba el interés de algunos políticos en acortar el gobierno de Lugo. "Persisten los rumores de que el ex general golpista Lino Oviedo, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, y/o el vicepresidente Federico Franco, continúan buscando formas de reducir el plazo de Lugo", informaba el cable filtrado por WikiLeaks. El mensaje secreto emitido por la Embajada y dirigido al Departamento de Estado, también hablaba de la existencia de "tiburones políticos" que rodean al presidente. "Creemos que se encuentra bajo una gran presión", dice para luego abrir la posibilidad de que algunos podrían conseguir que renuncie o que enfrente un juicio político, indicaba. Esto "puede convertirse en una posibilidad cada vez mayor".

Según el Guardian, diario de Manchester, Inglaterra, los liberales con quienes Lugo se alió para presentar su candidatura, estaban "...molestos porque la mayoría de los miembros del gabinete era de izquierda. Según el mismo diario inglés, "la división política se había convertido en un serio problema ya que Lugo públicamente reconoció recientemente que él iba a apoyar a los candidatos izquierdistas en futuras elecciones".

Según el diario, es obvio que los "crímenes verdaderos" del presidente Lugo tenían que ver con los sectores políticos con que se estaba aliando. Aún cuando Lugo se encontraba cercado por los partidos tradicionales, la derecha temía que podría levantar una alternativa electoral con los sectores progresistas en Paraguay. En el fondo, el análisis de la oligarquía implicaba que Lugo se sentía más comprometido con "las masas trabajadoras y pobres del país. Al igual que en otros países de la región, los pueblos escogen el socialismo como su forma de expresión política".

En 1973 los golpistas chilenos montaron un espectáculo en el Congreso previo al bombardeo del Palacio presidencial y asesinato del presidente Allende. En 2009 los militares sacaron de Honduras en pijamas a Zelaya y después lo destituyeron en el Congreso. En Paraguay, EEUU y la oligarquía amarraron todos los cabos y fueron directamente al Congreso.

Según los diputados, los delitos de Lugo eran que le permitió a los partidos de izquierda reunirse en una base militar. Además, permitió a 3,000 campesinos sin tierra invadir una granja de soya, propiedad de una empresa brasileña. Los diputados también lo acusaron de no capturar a varios miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Por último, fue

condenado en un juicio sumario por firmar un protocolo internacional sin la aprobación del congreso.

Es probable que MERCOSUR, en su próxima reunión, suspenda a Paraguay hasta que restituya al presidente Lugo. Igualmente, UNASUR alejará a ese país de sus reuniones donde se definen las estrategias defensivas de la región (que no incluye a EEUU). A su vez, CELAC congelará la participación de la nueva dictadura paraguaya. La OEA, que fue portavoz de EEUU en la crisis hondureña, aún no se pronuncia en torno al golpe. El pueblo paraguayo sabrá cómo recuperar su democracia. Corresponde a los pueblos de la región solidarizarse con sus luchas.

Brasil y Paraguay

Por Isaac Bigio

En todas las crisis de los países americanos, el rol de Washington es siempre crucial. Sin embargo, en el caso paraguayo Brasilia puede jugar un papel tan o hasta más clave.

Durante el siglo XX Brasil fue el principal socio de EEUU en las dos guerras mundiales y en su estrategia panamericanista, aunque en las últimas dos décadas la mayor república latina ha buscado desarrollar su propia hegemonía regional, aprovechándose de la creciente oposición de nuevos gobiernos nacionalistas sur y centro americanos ante la Casa Blanca y a que esta última encuentra nuevos contrapesos en Rusia, China y otros países del viejo mundo.

Brasil lideró las fuerzas extranjeras de intervención en Haití y luego asiló al presidente hondureño depuesto Mel Zelaya en su embajada siendo el eje de las sanciones contra el golpe en esa nación.

Paraguay es el país históricamente más influenciado por Brasil, donde se le considera casi como uno de sus Estados. Durante el siglo XIX los cariocas se expandieron hacia el oeste arrebatando sendos territorios a sus siete vecinos hispánicos. Uruguay libró su última guerra de la independencia no contra una potencia ibérica sino contra el Imperio brasileño. Paraguay es el país que más sufrió el expansionismo del dictador brasileño y latinoamericano más longevo (Pedro II), quien dirigió la mayor guerra de exterminio postcolonial americana cuando en 1864-70 Paraguay perdió la mitad de superficie y el 90% de su población varonil adulta.

Los colorados, el partido que ha gobernado la mayor parte de la historia paraguaya luego de esa guerra (y que ha sido el motor de la deposición de Lugo) han sido tradicionales aliados de Brasil. Cuando el más añejo dictador suramericano del siglo XX (Alfredo Stroessner) fue depuesto, él se refugió en Brasil y fue protegido por Henrique Cardoso, quien se proclamaba como un presidente centro izquierdista.

Brasil tiene grandes intereses en ese país, en su gran central eléctrica y en sus agroexportaciones, además de tener decenas de miles de ciudadanos suyos residiendo en Paraguay.

A diferencia de Honduras, distante país centroamericano con pocos vínculos humanos y comerciales con Brasil, el gobernante PT no promueve el bloqueo ni asila al presidente depuesto; ha adoptado una línea menos dura que la de la Alba o Argentina aunque suspendiendo a Paraguay del Mercosur y así haciendo lograr entrar a dicho bloque a Venezuela (pues el parlamento paraguayo vetaba su ingreso).

El golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo

Por Alejandro Torres Rivera

Primero ocurrió el Golpe de Estado en Venezuela contra el Presidente constitucional Hugo Chávez Frías en 2002; luego le siguió el referéndum secesionista en Bolivia en 2006, cuyo propósito era fracturar el país en dos partes. De esa forma, los sectores oligárquicos pretendían crear un espacio político y territorial para su propio beneficio en lo que son las regiones petroleras, ganaderas y bosques localizados en la porción oriental del país, todo ello bajo el palio de la creación de unas "autonomías regionales", conformadas al margen de aquella definida en la Constitución de Bolivia.

Luego ocurrió el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Consumado el mismo y deportado del país su presidente, se aguardó por parte del gobierno usurpador sostenido por una Junta Militar, a que expirara el término constitucional del presidente depuesto, para dar paso a unas nuevas elecciones. Sin la participación de Zelaya, ante los ojos de la comunidad internacional, organismos como la OEA permitieron la instauración de un gobierno de apariencia democrática como es el de Porfirio Lobo, revocando el decreto de suspensión de Honduras del organismo internacional.

Más adelante sigue la frustrada intentona de Golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa en Ecuador en el año 2010. Como en el caso de Venezuela, la movilización del pueblo y la fidelidad de la mayoría de los integrantes de la Fuerzas Armadas al orden constitucional, evitaron un desenlace similar al ocurrido en Honduras.

Hoy nos enfrentamos a otra modalidad golpista en América Latina: el Golpe de Estado Parlamentario contra el presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo.

En todos estos escenarios, uno de los elementos comunes es la presencia de la mano siniestra de Estados Unidos a través de sus embajadas y estamentos militares, junto a los sectores oligárquicos nacionales en la planificación y ejecución de los sucesos.

Quien pensaba que los Golpes de Estado en América Latina eran cosa del pasado erró. Quien afirmaba que con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos abandonaría su injerencia en los asuntos internos de nuestros países, también erró. Lo único que ha cambiado es la forma de pretender echar abajo gobiernos que no sigan las pautas dictadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en protección de sus intereses geopolíticos. En el pasado y presente de nuestros pueblos, sigue eslabonándose dentro del marco de sus luchas la voluntad de avanzar en el rescate de nuestros derechos soberanos; el forcejeo por una mayor integración económica y política; la afirmación de un nuevo tipo de democracia. Se trata de una democracia participativa que garantice el acceso de nuestras poblaciones, no sólo a decidir quiénes representan en forma más adecuada nuestros verdaderos intereses; sino sobre todo, la voluntad por darle una mayor participación a estos sectores populares en los beneficios devengados de la explotación de sus recursos naturales. Esa es la hoja de ruta que hoy se afirma en la construcción de una nueva América Latina.

Paraguay es una nación suramericana que ubica en su región central oriental. Como país, no tiene costas que le brinden directamente acceso al mar. No obstante, cuenta con un inmenso sistema de ríos navegables a través de los cuales los buques y embarcaciones logran acceso al Océano Atlántico. Paraguay tiene una población relativamente pequeña para su extensión territorial, la cual fue estimada en 2011 en 6, 340,000 habitantes. Su superficie abarca 406,752 Km.2, lo que es algo más de 43.6 veces el tamaño de Puerto Rico. Si bien obtuvo su independencia de España el 15 de mayo de 1811, no fue sino hasta el 10 de septiembre de 1880 que la misma fue reconocida. En su subsuelo ubica el mayor acuífero de América Latina y ciertamente uno de los mayores en el mundo. Es además, una de las zonas más ricas en biodiversidad. Es también uno de los principales exportadores en América del Sur de energía eléctrica, el cuarto productor mundial en soja y el noveno en exportación de carnes. Paraguay, no obstante su desigual distribución de la riqueza, se considera la segunda mayor economía en expansión en 2010 el mundo, luego de Catar y ciertamente la mayor en América Latina.

En 1821 Paraguay sufrió los efectos de lo que ha venido a conocerse como la "Guerra de la Triple Alianza". En ella Argentina, Brasil y Uruguay, incitados y financiados por Inglaterra, invadieron el país. De acuerdo con Julio José Chiavenato en su libro "Genocidio Americano: la Guerra del Paraguay" (1984), los efectos de esta guerra fueron tan horribles para Paraguay que de una población existente en el país al comienzo de la guerra, estimada en 800,000 personas, murieron 606,000; es decir murió el 75.75% de su población. De 194,000 sobrevivientes, sólo 14,000 fueron hombres, de los cuales apenas 2,100 sobrepasaban los 20 años de edad. Ese es el precio que Inglaterra y sus aliados del patio le impusieron a este pueblo en aras de sus derechos de navegación y concesiones comerciales en los ríos navegables paraguayos. En la Guerra, Paraguay, además, el país perdió casi la mitad de su territorio, repartido entre los países vencedores. Entre los efectos económicos de la guerra, Paraguay vino obligado a pagar una inmensa fortuna a Inglaterra que fue quien costó la intervención de la Triple Alianza. El país, bajo tales circunstancias, se desarrolló en adelante de espaldas a sus vecinos.

Durante el siglo XX, las políticas de Paraguay estuvieron entrecruzadas por los efectos de otros dos conflictos: primero, la Guerra del Chaco sostenida con Bolivia; segundo, una Guerra Civil en 1947. Esta última trajo, en adelante, sucesivos gobiernos militares hasta que finalmente, en 1954, el Dictador Alfredo Stroessner llegó al poder. Stroessner fue eventualmente el fue candidato a la presidencia bajo la bandera el Partido Colorado y así, sucesivamente, dirigió el país con mano de hierro hasta 1989 cuando otro Golpe de Estado, pondría fin a su dominio de más de tres décadas en la vida política del Paraguay.

El Partido Colorado, ya depuesto Stroessner, continuó al frente el gobierno. Fue éste el que impulsó en junio de 1992 una nueva Constitución. En 1993 Juan Carlos Wasmosy fue electo por dicho Partido como el primer presidente civil del país en más de 40 años. Su mandato, sin embargo, no estuvo exento de asonadas golpistas como fue la del Jefe de las Fuerzas Armadas, General Lino Oviedo, que llevó al país a otro periodo de inestabilidad política. En las elecciones de 20 de abril de 2008, tras más de sesenta años de control en el país, en una elección histórica, una coalición de fuerzas políticas muy amplia, llevó a la Presidencia del país a un ex Obispo de la Iglesia Católica, Fernando Lugo terminando así la continuidad del Partido Colorado en la presidencia de la República.

Desde la llegada al poder de Fernando Lugo, la oligarquía en este país ha hecho cuanto está a su alcance para torpedear las iniciativas incluidas en el programa de gobierno que le llevó a la presidencia. Se trata de iniciativas donde se impulsan reformas que ciertamente puede decirse no son lo radicales que un país como Paraguay necesita, sobre todo en un contexto donde el 2% de su población posee el control de más de 80% de la tierra. De acuerdo con datos ofrecidos por la CEPAL en 2011, la pobreza en Paraguay alcanza al 53% de la población, de la cual el 19.4% se sitúa en pobreza extrema, llevando a Paraguay hoy a ser el país el mayor abismo entre pobres y ricos a la hora de analizar la distribución de la riqueza en América Latina.

Durante su gobierno, Lugo intentó atender problemas que afectan las comunidades indígenas, por ejemplo, creando programas de asistencia alimentaria para ésta logrando incorporar al mismo al menos 31,454 adultos. Esta cifra, si bien podría parecer muy pequeña a la hora de analizar el impacto de las transformaciones en países como Bolivia, Venezuela o Ecuador, por mencionar algunos, resulta un gran salto en un país donde jamás antes un programa así había tenido la posibilidad de desarrollarse en apenas dos años.

Se ha indicado que el Golpe contra Lugo es un Golpe Parlamentario. En efecto, lo es. Allí se ha recurrido a una disposición de la Constitución, específicamente su Artículo 225, que permite a la Cámara de Diputados establecer la base legal para enjuiciar a un Presidente, no porque haya cometido algún delito o haya incurrido en conducta que represente una amenaza para el país o su soberanía, sino sencillamente, a base de lo que a juicio de sus juzgadores suponga, que el Presidente, Vice Presidente, Ministros u otros funcionarios no estén desempeñando, como ellos esperan, las funciones de su cargo. Dado este paso, le corresponde entonces al Senado llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia.

Así, en un juicio sumario en el cual Lugo no tuvo siquiera la oportunidad de contar con tiempo suficiente para enfrentar las alegaciones en su contra; sin que tuviera plena y efectiva oportunidad de estar debidamente representado en el juicio político en su contra, el Senado paraguayo le destituyó designando en su lugar al Vice Presidente del país, Federico Franco. Es por eso que organismos tales como la obsoleta OEA se niega a utilizar el término "Golpe de Estado" bajo el fundamento de que la sucesión presidencial se ha producido conforme al ordenamiento legal prevaleciente; es decir, se valida así la farsa de juicio político llevado a cabo en contra de Fernando Lugo, aunque en apariencia el Organismo tome excepción de la forma asumida en el proceso.

Tanto los países agrupados en UNASUR, como los países del ALBA, los ministerios de Relaciones Exteriores de los países de América del Sur, Centro América, Cuba, entre otros, han hecho expresiones en abierto rechazo al Golpe de Estado Parlamentario contra el Presidente Fernando Lugo y han adelantado que tomarán medidas diplomáticas y económicas contra el gobierno usurpador del Federico Franco. Organizaciones no gubernamentales y distinguidas personalidades en América Latina también han dejado sentir su protesta y su denuncia por este atropello. El debate del asunto, además, será llevado al seno de la OEA donde este organismo regional tendrá, una vez más, la oportunidad de decidir, no como en el caso del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, si en sus políticas hacia los estados integrantes del Organismo, se respetará la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales; o sencillamente, si la OEA una vez más, será el sello de goma de las políticas injerencistas e imperialistas de Estados Unidos en este Hemisferio.

En Paraguay, de una vez por todas, se define hoy día el Rubicón de América Latina. De ahí la importancia del llamado del Presidente Fernando Lugo a concretar, desde la calle misma, el denominado “gabinete por la restauración democrática” en el cual, como ha indicado, caben “todas las fuerzas que quieren resistir al gobierno de Franco.”

FSA: Carta abierta al Presidente Fernando Lugo

[/Quito, 22 de junio de 2012/]

Compañero
Fernando Lugo
Presidente Constitucional del Paraguay
Asunción del Paraguay

Estimado Presidente:

Desde todos los países de Nuestra América nos hemos mantenido pendientes de los acontecimientos políticos que se han precipitado en Paraguay, que afronta hoy un nuevo golpe al delicado proceso de recuperación de la democracia y de transformación social que ha impulsado su gobierno junto al pueblo.

Consideramos que la decisión de destituirle de sus funciones que ha tomado la Cámara del Senado es ilegítima, pues vulnera principios, compromisos y procedimientos democráticos fundamentales y, especialmente, irrespeta la voluntad popular que se ha pronunciado masivamente por la continuidad de sus funciones y el cumplimiento del período para el que fue electo.

Hace menos de dos años, en agosto de 2010, Asunción acogió al IV Foro Social Américas. Se reafirmó ahí un compromiso continental con las luchas del pueblo paraguayo, con su búsqueda heroica de cambio en un país asolado por décadas de dictadura y su herencia estructural de empobrecimiento masivo para la mayoría, enriquecimiento espúreo de unos cuantos, corrupción e irrespeto a los derechos humanos, fragilidad institucional. Vimos un proceso de cambio en marcha, en medio de obstáculos y dificultades. Fue un intercambio fructífero, solidario y esperanzador. Su presencia y disponibilidad, en medio de los graves problemas de salud que afrontó en esos días, fue apreciada como un singular gesto de generosidad y como una metáfora del proceso que lidera.

Hoy nos declaramos en resistencia, junto al pueblo paraguayo y sus movimientos sociales, en defensa de la democracia. Le expresamos nuestra solidaridad y reafirmamos el compromiso con la recuperación plena de la democracia y la transformación profunda de la querida Patria Guaraní.

Solidariamente,

Secretaría del Consejo Hemisférico
Foro Social Américas

¡Somos todas Paraguay!

Llamado de acción de la Marcha Mundial de las Mujeres en solidaridad a Paraguay

[Marcha Mundial de las Mujeres - MMM](#)

La Marcha Mundial de las Mujeres se suma a la solidaridad internacional a las mujeres y al pueblo paraguayo en este duro momento de ataque a su proceso de construcción democrática. En el 22 junio, el presidente legítimamente elegido por el pueblo en 2008, Fernando Lugo, fue destituido tras un juicio político caracterizado como un Golpe de Estado Parlamentario, con apoyo masivo de los medios de comunicación vinculados a la oligarquía local. En el continente Américas ya hemos visto algo muy similar acontecer hace exactos tres años, en Honduras.

Llamamos las Coordinaciones Nacionales de la MMM a expresar su solidaridad y apoyo hacia la resistencia pacífica del pueblo paraguayo, en particular a las mujeres. Pedimos que se organicen acciones callejeras frente a sedes de nuestros parlamentos, gobiernos nacionales, así como frente a las representaciones diplomáticas de Paraguay, para exigir:

1. El NO-reconocimiento de Federico Franco como Presidente de la República, porque ha usurpado el cargo, manipulando la Constitución Nacional del Paraguay atropellando la institucionalidad democrática instalada desde el 2008;
2. El retorno inmediato del presidente Fernando Lugo a sus funciones presidenciales;
3. La adopción de sanciones políticas y comerciales mientras el gobierno legítimamente electo no sea restablecido;
4. La garantía al pueblo paraguayo del derecho de manifestarse en contra al golpe, derecho que está en permanente amenaza por parte de instancias como el Ministerio del Interior, la Policía y la Fiscalía.

Demandamos esclarecimientos sobre las muertes acaecidas en el distrito de Curuguaty el 15 de junio, hecho que fue manipulado para legitimar el juicio en contra Lugo. Exigimos una investigación transparente, con apoyo de misiones internacionales de derechos humanos, para que sea efectiva e imparcial y que permita que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.

Condenamos y denunciemos el accionar de los medios de desinformación masiva de Paraguay, que actúan con la intención de intoxicar las mentes y acallar la voz del pueblo y con ello pretenden infundir miedo para desmovilizar a la ciudadanía como en la época de la Dictadura de Stroessner y de los sucesivos gobiernos conservadores del partido Colorado.

Invitamos a todas a manifestarse en contra de esta agresión a los derechos del pueblo paraguayo y a difundir este pronunciamiento. Invitamos también a socializar informaciones producidas por el Frente de Resistencia del Pueblo Paraguayo: <http://paraguayresiste.com/> y por los medios populares como la Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm), la TV Alba (www.albatv.org) y la Minga Informativa de los Movimientos Sociales (www.movimientos.org)

¡Estaremos en marcha hasta que todas seamos libres!

CONAMURI ante el quiebre democrático de Paraguay

Las mujeres que integramos la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar cuanto sigue:

1. Denunciamos que en Paraguay estamos atravesando por uno de los momentos más duros del proceso de construcción democrática, debido al Golpe de Estado Parlamentario realizado de forma altamente irregular y carente de argumentos, donde se violaron todos los plazos procesales y las garantías constitucionales básicas de defensa al presidente Fernando Lugo.
2. Declaramos personas no gratas de por vida a los parlamentarios verdugos del país, por las terribles violaciones que gestaron este atropello a la voluntad popular y sostenemos que históricamente legislan en contra del pueblo y orientan todas sus acciones en detrimento del sector popular y a favor del capitalismo, que se traduce en el agronegocio, en defender los intereses de la oligarquía mafiosa y las corporaciones extractoras de bienes naturales.
3. No vamos a reconocer a Federico Franco como Presidente de la República, porque ha usurpado el cargo, manipulando la Constitución Nacional y atropellando la institucionalidad democrática instalada desde el 2008.
4. Condenamos el accionar de los medios de desinformación masiva que pretenden intoxicar las mentes y acallar la voz del pueblo y con ello pretenden infundir miedo para desmovilizar a la ciudadanía como en la terrible época de la Dictadura stronista y de los sucesivos gobiernos colorados.
5. Reconocemos la valiosa solidaridad internacional tanto de los movimientos sociales como la reacción inmediata de los gobiernos de la región. Hoy, en eras de la globalización del capital, se tiene un revés gracias a la globalización de la solidaridad y la esperanza construida por los pueblos desde la resistencia y la movilización como una herramienta para fortalecer la verdadera integración y la democracia.
6. Exigimos el inmediato esclarecimiento de las muertes acaecidas en el distrito de Curuguaty, mediante una investigación transparente con apoyo de misiones internacionales de derechos humanos, para que sea efectiva e imparcial y que permita que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.
7. Convocamos a todas las organizaciones campesinas e indígenas, y a la ciudadanía en general a nivel nacional e internacional a mantenernos en movilización permanente con acciones en contra del Golpe de Estado Parlamentario y por el restablecimiento del Proceso Democrático y a estar alertas ante los posibles atropellos nuestros derechos.

Por la resistencia de nuestro pueblo, seguimos en movilización permanente.

Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Movimientos Sociales hacia el ALBA

Apoyamos el ingreso de Venezuela al Mercosur y el desconocimiento al gobierno golpista del Paraguay

Las organizaciones y movimientos sociales que impulsamos un proceso de integración continental en Nuestra América valoramos como un acto histórico y de suma importancia para nuestros pueblos la incorporación de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), durante la 43 reunión de jefes de Estado de ese organismo regional, celebrada en Mendoza, Argentina.

En medio de la álgida coyuntura latinoamericana que vivimos, en la que la derecha más conservadora, con la anuencia del imperialismo norteamericano, insiste en frenar los distintos procesos populares, defensores de la autonomía y la independencia de la región, este bloque ha dado un paso firme al incluir como miembro pleno a la nación venezolana.

La entrada de Venezuela al Mercosur había sido obstaculizada a lo largo de seis años por los mismos actores que intervinieron en el golpe de Estado que en estos días estremeció al pueblo paraguayo y al mundo. Por tanto, el ingreso del hermano país, que acontecerá oficialmente el 31 de julio en Río de Janeiro, Brasil, consolida una posición común de solidaridad entre nuestros países y la unidad regional frente a las constantes estrategias desestabilizadoras.

En ese sentido, apoyamos también la decisión de desconocer el gobierno de Federico Franco y suspender a Paraguay del bloque, hasta las próximas elecciones del 2013. El rechazo al golpismo en el marco del Mercosur coincidió con los tres años del golpe de Estado en Honduras, acontecido el 28 de junio del 2009, lo que junto a otros sucesos, evidencia esa rearticulación de las elites de poder económico e imperial para volver al pasado de dictaduras. Por ello, como manifestamos en llamamientos anteriores, reiteramos nuestro compromiso con los sectores populares paraguayos que, siguiendo el ejemplo de hondureños y hondureñas, desde las calles, a partir de la organización y la movilización, intentan reconquistar el proyecto iniciado en 2008, cuando llevaron a la presidencia a Fernando Lugo y pusieron fin a más de 60 años de corrupción y represión.

Para la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, la acción de los países que conforman el Mercosur tiene el significado de la solidaridad y la responsabilidad con el momento histórico que transitamos en América Latina, al mismo tiempo que reafirma nuestra más enérgica voluntad de seguir adelante, por nuestra independencia y soberanía.

La unidad y la integración están en nuestro horizonte y son nuestro camino!

Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA

junio, 2012

CUBA DEBATE

Inicio » [Noticias](#), [Política](#) »

ALBA rechaza maniobra para destituir al Presidente Lugo en Paraguay

Publicado en: [Alternativa Bolivariana para las Américas \(ALBA\)](#)

En este artículo: [ALBA](#), [Fernando Lugo](#), [Golpe de Estado](#), [Paraguay](#)

21 junio 2012 |



Reunión de los países del ALBA. Foto: Archivo

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba-TCP, expresaron este jueves a través de un comunicado su **rechazo a la maniobra política de la derecha paraguaya** que busca la destitución del presidente de ese país, Fernando Lugo.

Este jueves, la cámara de diputados de Paraguay aprobó **con 76 votos a favor y uno en contra un juicio político** en su contra para tratar de vincularlo con los enfrentamientos registrados el pasado viernes en Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y seis policías.

Texto completo del comunicado:

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA

COMUNICADO ESPECIAL

Países del Alba rechazan maniobra de juicio político contra el Presidente del Paraguay Fernando Lugo.

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba-TCP, rechazamos la maniobra de los sectores de la derecha política del Paraguay, de iniciar un juicio político contra el Presidente constitucional de esta hermana República, Fernando Lugo.

Dicho juicio busca la destitución del Presidente Lugo, y la instalación de un Gobierno ilegítimo para retrogradar al Paraguay a las viejas prácticas políticas ya superadas.

*Desde el Alba-TCP reiteramos nuestro **apoyo al Gobierno democrático del Presidente Lugo**, que sólo puede ser cambiado con el voto del pueblo paraguayo que lo eligió.*

Llamamos al pueblo paraguayo a defender la democracia, reiterándoles que cuentan con el apoyo de América Latina y el Caribe.

*Por último, **exhortamos a todos los pueblos democráticos del mundo a respaldar la soberanía del pueblo paraguayo** y el desarrollo pacífico y democrático de esta hermana nación.*

Río de Janeiro, Brasil, 21 de junio de 2012

(Con información de AVN)

Comunicado oficial**UNASUR decide suspender a Paraguay**

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas Unasur, reunidos en la ciudad de Mendoza, República Argentina, en fecha 29 de junio de 2012, en sesión extraordinaria, en concordancia con la Decisión N° 25 de fecha 27 de junio del 2012, a los fines de considerar la situación política en la República del Paraguay, que condujo a la destitución de su Presidente Fernando Lugo.

Tomando en cuenta que el Tratado Constitutivo de Unasur establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad, económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros.

Reafirmando su compromiso con el espíritu y los principios democráticos suscritos en Unasur, Mercosur y la Celac.

Recordando el papel crucial de Unasur para contrarrestar los intentos contra la democracia; así como para promover la preservación de la institucionalidad democrática, el estado de derecho, el orden constitucional y la paz social de nuestros pueblos.

En conocimiento de los resultados de la Misión encomendada a los Cancilleres y al Secretario General de Unasur, que concurrieron a la República de Paraguay los días 21 y 22 de junio de 2012 para conocer in situ la situación planteada respecto al juicio político anunciado contra el Presidente Fernando Lugo.

Reafirmando el Comunicado que emitieron con fecha 22 de este mes, luego de intensas gestiones, constatando el incumplimiento del derecho al debido proceso y el no haberse cumplido con las garantías suficientes para el derecho a la defensa del Presidente sometido a juicio político.

Considerando que el incumplimiento del derecho al debido proceso y de las garantías para la defensa implica una clara violación de los principios y valores que sostienen el proceso de integración de los Estados Miembros de Unasur.

Atento que el Presidente Fernando Lugo venía ejerciendo la Presidencia Pro Témpore de Unasur.

Convencido que es vital para Unasur preservar la continuidad de su desarrollo institucional y el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore, decide:

1- Expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay, ejecutado mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció una clara violación del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de las mínimas garantías para su adecuada defensa.

2- Adoptar la decisión política basada en el tratado constitutivo de Unasur, de suspender a la República del Paraguay de participar en los órganos e instancias de la Unión, hasta tanto este Consejo revoque la suspensión.

3- Dar por concluido el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de Unasur por la República del Paraguay, de acuerdo al consenso alcanzado por los cancilleres en la Reunión que sostuvieron el 22 de junio de 2012 en Asunción.

4- Designar a la República del Perú para que asuma en la fecha la Presidencia Pro Tempore de Unasur, por un período de un año, brindándole todo su apoyo y firme voluntad de continuar afianzando juntos la consolidación de Suramérica como zona de paz, sustentada en valores y principios democráticos.

5- Promover la suspensión de la República del Paraguay en los foros y mecanismos de diálogo y concertación política e integración de la región, de acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos.

6- Conformar un grupo de alto nivel de Unasur para el seguimiento y evaluación de la situación en la República del Paraguay en particular dirigidas a la pronta normalización de su orden democrático institucional.

7- Reafirmar la solidaridad irrestricta con el pueblo paraguayo y velar para que los efectos de esta Decisión no causen perjuicios al pueblo paraguayo.

Declaración de parlamentarios europeos sobre Paraguay

[/Bruselas, 28 de Junio del 2012/]

A la atención de,
Alta Representante de la UE para los Asuntos Exteriores, Catherine Ashton
Representantes de los países europeos frente a la UE.

Nosotros, diputados del Parlamento Europeo, queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente al Golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido, Fernando Lugo.

El Presidente Fernando Lugo, fue destituido por medio de un juicio político promovido por el Congreso de Paraguay - mayoritariamente controlado por la oposición - otorgándole menos de 24h para prepararse y tan sólo dos horas para presentar su defensa. Ninguna prueba que justificaba las acusaciones fue presentada en el libelo acusatorio por los acusadores [1]. Los abogados del presidente pidieron más tiempo para poder presentar una defensa adecuada, pero esta fue negada.

Al no respetar el debido proceso, es claro que las esenciales normas democráticas fueron violadas y esto nos hace creer que lo que se llevó a cabo en Paraguay fue en efecto un Golpe de Estado Parlamentario. La destitución del presidente había sido planeada desde tiempo atrás por la oposición, quienes estaban tan solo esperando una oportunidad para llevarlo a cabo (según revelan los informaciones enviadas en el 2009 desde la embajada de EE.UU. en Paraguay [2]). El Vice-Presidente de F. Lugo, quién fue nombrado inmediatamente por la oposición parlamentaria como "nuevo presidente" había amenazado de utilizar el mismo procedimiento de juicio político, bajo justificaciones varias.

La UNASUR, la OEA, el MERCOSUR, la CELAC y los países del ALBA, han condenado el juicio político contra el presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo. Como parlamentarios europeos, nos unimos a esta condena, y llamamos a nuestros respectivos gobiernos y a la UE a tomar las medidas necesarias para suspender los acuerdos de cooperación con el Paraguay, hasta que no vuelva el orden democrático y el Estado de Derecho.

Invitamos por lo tanto a los gobiernos europeos, que se han negado a condenar este Golpe de Estado, a reconsiderar esta posición inaceptable para la democracia, y en particular para países como Paraguay que han vivido durante tantos años bajo regimenes autoritarios. Hacemos también un llamado a la Comisión Europea para que condene ejemplarmente este Golpe de Estado, y suspenda cualquier tipo de cooperación e inicie una investigación bajo al régimen del sistema de facilidades arancelarias SGP.

Manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo paraguayo, que se encuentra resistiendo pacíficamente frente a esta ruptura violenta del Estado de Derecho.

Pedimos a la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, que condene fuertemente este ataque a la democracia, y que envíe una misión internacional para clarificar las responsabilidades en la masacre de Curuguaty. Esperamos que la Unión Europea tome todas las medidas necesarias para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y la Soberanía Popular, y apoye las organizaciones regionales que rechazan el gobierno de facto y buscan una solución pacífica a esta crisis.

Saludo cordial,

Jürgen Klute, MEP, Germany
Gianni Vattimo, MEP, Italy
Jean-Luc Mélenchon, MEP, France
Marisa Matias, MEP, Portugal
Martina Anderson, MEP, Ireland
Nikolaos Chountis, MEP, Greece

Ivo Vajgl, MEP, Slovenia
Amelia Andersdotter, MEP, Sweden
Barbara Lochbihler, MEP, Germany
Lothar Bisky, MEP, Germany
José Bové, MEP, France
Bart Staes, MEP, Belgium
Conerlia Ernst, MEP, Germany
Raul Romeva, MEP, Spain
Gabriele Zimmer, MEP, Germany
Ana Miranda, MEP, Spain
Helmut Scholz, MEP, Germany
Satu Hassi, MEP, Finland
Sabine Lösing, MEP, Germany
Francisco Sosa Wagner, MEP, Spain
Alda Sousa, MEP, Portugal
Marie-Christine Vergiat, MEP, France
Yannick Jadot, MEP, France
Martin Häusling, MEP, Germany
Miloslav Ransdorf, MEP, Czech Rep.
Franziska Keller, MEP, Germany
Jean Lambert, MEP, United Kingdom
Ulrike Lunacek, MEP, Austria
Catherine Grèze, MEP, France

Notas

[1] Cf, Libelo Acusatorio: <http://www.ultimahora.com/adjuntos/...>

[2] Wikileaks: <http://wikileaks.org/cable/2009/03/...>

